**INFORME ASESORÍA EXTERNA SENADOR JUAN ANTONIO COLOMA**

**SEPTIEMBRE 2018**

**ANTECEDENTES GENERALES PARA EL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE LEY SOBRE MODERNIZACIÓN TRIBUTARIA, BOLETÍN Nº 12.043-05**

**I. RESUMEN EJECUTIVO**

El presente informe tiene por objeto reunir los antecedentes legislativos y de opinión pública que se han sucedido desde el anuncio del Presidente Sebastián Piñera en torno a la modernización del sistema tributario, al que se comprometió durante su campaña.

Se recopilan las informaciones relativas a la tramitación que ha tenido a la fecha el proyecto de ley boletín Nº 12.043-05 que moderniza la legislación tributaria, el contenido de la iniciativa y objetivos, los documentos presentados a la fecha por el Ejecutivo asociados a esta iniciativa y las columnas de opinión publicadas en algunos de los medios de comunicación más destacados del país.

Dada la relevancia de esta materia y su incidencia en el funcionamiento del país, es importante contar con antecedentes que permitan hacer un seguimiento permanente del debate que se esta dando en torno a su tramitación y que permitan tener una visión actualizada de las opiniones vertidas, acuerdos, cambios y directrices de las que puede ser objeto.

**II. Antecedentes de la TraMitación legislativa**

**2.1 Ingreso del proyecto**

El 23 de agosto recién pasado, el Presidente Sebastián Piñera presentó en la Cámara de Diputados, el proyecto de ley que moderniza la legislación tributaria, boletín Nº 12.043-05

**2.2 Idea Matriz**

De acuerdo al texto del Mensaje, este proyecto tiene como idea matriz *“avanzar hacia un sistema más moderno, más simple y más equitativo, que promueva la innovación y el emprendimiento, con un marco legal más preciso, cimentado en base al principio de legalidad tributaria. Un proyecto que incentiva el ahorro y la inversión, factores fundamentales para mantener un elevado crecimiento económico en el mediano y largo plazo, único camino para alcanzar el desarrollo y asegurar la creación de más empleos de calidad. A su vez, este proyecto de modernización otorgará mayor simpleza y certeza jurídica a los contribuyentes, reduciendo la burocracia, los altísimos costos de cumplimiento, los espacios de arbitrariedad y discrecionalidad que hoy día tiene nuestro sistema tributario y que afecta especialmente a las pequeñas, medianas y micro empresas.”[[1]](#footnote--1)*

**2.3 Trabajo de Comisión**

El proyecto no ha sido calificado con urgencia a la fecha y está siendo tratado en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, cuyos integrantes son los diputados Pablo Lorenzini (Presidente), Pepe Auth, Giorgio Jackson, Carlos Kuschel, Patricio Melero, Manuel Monsalve, Daniel Núñez, José Miguel Ortiz, Leopoldo Pérez, Guillermo Ramírez, Alejandro Santana, Marcelo Schilling y Gastón von Muhlenbrock, la que al momento de la realización de este informe, había realizado dos audiencias para revisar la iniciativa, que se resumen como sigue:

**Tabla 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Objetivo de la sesión** | **Materia tratada o acuerdos** |
| 12/09/18 | Iniciar el estudio del proyecto de ley que moderniza la legislación tributaria.Boletín Nº 12.045-05 | Concurre el Ministro de Hacienda, el Ministro Secretario General de la Presidencia, el Subsecretario de Hacienda y el asesor Legislativo del Ministerio de Hacienda. El Ministro inicia la presentación del proyecto de ley.Se deja constancia de la presentación hecha por el Ministro en los antecedentes recibidos por la Comisión[[2]](#footnote-0).Otros diputados asistentes: Sofía Cid; Francisco Eguiguren y Raúl Soto. |
| 25/09/18 | Continuar el estudio del proyecto de ley que moderniza la legislación tributaria.Boletín Nº 12.045-05 | Concurre a esta sesión el Ministro de Hacienda, el Subsecretario de Hacienda, y los asesores del Ministerio de Hacienda.Continúa la exposición respecto a los contenidos del proyecto de ley.Se deja constancia en los antecedentes recibidos por la Comisión de la presentación hecha por el Ministro y de un documento presentado por diputados de oposición solicitando información y precisiones respecto al contenido del proyecto de ley[[3]](#footnote-1).Asisten los diputados integrantes de la Comisión Lorenzini; Auth; Jackson; Kuschel; Melero; Núñez; Ortiz; Ramírez; Schilling; Von Mühlenbrock. Reemplazos: El Diputado Pérez fue reemplazado por la Diputada Cid. El Diputado Santana fue reemplazado por el Diputado Eguiguren. |

**Resumen de las sesiones de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados**

**2.4 Otros antecedentes**

Cabe señalar que de conformidad a lo establecido en el artículo 77 de la Constitución Política de la República, el proyecto requiere ser conocido por la Corte Suprema en lo que respecta a las atribuciones concernientes a los tribunales tributarios y aduaneros, a los tribunales ordinarios de justicia y al Tribunal Ambiental.

**III. ANTECEDENTES DEL CONTENIDO DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA LEGISLACIÓN TRIBUTARIA**

**3.1 Fundamentos**

En su programa de gobierno, el Presidente Piñera hizo referencia a la necesidad de introducir cambios en la legislación tributaria, incluyendo a lo ya realizado en la reforma tributaria introducida por el anterior gobierno.

Específicamente, el mandatario se comprometía a *“volver a poner en marcha nuestra economía mediante el restablecimiento de la confianza, una corrección de la actual reforma tributaria, un fuerte impulso a la inversión y una agenda de reformas pro competitividad, innovación y emprendimiento.”* [[4]](#footnote-2)

Dicho compromiso se sustentaba en la convicción de que era necesario enmendar algunos de los cambios introducidos en el sistema tributario chileno a través de la reforma impulsada por M. Bachelet, ya que se consideraba que ellos no habían fortalecido suficientemente el sistema de tributos, y también existía una visión de que se habían afectado las confianzas y certezas de los inversores de todos los niveles, desde grandes empresas a microempresas, generando un estancamiento de la economía nacional. En efecto, en el programa se afirma que: *“no hay mejor política de desarrollo que el crecimiento, ni mejor política social que el pleno empleo. Para lograrlo corregiremos los errores de la reforma tributaria, introduciendo certezas e incentivos para el ahorro y la inversión”*.[[5]](#footnote-3)

En concreto, el programa de gobierno estableció como medida *“crear un sistema tributario más simple y justo que, manteniendo la carga tributaria global, estimule el crecimiento, el empleo, la inversión, el emprendimiento y la innovación”,* para lo cual se harían necesario 4 herramientas específicas[[6]](#footnote-4):

1. Reintegrar, gradualmente, el impuesto de las empresas con los impuestos pagados por las personas.
2. Converger, gradualmente, la tasa del impuesto de 1ª categoría a los niveles promedio de los países OCDE.
3. Reducir y simplificar la carga administrativa de la reforma tributaria, especialmente para las Pymes, y otorgar mayor seguridad jurídica a empresas y personas.
4. Establecer incentivos que reactiven la inversión favoreciendo prioritariamente a las Pymes, la innovación y el emprendimiento.

En el texto del Mensaje, propiamente tal, el Presidente establece como concepto eje de la iniciativa la *modernización tributaria*, apostando a avanzar en modificaciones con una visión de largo plazo y orientada al desarrollo integral (que no solo se suscriba al ámbito económico, sino que también considere aquellas áreas fundamentales), inclusivo (considerar a todos los chilenos sin excepción, de manera de que todos nos beneficiemos de un país que progresa) y sustentable del país (de largo plazo que sea amigable con el medio ambiente), con reglas claras y que den certeza.[[7]](#footnote-5)

**3.2 Principios**

Para el cumplimiento de los objetivos del proyecto de ley, en el Mensaje se señalan 6 principios sobre los cuales se fundan las medidas de modernización propuestas y que se resumen en:

1. Equidad y justicia en la distribución de los tributos[[8]](#footnote-6)

*Ideas fuerza:*

* Contribuyentes de similares características deben ser tratados de manera similar.
* Contribuyentes deben sentir que tributan de acuerdo a sus capacidades.
* Contribuyentes deben sentir que el Estado cobra a cada uno exclusivamente lo que corresponde.
* Existencia de convicción y garantías necesarias para que en el caso de que exista un contribuyente vulnerado en sus derechos, sea asistido judicialmente en aquellos casos en que la ley lo establezca.
* Deber de contribuir a generar conductas socialmente virtuosas.

*Medidas:*

- Sistema de tributación único, totalmente integrado, en que los propietarios tributan en base a retiros efectivos. Las micro, pequeñas y medianas empresas (“Pymes”) se regirán por el mismo sistema pero con adecuaciones a su realidad particular.

- Normativa de donaciones y entrega de productos más moderna, más simple y realista.

1. Simplicidad de las normas y procesos tributarios[[9]](#footnote-7)

*Ideas Fuerza:*

* Permitir una adecuada comprensión y aplicación del sistema tributario.
* Contar con reglas claras y asequibles en su comprensión, su contenido y espíritu por todos los contribuyentes, tengan o no asesoría especializada.
* Minimizar los costos de la administración del sistema tributario y del cumplimiento del mismo por parte de los contribuyentes.
* Procesos de fiscalización llevados a cabo por el Servicio de Impuestos Internos (SII) deben tener objetivos claros y definidos a priori.
* Contribuyente debe saber por qué y para qué lo fiscalizan, cuánto tiempo demora una fiscalización y cómo se pone término a un proceso.
* Contribuyente debe tener percepción de eficacia en materia de litigación, que la justicia es expedita, eficiente, no gravosa, que se pueden presentar pruebas y que los recursos judiciales están disponibles en materia tributaria.

*Medidas:*

- Digitalizar la relación del Servicio con el contribuyente, crear una carpeta electrónica personal.

- Hacer más expeditos los procesos de devolución de IVA (devolución de IVA activo fijo y exportador)

- Crear el avenimiento extrajudicial y la posibilidad de poner en todo momento término a los juicios llegando a acuerdo con el SII.

1. Certeza y seguridad jurídica[[10]](#footnote-8)

*Ideas fuerza:*

* Dar seguridad y certeza jurídica, para que la ley sea predecible y el contribuyente tenga claridad sobre los hechos gravados, los sujetos, las tasas y las consecuencias legales de no cumplir con sus obligaciones tributarias.
* Mejorar la claridad de la legislación, mejorar la predictibilidad y consistencia de las prácticas administrativas, prevención efectiva de disputas, y mecanismos robustos de resolución de controversias.

*Medidas:*

* Robustecer el catálogo de derechos del contribuyente
* Crear un nuevo organismo a cargo de la defensa efectiva y eficiente de tales derechos.
* Adecuaciones en las normas interpretativas, en materia de Norma General Antielusión haciendo precisiones menores pero que contribuyen a fortalecer el principio de legalidad tributaria.
* Consagrar el silencio positivo en los actos y procesos del Servicio
* Hacer aplicables recursos de la Administración del Estado
* Simplificar las normas en materia probatoria.
* Redefinir las normas en materia de gastos deducibles para efectos tributarios.
1. Competitividad[[11]](#footnote-9)

*Ideas fuerza:*

* Generar las bases para que los inversionistas apuesten por nuestro país, por sus reglas del juego claras y estables para desarrollar nuevos proyectos.
* Si las empresas crecen y son competitivas, la población podrá disponer de mayor seguridad en su trabajo, mejores empleos y remuneraciones.
* Un sistema tributario complejo desvía recursos humanos y financieros que podrían destinarse a otros fines . Un sistema tributario simple y moderno, permite que las empresas destinen sus mayores esfuerzos a hacer crecer su emprendimiento.

*Medidas:*

* Simplificar el sistema de tributación de las empresas pequeñas y medianas, de manera de facilitar el cumplimiento tributario y, por esa vía, apoyar su crecimiento.
* Dar un tratamiento tributario moderno y fiscalizable para la economía digital en sus diversas manifestaciones, cuidando de no afectar el desarrollo de ésta.
1. Estabilidad[[12]](#footnote-10)

*Ideas fuerza:*

- Generar los cimientos para contar con normas estables en un horizonte razonable de tiempo.

*Medidas:*

- Proponer normas que perduren en el tiempo.

1. Suficiencia a fin de hacer frente a los gastos del Estado[[13]](#footnote-11)

*Ideas fuerza:*

* No reducir la carga tributaria global.

*Medidas:*

* Garantizar que los ingresos del Estado sean suficientes para financiar responsablemente los gastos derivados de su funcionamiento y operación.

**3.3 Contenido**

**i) Medidas Pro Crecimiento[[14]](#footnote-12)**

**a. Depreciación general y para la Región de La Araucanía.**

- Incentivo a la inversión con un régimen transitorio de depreciación instantánea equivalente al 50% de la inversión realizada en activos fijos nuevos o importados (incluyendo inversiones en obras y construcciones), una vez que se inicie su utilización y que se extenderá por dos años.

- Incentivo a la inversión específico la región de La Araucanía, con un régimen de depreciación instantánea por el total de las nuevas inversiones realizadas en esa región durante dos años, en activos fijos nuevos o importados (incluyendo inversiones en obras y construcciones).

- Depreciación semi-instantánea (1/10 de vida útil) que existe para todos los contribuyentes que obtienen ingresos anuales iguales o menores a UF 100.000.

**b. IVA en la construcción.**

- Extender rebaja de crédito fiscal IVA que tienen las viviendas de un valor de hasta UF 2.000, equivalente al 65% del IVA, para que viviendas de hasta un valor de UF 4.000 también puedan usar el crédito especial de IVA, pero por un monto equivalente al 45% de dicho IVA.

**c. Extensión de beneficio para zonas extremas.**

- Incorporar modificaciones en leyes que establecen franquicias tributarias de contribuyentes en zonas extremas, ampliando sus beneficios hasta el año 2035.

**d. Modernización de procedimientos de solicitud de devolución de IVA.**

- Reducir el plazo para recuperar el IVA soportado en la adquisición de activo fijo de 6 a 2 meses contados desde la fecha de la inversión y acortar el plazo de respuesta del Servicio de 60 a 5 días, sujeto a una fiscalización posterior (artículo 27 bis de la ley de IVA)

- Modificar la exención de IVA a la importación de bienes de capital relacionados a proyectos de inversión por sobre US$ 5 millones (artículo 12 letra B N° 10 de la ley de IVA) con el objeto de modernizar su procedimiento de aprobación.

**ii) Iniciativas Modernizadoras, de simplificación del sistema tributario y de seguridad jurídica[[15]](#footnote-13)**

**a. Modernización y simplificación del sistema de tributación de las empresas**

- Sistema integrado con tributación de las personas en base a retiros efectivos: Se mantiene el principio actual de integración de la tributación por parte de la empresa, a través de un impuesto corporativo, con la misma tasa para todas las empresas, salvo las que califiquen como Pymes.

- Ordenes de imputación: Los retiros y dividendos de una empresa se imputan en primer lugar a aquellas utilidades tributables, para posteriormente acceder a aquello exento, no renta o bien capital. Cualquier exceso sobre lo anterior quedará asimismo gravado con impuestos finales.

- Simplificación y liberación de registros: Simplificar los registros a llevar por las empresas y liberar de la obligación de llevarlos en la medida que no sea estrictamente necesario Se exigirá acreditar mediante registros tributarios, los cuales son de confección anual, sólo aquellos casos en que el respectivo propietario estime que una remesa o distribución no debe quedar afecta a impuesto alguno conforme al orden de imputación legal.

- Crédito por impuestos pagados por la empresa: Simplificar y equiparar el crédito a que tendrán derecho todos los contribuyentes por los impuestos pagados por las empresas de las cuales son propietarios, sin distinguir ni discriminar por la naturaleza de las mismas.

- Modernización e incentivo al crecimiento y principio de realidad económica: Simplificar la integración entre diversas situaciones y opciones de organización de las empresas, logrando un tránsito eficiente, viable y amigable de sociedades sin contabilidad o con contabilidad simplificada al régimen único.

- Término de giro: Establecer que en caso que los socios del contribuyente sean a su vez entidades que tributan en base a renta efectiva y contabilidad completa, las utilidades pendientes de tributación se entenderán reinvertidas. En el caso de estructuras con socios contribuyentes distintos de los señalados, se aplicará un impuesto único de término de giro de 35% con derecho a crédito (nuevo artículo 38 bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta (LIR),

**b. Modernización y simplicidad del Régimen de Tributación de las Pymes**

- Régimen tributario que consagra la Cláusula Pyme: Se incorpora al nuevo sistema tributario del artículo 14 de la LIR, reemplazando al actual artículo 14 ter. Los propietarios deben tributar en base a un sistema de integración total, con una tasa especial de impuesto de primera categoría de 25%. Los dueños de las Pymes deben tributar con impuestos finales en base a los retiros efectivos que realicen, con la opción de elegir la transparencia tributaria de su Pyme, en cuyo caso las utilidades que genere la Pyme se gravarán directamente con la tasa del Impuesto de Global Complementario de sus dueños. Estas empresas quedan liberadas de llevar el registro tributario de Diferencia entre la Depreciación Acelerada y Normal (“DDAN”) y de aplicar las reglas tributarias de corrección monetaria. Se fomenta la inversión en activo fijo de las Pymes, confiriéndoles una depreciación instantánea de las inversiones que realicen en dicho tipo de activos.

- Requisitos para acceder a la Cláusula Pyme y liberación de algunos actuales: Se permite el acceso a este régimen especial a todas las Pymes, a condición de que tengan ingresos anuales iguales o inferiores a UF 50.000 y que obtengan rentas activas iguales o superiores al 65% de sus ingresos.

- Ingreso automático a la Cláusula Pyme: Se establece que las empresas que cumplan con los requisitos de incorporación a la Cláusula Pyme se acojan a este régimen por el sólo ministerio de la ley, sin necesidad de manifestación expresa por parte de la empresa.

- Nueva tributación en base a propuesta del Servicio: El Servicio elaborará una propuesta de declaración a la Pyme en base a la información de que dispone a través de declaraciones juradas, información de terceros, declaraciones de impuestos, etc. Para las empresas con ingresos anuales inferiores a UF 10.000 se da la opción de declarar su renta líquida imponible de acuerdo a una propuesta elaborada anualmente por el Servicio sobre la base de márgenes de rentabilidad determinados por tipos de industria o negocio. De esta forma, los contribuyentes que se acojan a esta modalidad quedarán eximidos de la obligación llevar contabilidad y registros tributarios.

- Opción de transparencia tributaria: La Cláusula Pyme considera un régimen de transparencia tributaria para todas las Pymes que tengan como dueños a personas naturales afectas al Impuesto Global Complementario. Los propietarios de las Pymes podrán optar por quedar gravados directamente con sus impuestos finales sobre las rentas que genere la empresa, evitando de dicha manera que la Pyme pague un impuesto de primera categoría mayor al que correspondería a su dueño.

- Incentivo a la reinversión de utilidades: Para las empresas con ingresos anuales no superiores a UF 100.000, se mantiene el beneficio de deducción de la renta líquida imponible de hasta un 50% del monto que se mantengan invertido en la empresa, con tope de UF 4.000.

- Se mantiene diferimiento de IVA: Para las empresas con ingresos anuales no superiores a UF 100.000 se mantiene la posibilidad de diferir el pago del IVA hasta en 60 días.

**c. Modificaciones sustantivas que brindan seguridad jurídica.**

- Silencio Positivo: Se establece como principio general, salvo norma legal en contrario, que operarán las reglas de silencio positivo para todas las solicitudes, presentaciones y recursos de cualquier tipo o naturaleza que redunden en un acto administrativo final.

- Implementación de recursos administrativos: Se reconoce que, en caso de vulneración de los derechos de los contribuyentes, se podrá interponer una queja administrativa ante el Director Regional o Nacional según corresponda, para que se tomen las medidas correspondientes. En esta misma situación, se podrá interponer una queja ante la nueva Defensoría de Derechos del Contribuyente, o bien se podrá interponer el correspondiente recurso ante el Juez Tributario competente

- Derecho a que las fiscalizaciones observen fielmente los plazos de prescripción:nEn el artículo 21 del Código Tributario se hace expresa mención a que el Servicio no podrá solicitar antecedentes anteriores a los plazos de prescripción, lo que incluye la revisión de capital propio tributario, pérdidas tributarias y remanente de crédito fiscal. Sólo se podrá excepcionar de los plazos de prescripción la situación especial y excepcional, cuando así se establezca mediante resolución fundada, y partiendo de la presunción que la pérdida y el remanente de crédito fiscal IVA se corresponden con los antecedentes presentados por el contribuyente. Respecto del capital propio tributario, el Servicio debe revisar las reorganizaciones, partidas, actos contratos u operaciones que tengan incidencia en dicho capital propio, dentro de los plazos de prescripción tributaria, sin que pueda pedir antecedentes anteriores a dichos plazos.

- Modernización del concepto de gastos del giro de la empresa: Se ha trabajado con el Servicio en una nueva definición de gasto que puede ser deducido de la renta, disponiendo que serán tales los que cumplan las siguientes condiciones: (a) que se encuentren vinculados directa o indirectamente al desarrollo del giro, entendiendo por tal el que se realiza para el desarrollo de las operaciones o negocios de la empresa o el que se efectúa en el interés de la misma; incluyendo gastos ordinarios, extraordinarios, habituales, excepcionales, voluntarios u obligatorios; (b) que sean razonables en cuanto a su monto, atendidas las circunstancias particulares del caso; (c) que no hayan sido rebajados en virtud del artículo 30; (d) que se encuentren pagados o adeudados durante el ejercicio comercial correspondiente; (e) que tengan una causa lícita y no tengan su origen en comportamientos dolosos; y (f) que se acrediten o justifiquen en forma fehaciente ante el Servicio, en caso de fiscalización, a través de los medios de prueba que corresponda conforme a la naturaleza de los respectivos desembolsos. Se incorporan en el catálogo del artículo 31 nuevos gastos especiales, tales como los gastos relacionados con responsabilidad social empresarial y gastos por obligaciones legales de responsabilidad objetiva de indemnizar o compensar.

- Norma general de tasación: Se incorporan ejemplos de las circunstancias concomitantes que deben considerarse al ejercer esta facultad; se explicita el derecho del contribuyente de aplicar cualquier método de valoración basado en técnicas de general aceptación para efectos de justificar el precio o valor respectivo. Se establecen presunciones que otorgan puertos seguros a los contribuyentes respecto de los valores que pueden considerar para realizar ciertas operaciones. Se incorporan normas de reorganización de grupos empresariales, que exigen darles una mirada consolidada, propia de su naturaleza, para efectos de calificar sus efectos tributarios o de fiscalizarlas, y se regula dicho procedimiento. Se otorgan seguridades respecto de los medios de prueba que puede utilizar el contribuyente para acreditar los valores utilizados.

**d. Adecuaciones particulares en materia de seguridad jurídica**

- Norma de interpretación en materia tributaria: Incorporar en el artículo 4 del Código Tributario un inciso segundo que señale que sin perjuicio de las materias que la normativa regule de manera específica (“principio de especialidad”), la interpretación y aplicación de las disposiciones tributarias, de los actos jurídicos y de los contratos deberá considerar las normas del derecho común, incluyendo criterios interpretativos y principios generales de derecho.

- Norma General Antielusión: Incorporar ajustes a la NGA, fundamentalmente contemplada en los artículos 4 bis, 4 ter, 4 quáter, 4 quinquies, 26 bis, 100 bis y 160 bis, todos del Código Tributario, para otorgar un mayor grado de certeza a los contribuyentes respecto a qué pueden y no pueden hacer, y que la NGA sea una herramienta que, de modo eficiente, el Servicio pueda aplicar en la práctica.

**e. Derechos del Contribuyente**

- Defensoría de Derechos del Contribuyente (DEDECON): Crear un nuevo organismo, que dependerá del Ministerio de Hacienda y estará a cargo de la velar por el respeto de los derechos de los contribuyentes, especialmente de los más vulnerable y pymes. Será una entidad que sin tener facultades jurisdiccionales, ni de representación judicial de los contribuyentes, tendrá un relevante rol de mediación de los conflictos que se presenten entre el Servicio y los contribuyentes, recibiendo quejas de estos últimos, pudiendo proponer buenas medidas en pos de una mejor política pública, e incentivando el cumplimiento tributario, entre otras. También podrá ejercer funciones de estudio relevantes en materia tributaria, efectuar propuestas que ayuden a mejorar la política pública, proponer modificaciones a la normativa de la autoridad tributaria, desarrollar labores de investigación y análisis de problemas sistemáticos (grupos de contribuyentes), proponer modificaciones a disposiciones legales, desarrollar reuniones periódicas con el Servicio a fin de que actúen con debida coordinación; y emitir opiniones técnicas.

- Derechos del contribuyente: Definir y establecer derechos a fiscalizaciones con fines, objetivos y plazos claros y específicos; derecho a que se le informe la situación tributaria y el estado de tramitación de un procedimiento; derecho a que se admita la acreditación de los actos, contratos, etc., mediante los medios probatorios que correspondan conforme al ordenamiento común y si se trata de actos suscritos en el exterior a que no se exijan requerimientos incumplibles; a obtener certificaciones de no existir gestiones pendientes; a no ser fiscalizados por las mismas partidas y períodos que ya han sido objeto de una fiscalización anterior; entre otros. También que se aclaran y especifican las situaciones que conforme al 8 ter del CT permiten el bloqueo de documentos tributarios, puesto que se reconocen las gravosas consecuencias que puede tener dicha medida para el contribuyente, quien debe conocer con precisión y debe ser notificado de la adopción y causales de tales medidas, a fin que pueda proceder a su pronta solución.

**f. Otras Medidas Modernizadoras.**

- Documentación electrónica: Se introduce la obligatoriedad del uso de la boleta electrónica, que significará un paso muy importante en materia de formalización de las transacciones, menor evasión y será una fuente relevante de ingresos fiscales.

- Modernización y facilitación de normativa sobre donaciones y entregas de bienes a título gratuito: Permitir a los contribuyentes que puedan reconocer como un gasto el costo de los bienes entregados a entidades sin fines de lucro inscritas en el Servicio, tomando las medidas de información y/o trazabilidad que sean necesarias para resguardar el interés fiscal. En relación a la Ley de Responsabilidad del Productor, se impulsará a las empresas a evitar la destrucción de bienes. Así, las empresas que pudiendo haber hecho entrega gratuita de los bienes, cuando ello sea procedente, no podrán deducir como gasto el costo de los bienes destruidos si no se acogen a la normativa de entrega gratuita de bienes. Se introducen ciertas adecuaciones en materia de donaciones para facilitar la posibilidad que ciertos contribuyentes que quieren donar no pueden hacerlo, para lo cual se incluirá en las leyes más relevantes de donaciones la posibilidad de donar en situación de pérdida tributaria, con ciertos límites, pero en tal caso, sólo podrán deducir los montos donados como gasto y no como crédito. Se establece un monto máximo permitido donar (que no puede superar de 500 UTM anuales), que estará exento de impuesto de donaciones y del trámite de insinuación judicial.

- Modernización de la tributación de las ganancias de capital: Para acciones y derechos sociales, se establece como posibilidad para las personas naturales el poder tributar con un impuesto único de tasa de 20%, atenuando así, de alguna manera, la doble tributación que se genera por los dividendos y utilidades que estos bienes generan al ser enajenados. Se genera un nuevo tratamiento tributario a los planes de compensación laboral, de modo de no castigar esta clase de herramientas que pueden ser de gran utilidad para fortalecer el compromiso de los trabajadores con la empresa y de sus dueños para con ellos. Se reconoce el desarrollo de los pactos de retrocompra y asimismo, las transacciones sobre títulos de crédito. Se propone una nueva definición de capitales mobiliarios en el artículo 20 Nº 2 de la LIR.

- Modernización y simplificación de las normas de tributación internacional: Introducir un concepto y herramientas a los contribuyentes extranjeros que les permitan determinar con cierto grado de claridad cuándo existe un establecimiento permanente en Chile y cuándo por tanto debe tributar en Chile como tal con las consiguientes obligaciones tributarias. Se define recogiendo las más recientes directrices de la OCDE pero adecuando ciertos conceptos internacionales a la realidad específica de la legislación tributaria chilena.

- Normas de alivio de la doble tributación internacional, artículos 41 A y 41 C: Se unifican en el artículo 41 A de la LIR el uso de créditos por impuestos pagados en el extranjero por contribuyentes residentes y domiciliados en Chile, que actualmente se encuentran disgregados en los artículos 41 A, 41 C y 41 G de la LIR. Se armonizan los topes aplicables a la utilización de dichos créditos y se otorga certeza respecto de los tipos de rentas que dan derecho a crédito, cuando existe inversión en un tercer país. Se simplifica la acreditación de los impuestos pagados en el extranjero con el objetivo de evitar que se pierda dicho crédito debido a las dificultades de cumplimiento de las formalidades rígidas exigidas. Se soluciona la situación de sociedades residentes en Chile que invierten en sociedades extranjeras que, a su vez, tienen participaciones en nuestro país, permitiéndoles aliviar la doble tributación en los mismos términos que si la inversión se realizara en un tercer país.

- Reconocimiento excepcional del royalty como una renta productiva, en casos de vehículos controlados en el exterior: Entre las rentas pasivas se consideran las derivadas de la cesión del uso, goce o explotación de marcas, patentes, fórmulas, programas computacionales y otras prestaciones similares, sea que consistan en regalías o cualquier otra forma de remuneración. Se agrega una excepción a dicha calificación respecto de actividades empresariales de desarrollo tecnológico que empresas chilenas emprendan a través de filiales en el extranjero. Se elimina la limitación especial al gasto por concepto de regalías, sujetando dichos gastos a las normas generales.

- Nueva definición de territorios o jurisdicciones con régimen fiscal preferencial: Se modifica el artículo 41 H, estableciendo como elemento preponderante para definir la calidad de régimen fiscal preferencial la no existencia de intercambio efectivo de información con las autoridades fiscales de dicho territorio.

- Eliminación de obligaciones de responsabilidad solidaria en caso de operaciones en el extranjero.

- Modificaciones en materia de tributación de financiamiento vía créditos externos: Se eliminan aquellas hipótesis que afectan a operaciones celebradas entre un deudor y un acreedor que no son ni directa ni indirectamente relacionados, y que crean inequidades respecto de financiamientos con garantía. Se modifica la norma de excepción que busca salvaguardar proyectos de gran envergadura, otorgando un concepto lo suficientemente amplio para que capte las diversas formas de estructura de este tipo de financiamiento.

- Restricción del uso de tasa preferencial 4% respecto de financiamientos tipo back-to-back: Restringir el uso de la tasa preferencial de impuesto adicional de 4% sobre intereses proveniente de créditos otorgados desde el exterior por instituciones bancarias o financieras extranjeras o internacionales, a aquellos casos en que el banco o institución financiera extranjera o internacional sea el beneficiario final o efectivo de los intereses. Producto de esta modificación legal, la utilización de estructuras de financiamiento del tipo back-to-back no podrán beneficiarse de la tasa reducida del 4%. Si un banco o institución financiera extranjera o internacional no es el beneficiario final de los intereses, la tasa aplicable de impuesto adicional será la tasa general de 35%.

- Reorganizaciones internacionales: No existen normas en la legislación tributaria chilena que regulen los efectos tributarios de reorganizaciones internacionales que involucren activos o partes chilenas, salvo las consideradas excepcionalmente para situaciones de transferencias indirectas de activos chilenos, por lo que se propone dar consagración legal a sus efectos y los requisitos aplicables para reconocer que se trata de procesos tributariamente neutros, ya que no implican realización.

**g. Impuesto a los Servicios Digitales (ISD)**

- Introducir un impuesto específico, indirecto y sustitutivo de cualquier otro impuesto, de tasa 10%, que grava los servicios digitales prestados por empresas extranjeras, en la medida que dichos servicios sean utilizados en Chile por personas naturales. En caso de que estos servicios digitales sean utilizados por empresas chilenas, estos se gravaran con impuesto adicional conforme a las reglas de los artículos 59 y siguientes de la LIR.

 La tasa se aplica sobre el monto total de la transacción, sin deducción alguna, y pretende ser una tasa justa y equilibrada considerando las dificultades que existen para su definición.

- Se establece un sistema de retención por parte de las entidades emisoras de los medios de pago utilizados en las transacciones.

- Se aplica sobre los servicios digitales, de manera que no afecta la compra de bienes físicos por medios tecnológicos, los cuales se afectan conforme a las reglas vigentes por los impuestos aduaneros e IVA a la importación.

**j. Modificaciones al impuesto verde a las fuentes fijas.**

- Se proponen varias modificaciones, que tienen por objeto perfeccionar este instrumento, pionero en la región, con el propósito principal de otorgar certezas respecto a los distintos elementos que componen este gravamen.

**k. Modernización de Facultades de Fiscalización del Servicio.**

- Se fomenta la relación colaborativa del Servicio y los contribuyentes para potenciar la confianza y el correcto cumplimiento tributario que requiere de la auto determinación y auto declaración de los impuestos, junto con entregar certeza respecto de la forma en que el Servicio realiza sus actuaciones de requerimiento de información o fiscalización.

- Se potencian las facultades del Servicio para solicitar declaraciones juradas de los contribuyentes y respecto de terceros señalando los plazos en que deberá emitir las respectivas resoluciones y los antecedentes el Servicio podrá requerir para el debido cumplimiento de las obligaciones tributarias.

- Se regula la posibilidad del Servicio de requerir la comparecencia de contribuyentes en los casos específicos que dicha norma señala y se precisa el procedimiento para requerir información como medio especial de fiscalización.

- Se regula la labor de facilitación que le compete al Servicio respecto de los contribuyentes para el debido cumplimiento tributario, regulando la facultad del Servicio de proponer declaraciones de impuestos, indicar al contribuyente inconsistencias respecto de la información que recibe, y de solicitar información respecto de operaciones que podrían tener incidencia en sus declaraciones de impuesto.

- Se precisan las causales por las cuales el Servicio podría denegar la emisión de documentos tributarios, tales como facturas, en base a los criterios que ha definido el Servicio.

- Se establecen reglas respecto del plazo de revisión de operaciones que inciden en el capital propio tributario, pérdidas tributarias y remanentes de crédito fiscal en periodos que excedan del plazo extraordinario de prescripción de 6 años y se precisan las materias que pueden ser objeto de fiscalización y los plazos en que deberán llevarse a cabo dichas actuaciones.

**l. Artículos transitorios**

- Se especifican los plazos de vigencia de las modificaciones efectuadas, que como regla general regirán a partir del 1 de enero de 2019.

- Se regula el tránsito desde los actuales sistemas generales de tributación correspondientes a los regímenes atribuido, semi integrado y 14 ter, al nuevo sistema único tributario, que incluye a la Cláusula Pyme.

- Se incorporan disposiciones transitorias para regularizar y facilitar el cumplimiento tributario de los contribuyentes, especialmente considerando los variados cambios normativos que ha sufrido la legislación tributaria en los últimos años. Entre dichas medidas, destacan: Impuesto Sustitutivo al FUT, avenimiento en juicios pendientes, declaración de diferencias en el capital propio tributario, registro de capitales en el exterior no declarados.

**m. Cuadros del Informe Financiero que acompaña el Mensaje**





**IV. RECOPILACIÓN DE COLUMNAS DE OPINIÓN RELATIVAS A LA MODERNIZACIÓN TRIBUTARIA**

Finalmente, se presenta a continuación una recopilación de mas de cuarenta columnas de opinión vinculadas a la modernización tributaria propuesta por el Presidente Piñera, publicadas en los principales medios escritos del país, con la finalidad de tener a la vista los principales juicios favorables, desfavorables y/o propositivos que se han expuesto por esta vía respecto a la iniciativa en análisis.

Las columnas son presentadas en su texto original, tal cual fueron publicadas, y en orden cronológico, con el fin de reflejar la evolución que ha tenido el debate público de los temas relativos a la modernización tributaria a ala fecha.

**4.1 Modernización Tributaria: el caso del comercio internacional**

*12 de junio de 2018 , columna de Soledad Recabarren, Socio de Recabarren y Asociados, disponible en* [*http://www.icare.cl/contenido-digital/columna-recabarren-modernizacion-tributaria/*](http://www.icare.cl/contenido-digital/columna-recabarren-modernizacion-tributaria/)

En los últimos días ya no se habla de Reforma Tributaria, sino que de modernización y simplificación del Sistema Tributario.

Sobre la simplificación ya se ha hablado bastante, es por ello que vale la pena pensar qué temas requieren modernización tributaria. Aquí encontramos una multiplicidad de aspectos que podrían ser considerados por el gobierno y la oposición en la discusión del Proyecto Tributario que presentará este gobierno en los próximos meses, y para ello es bueno ver un caso.

En materia de comercio internacional, es importante determinar que existen una serie de operaciones que tienen naturaleza diferente, y que deben ser reguladas de manera diferente. Analicemos algunas de ellas y revisemos qué se está haciendo internacionalmente para apuntar a una modernización tributaria:

Ventas o servicios que requieren presencia en Chile por parte del vendedor. Aquí se encuentran aquellos casos en que se realizan actividades en el país, a objeto de prestar los servicios (ejemplo, reclutamiento de choferes u otros). La normativa internacional le exige a estas empresas tener establecimiento permanente en Chile, el cual debe deducir de los ingresos pagados por residentes chilenos, todos aquellos costos y gastos necesarios, debiendo tributar por la utilidad generada en Chile. En este caso no es relevante la forma en que se percibe el precio, ya que basta con que se reconozca la utilidad y se tribute por ello. Lo mismo ocurre con compras internacionales que dan garantías o soporte en Chile.

Otro tipo de actividades que no requieren ningún tipo de presencia o actividad en Chile, es el bajar programas o señales que son para uso personal. El SII ha señalado que es el contribuyente que realiza esta compra quien debe declarar y pagar el impuesto adicional que afecta este servicio. Internacionalmente se está tratando de traspasar esta obligación a la entidad financiera que realiza este pago. En un ejemplo concreto sería el emisor de la tarjeta de crédito quien debe retener y declarar este impuesto.

En la importación de bienes, los impuestos aduaneros y el IVA se deben pagar al momento de ingresar las mercaderías. Esto impondría a las empresas de correo la obligación de operar como un agente de aduanas para cobrar, declarar y pagar los impuestos correspondientes. Actualmente las empresas de courrier por un acuerdo privado público, realizan este pago de manera automatizada.

Las actividades comerciales se modernizan de manera más rápida que nuestra legislación, con lo cual, se podría modernizar nuestra legislación en este sentido.

**4.2 Algunas reflexiones sobre la modernización tributaria**

*17 de junio de 2018, columna de Vittorio Corbo, disponible en* [*http://www.elmercurio.com/blogs/2018/06/17/61049/Algunas-reflexiones-sobre-la-modernizacion-tributaria.aspx*](http://www.elmercurio.com/blogs/2018/06/17/61049/Algunas-reflexiones-sobre-la-modernizacion-tributaria.aspx)

En su reciente mensaje presidencial, el Presidente Piñera descartó una baja de la tasa del impuesto corporativo, debido a la estrechez de las cuentas fiscales, y anunció que su propuesta se abocará a una modernización del sistema tributario. Esta se focalizaría en corregir distorsiones y discriminaciones del esquema actual, que terminan afectando la equidad horizontal, la inversión y el crecimiento, y en simplificarlo con el propósito de reducir el costo de cumplimiento y de aumentar la certeza jurídica.

Se comenta que, como parte de los ajustes, se estaría analizando volver a un sistema integrado, en que el tributo de primera categoría recaudado al nivel de la empresa sea un crédito pleno del impuesto a la renta de las personas, como también lo es hoy el gravamen de segunda categoría que afecta a los ingresos del trabajo. Todos los ajustes que se le introduzcan al sistema serían neutrales con respecto a su impacto en el erario fiscal, lo que requeriría compensar la menor recaudación derivada de la integración plena con alzas de otros gravámenes.

Los candidatos de alzas debieran ser aquellos tributos a actividades que generan externalidades negativas, cuyas tasas deberían ser de la magnitud del perjuicio mismo. Un buen candidato, como lo han señalado tanto especialistas tributarios nacionales como instituciones financieras internacionales, es la ampliación de la base y el aumento del impuesto al diésel, que de paso no solo corregiría distorsiones en los precios relativos de los combustibles, sino que también sería consistente con la preocupación nacional e internacional por proteger el medio ambiente.

Para hacer una evaluación del sistema tributario actual y detectar sus principales falencias es conveniente partir por revisar los principios básicos que debe tener un esquema impositivo eficiente y equitativo. Estos principios fueron justamente analizados por una comisión, que lideró el premio Nobel de Economía James Mirrlees, encargada por el Instituto de Estudios Fiscales del Reino Unido (Mirrlees y otros, 2011). La comisión incluyó, entre otros, a los más destacados especialistas en finanzas públicas del mundo y sus términos de referencia fueron hacer propuestas para mejorar el sistema tributario del Reino Unido. Dicha comisión recomendó que un esquema impositivo debiera ser simple, transparente y coherente con la evidencia teórica y empírica sobre los efectos de los impuestos en las decisiones de personas y empresas, de modo que permita recaudar los ingresos fiscales deseados en la forma más eficiente y equitativa posible.

En particular, el sistema impositivo debiera permitir recaudar los recursos requeridos satisfaciendo los principios de equidad horizontal -que dos personas con el mismo nivel de ingreso, independiente de si proviene del trabajo o del capital, tributen lo mismo-, y de equidad vertical -que la tasa media de impuesto (definida como los impuestos pagados divididos por el ingreso total del contribuyente) suba con el nivel de ingreso, pero sin alterar su ranking relativo- y que, además, minimice el costo de administrar el sistema tanto para el Estado como para los contribuyentes (ver también los capítulos 1 y 4 de Arellano y Corbo, editores, 2013).

Considerando estos principios básicos, una deficiencia notoria del sistema tributario actual es que no cumple con el criterio de equidad horizontal, porque una persona que recibe dividendos o participaciones de una sociedad que tributa en el sistema semiintegrado con base en utilidades retiradas solo puede descontar un 65 por ciento del impuesto pagado por la empresa y, por lo tanto, el ingreso derivado del capital accionario o de participaciones en sociedades termina pagando una mayor tasa que el ingreso del trabajo, aunque se trate de los mismos montos. Esta distorsión termina afectando a los dueños de pymes y a los emprendedores, como también a la inversión.

Al mismo tiempo, tampoco cumple con el principio de equidad vertical, dado que, como las empresas pagan un gravamen de primera categoría del 27 por ciento por sus utilidades y solo un 65 por ciento de este pago es considerado como un crédito en el impuesto a la renta personal, todos los contribuyentes que reciben ingresos como dividendos de una empresa sujeta al régimen semiintegrado, independiente de su nivel de ingreso, parten pagando un 9,45 por ciento de los ingresos recibidos como dividendos, antes de computar el tributo personal, lo que termina afectando el ranking relativo de ingresos de los contribuyentes, dejando más abajo a quienes perciben rentas del capital relativo a quienes ganan el mismo monto, pero por ingresos del trabajo.

En defensa de este mayor tributo, se esgrime que son principalmente las grandes empresas las que quedaron en el sistema semiintegrado y que, desde el punto de vista de equidad, sería correcto que paguen más "porque tienen más", en otras palabras, se trataría de una manifestación de la progresividad del sistema. Pero se olvida que las empresas pertenecen a las personas y son estas las que al final pagan los impuestos y el esquema impositivo vigente termina discriminando en contra de todas las personas que reciben dividendos de empresas acogidas a este régimen. No hay ningún principio de eficiencia ni de equidad tributaria que justifique esta distorsión.

Por otra parte, el sistema tributario vigente crea una distorsión adicional a favor del financiamiento con deuda en vez de emitiendo acciones, por encima de la que ya existía en el sistema anterior, dado que el costo de la deuda es un gasto para la empresa y, por lo tanto, se deduce completamente de la base del impuesto de primera categoría, mientras que los pagos de dividendos terminarán tributando con una sobretasa.

Adicionalmente, al coexistir dos sistemas tributarios -uno integrado en base devengada y otro semiintegrado en base a retiros- y con una serie de registros nos quedamos con un sistema complejo, más difícil de fiscalizar y con altos costos de cumplimiento.

La forma más apropiada de evitar la evasión y la elusión es con una buena administración tributaria. En esto Chile ya tiene una gran experiencia acumulada, que se reforzó en la reforma reciente con normas que reducen las oportunidades para no pagar los impuestos debidos.

Con todo, para evitar las distorsiones listadas aquí (y otras no mencionadas por motivos de espacio) y cumplir con los principios de equidad horizontal y vertical, la Comisión Mirrlees propuso como elemento básico un sistema integrado de impuestos de personas y empresas, como el que Chile tenía antes de la reforma de 2014.

Basado en este análisis, lo recomendable es volver a la integración plena del impuesto corporativo y el personal. Con respecto a la base de la tributación, esta debiera ser sobre utilidades distribuidas para así promover el ahorro y la inversión, sea esta en la misma empresa o en la economía en general.

Otros problemas del sistema tributario actual

Pero los efectos del régimen semiintegrado van más allá. Por lo general, la productividad total de factores (PTF) aumenta con el tamaño de la empresa (ver Perspectives in Global Development: 2014, OCDE; Leung et al., 2008; Baldwin et al., 2002 y Lee y Tang, 2001) y, por lo tanto, esta discriminación contraria a las empresas grandes de este esquema también termina afectando la inversión, la PTF y el crecimiento potencial de la economía.

Otra anomalía del sistema impositivo en Chile es que la base exenta del impuesto global complementario supera al 180 por ciento de la mediana de los ingresos, mientras que en el promedio de los países de la OCDE la cifra llega a 40 por ciento solamente (ver Rubio y Vergara, 2017).

Como resultado, una pequeña parte de la población paga el impuesto a la renta personal en Chile, lo que obliga a compensar su baja recaudación con otros impuestos, principalmente el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Ello es un problema, ya que el IVA es un impuesto regresivo, por lo tanto, desde el punto de vista redistributivo, debería evaluarse una baja del tramo exento junto a una baja del IVA. Esto mejoraría la distribución del ingreso después de impuestos a favor de los grupos de menores ingresos.

Al mismo tiempo, también deben evaluarse exenciones y regímenes especiales aún presentes. En particular, con los avances en la información y el costo de procesamiento de esta con que cuentan la autoridad tributaria y los contribuyentes, ya no tiene mucho sentido mantener el sistema de renta presunta, habida cuenta de que hoy existe el régimen 14 ter, que está diseñado para gravar en forma simplificada a pequeños contribuyentes, y así, de paso, se aumenta la recaudación cerrando una importante avenida de elusión que, al final, termina también siendo poco equitativa, dado que los principales beneficiarios de este régimen son individuos de altos ingresos.

En suma, hay una buena oportunidad en el intento del Presidente de llevar a cabo una modernización del sistema tributario, que recaude un monto similar al actual, pero con menos distorsiones, con un menor sesgo contra la inversión y el crecimiento, con un menor costo de cumplimiento, con menos posibilidad de elusión y que, en el margen, mejore la distribución del ingreso.

**4.3 Impuestos a la economía digital: ¿cómo se fiscaliza una situación inmaterial?**

*6 de julio de 2018, columna de Cristián González, disponible en* [*http://www.elmostrador.cl/mercados/2018/07/06/impuestos-a-la-economia-digital-como-se-fiscaliza-una-situacion-inmaterial/*](http://www.elmostrador.cl/mercados/2018/07/06/impuestos-a-la-economia-digital-como-se-fiscaliza-una-situacion-inmaterial/)

Casi terminaba junio cuando el Ministerio de Hacienda anunció la sorpresa: la Reforma Tributaria incluirá gravámenes para la economía digital. Es decir, cobrar impuestos a las plataformas que en Chile usamos para diferentes fines, a través de internet.

El ministro de la cartera, Felipe Larraín, explicó entonces que el proyecto sería entregado en septiembre de este año y contemplaría dos partes: la creación de un nuevo tributo para las plataformas digitales que prestan servicios en Chile, como Uber, Cabify, Spotify y Netflix; y un refuerzo a los controles aduaneros para el pago del IVA y de aranceles hacia retailers que importan productos al país, como Amazon y AliExpress.

Mientras el debate en torno al tema sigue sumando opiniones por parte de consumidores, industria privada y empresas involucradas, el Gobierno estudia cómo se gravarán estas plataformas, considerando varios y distintos modelos tributarios que ya se han aplicado en otros países a la economía digital.

El tema es complejo, pero explicado en un lenguaje simple, se puede entender y conversar. Antes de todo, es importante saber que las normas actualmente sí permiten la tributación de estas operaciones; sin embargo, existe una serie de problemas que dificulta ejecutar la regulación. Una de esas dificultades es la diversidad de elementos o de productos que se están generando a nivel de tecnología; uno muy sofisticado, variado y continuo. A esto se suma saber cuál es el lugar o territorio donde se genera el servicio o la venta del bien. Entonces, ¿cómo se fiscalizan esas operaciones para efectos de cobrar impuestos?

Un ejemplo práctico es que hoy en un celular son numerosas las aplicaciones que fueron adquiridas de alguna forma, gratis o pagada mensual o anualmente. Normalmente, ese pago es muy bajo (un dólar o medio dólar), estando ahí el primer problema de fiscalización porque, obviamente, el Servicio de Impuestos Internos no va a destinar un sinnúmero de fiscalizadores para determinar si la persona que adquiere el servicio hizo o no la declaración de retención del impuesto adicional que tiene que pagarle a la empresa extranjera que creó dicha aplicación y permitió su uso.

En general, las personas no están haciendo las declaraciones todos los días y tampoco es algo que vayan a hacer. Entonces el Gobierno decide hacer una propuesta de manera tal que, cuando las personas paguen, inmediatamente cancelen el impuesto. Pero la pregunta es: ¿a quién se le paga? ¿A una empresa que está dónde?

La llave o solución al problema podría estar en el RUT, ya que toda importación, compra uso, etc. –en el caso de Chile– debiera venir relacionada al RUT, de manera que sea la empresa de transportes (correos u otra) la obligada a retener y enterar un cobro plano (flat) a dicho comprador; por ejemplo, de medio dólar por compras no superiores a 10 dólares y de 1 dólar por compras entre 10 y 50 dólares. Con ello, el mecanismo serviría como control general, evitando una fiscalización innecesaria, costosa y que en la práctica hoy es inoperante, favoreciendo, en cambio, una recaudación que podría ascender en torno a varios millones de dólares por este concepto.

Según la actual regulación, la interpretación que viene al caso es que la gente que consume Netflix, por ejemplo, y hace un pago mensual a través del cupo internacional de su tarjeta de crédito, sí debiera cancelar impuesto. Pero cómo se ejecuta aquello si dicho servicio no está prestado en Chile, sino que en internet y esa regulación es la que hoy no está clara porque la web es algo etéreo, es una nube, algo que está ahí y que no tiene regulación específica. Así, si nos ponemos de acuerdo y decimos que Netflix sí es algo que existe en nuestro país y presta servicio, entonces debiera pagar impuesto.

Otro caso son las compras por AliExpress. Lo que los consumidores de la plataforma hacen es importar productos, por tanto, debieran pagar en cada ocasión los aranceles. Pero es un precio tan bajo, que nadie los va a fiscalizar; entonces ya es un problema desde ese punto de vista.

Ahora, respecto a cobrar a las ganancias de estas plataformas digitales el impuesto de primera categoría, no tiene ningún sentido. Netflix, Spotify y las otras que están generando ingreso con sus contratos acá, solo deben cancelar los impuestos en el territorio donde están alojadas. Los territorios jurisdiccionales y las legislaciones buscan, justamente, amparar lo que está dentro de sus perímetros.

Siempre resulta positivo que la autoridad clarifique situaciones nuevas o difusas que puedan regularse cuando estas no puedan encuadrarse en la legislación existente o, bien, su fiscalización sea dudosa, inoperante o prácticamente imposible de realizar. En el caso de la transferencia de servicios y bienes, mediante sistemas tecnológicos, cabe la duda respecto los lugares en que se generan los servicios, qué es lo que realmente se transfiere que pueda quedar gravado, la determinación del precio y, obviamente, cómo se fiscaliza una situación que en principio es inmaterial.

Esperemos que quienes estén estudiando el tema al interior de Hacienda, encuentren la solución más práctica y fácil de aplicar.

**4.4 Impuesto a las plataformas digitales: una oportunidad de innovar y modernizar el sistema tributario**

*22 de agosto de 2018, columna de Antonio Guzmán, disponible en* [*http://www.elmostrador.cl/mercados/2018/08/22/impuesto-a-las-plataformas-digitales-una-oportunidad-de-innovar-y-modernizar-el-sistema-tributario/*](http://www.elmostrador.cl/mercados/2018/08/22/impuesto-a-las-plataformas-digitales-una-oportunidad-de-innovar-y-modernizar-el-sistema-tributario/)

El ministro de Hacienda lo confirmó, el proyecto de modernización tributaria ya está en un 90% y solo faltaría afinar detalles. Pues bien, dentro de las materias más discutibles de este proyecto, estará el o los impuestos a las plataformas y servicios digitales.

Dado lo avanzado del proceso, solo es de esperar que el proyecto respete dos principios relevantes. Primero, no olvidar que existe una ley sobre impuesto a la renta que, guste o no, regula gran parte de las denominadas plataformas digitales; sí, por muy extraño que suene, la ley vigente regula la tributación de la cesión de “materiales audiovisuales para ser exhibidos en cine o televisión”, “derechos de edición o autor”, o por “comisiones”.

Interpretando estas normas con una mirada más adecuada a los tiempos, pueden incluirse una serie de plataformas que nos permiten ver nuestra serie favorita, escuchar el nuevo disco, pedir un taxi o arrendar una pieza de hotel.

Entonces, como el problema no deriva de la falta de regulación, se debe recordar el segundo principio, la recaudación debe ser efectiva. La gran tarea del proyecto en esta materia es fijar un mecanismo que permita la recaudación del tributo, es decir, definir quién lo tiene que pagar.

A este respecto, la recomendación más repetida pareciera ser obligar a los operadores de tarjetas de crédito a que carguen el impuesto y lo paguen al fisco chileno.

Esta propuesta, sin mencionar el efecto en precio que tendrá para los usuarios que terminarán pagando tanto el impuesto como el costo administrativo que soporte el referido operador, parece olvidar que un porcentaje importante de estas operaciones se efectúan en efectivo (como por ejemplo el pago en el hotel o la compra de las tarjetas de prepago para descargar aplicaciones, etc.).

Esta carencia, creo, nos da la oportunidad de innovar y modernizar realmente nuestro sistema tributario, estableciendo que sean las mismas plataformas las que (sin el engorroso proceso de constituir e inscribirse en Chile) puedan registrarse para efectuar el pago respectivo desde su país de domicilio o residencia.

**4.5 Breve análisis de los anuncios del proyecto de modernización tributaria**

*23 de agosto de 2018, columna de José Yáñez, Director académico del Centro de Estudios Tributarios Universidad de Chile, disponible en* [*https://www.df.cl/noticias/opinion/columnistas/breve-analisis-de-los-anuncios-del-proyecto-de-modernizacion-tributaria/2018-08-22/221631.html*](https://www.df.cl/noticias/opinion/columnistas/breve-analisis-de-los-anuncios-del-proyecto-de-modernizacion-tributaria/2018-08-22/221631.html)

El Presidente Sebastián Piñera ha realizado una serie de anuncios que contendría el proyecto de modernización tributaria, próximo a presentarse en el Congreso. La exposición realizada se refirió a los grandes temas del proyecto, pero sin entrar en los detalles de implementación de las políticas. Para poder evaluar en su real magnitud lo propuesto, se necesita contar con más información.

En base a lo anunciado, creo que un tema muy importante dentro del paquete de medidas -dado el escenario de estrechez de recursos que existe para financiar el presupuesto, lo que ha sido señalado por el Ministro de Hacienda-, es la inclusión de algunas propuestas económicas que implicarán una disminución de recursos para el presupuesto, no quedando del todo claro cómo esto será compensado. Si bien es cierto se anunciaron algunas medidas que generarán recursos, no se especificó cuánto aumentarían la recaudación. Este aspecto es crucial, puesto que nos da la certeza de que la compensación ocurrirá. Probablemente, más adelante se tendrá más información de cada una de estas medidas, para poder evaluar de mejor manera este importantísimo punto.

Uno de los anuncios más esperados, que fue confirmado y se incluirá en el proyecto de ley es la integración perfecta entre el impuesto de primera categoría (IDPC) y los impuestos finales. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que se pague por IDPC podrá deducirse del impuesto global complementario (IGC) y del impuesto adicional (IA), en la proporción que corresponde a las utilidades retiradas de la empresa. Esto permitirá eliminar una distorsión que se produce en la tributación a la renta entre el régimen de la renta atribuida (14 A) y el régimen semi integrado (14 B). Por esta razón, desaparecerá el cobro del 35% sobre la tasa del IDPC de 27%.

Esta medida es bien evaluada desde la perspectiva de la eficiencia del impuesto y de la equidad en el sentido horizontal, pero no lo es desde el punto de vista de la equidad vertical del impuesto. Es en este punto donde se concentrará la discusión del proyecto, puesto que surgen las siguientes interrogantes: ¿Cuál será el destino de las utilidades retenidas en la empresa?, ¿se reinvertirá en la misma empresa para generar más producción y empleo en Chile? De aprobarse esta medida, se perderá el sentido de separar entre los regímenes 14 A y 14 B, lo que contribuye a la simplificación del sistema tributario chileno, y que es bien valorado.

Otros anuncios interesantes fueron los impuestos a plataformas digitales, que es una medida que busca tratar en forma más justa a las empresas que proveen estos servicios, respecto de las que están cumpliendo con una carga impositiva más gravosa; y la tendencia que se busca al lograr una igualación en el tratamiento tributario, evitando la discriminación entre sectores de actividad económica. Éste un aspecto positivo desde el punto de vista de la recaudación. Otra medida referida al uso obligatorio de la boleta electrónica, también es positiva, ya que contribuirá a reducir las posibilidades de la evasión del IVA.

En relación al anuncio de la ampliación del límite máximo del valor de las viviendas para acogerse al crédito especial del IVA desde UF 2.000 a UF 4.000, éste se traducirá en una ayuda para los consumidores de vivienda en la medida que el beneficio se traspase a ellos, a través de una reducción en el valor de la vivienda. Sin embargo, el punto en contra es que implicará una menor recaudación de IVA.

Y respecto de la prórroga de las franquicias tributarias en zonas extremas hasta el año 2035, sería bueno que esta medida esté respaldada por un estudio que demuestre su efectividad.

Hay otros anuncios sobre los cuales es muy difícil pronunciarse al no contar con más información. Indudablemente las medidas parecen buenas; sin embargo, todo dependerá de cómo se implementen en la práctica las medidas ya descritas junto a otras, tales como la defensoría del contribuyente, la simplificación de normas de tributación internacional, el mantenimiento de la recaudación tributaria, combate a la elusión y la evasión, entre otras.

**4.6 Una reforma pro contribuyente**

*23 de agosto de 2018, columna de Francisco Selamé, Socio Tax & Legal PwC, disponibkle en* [*https://www.df.cl/noticias/opinion/columnistas/una-reforma-pro-contribuyente/2018-08-22/190734.html*](https://www.df.cl/noticias/opinion/columnistas/una-reforma-pro-contribuyente/2018-08-22/190734.html)

Con el fin de asegurar su propio financiamiento y el de sus propósitos, el poder político suele desviar la atención de los derechos del contribuyente cuando se trata de la recaudación de impuestos. Por eso las bases generales del proyecto de modernización del sistema tributario que el gobierno pretende llevar adelante, y que acaba de dar a conocer esta semana, son tan notables y representan un cambio de paradigma de todas las reformas impositivas anteriores.

El nuevo proyecto coloca en el centro de atención la figura del contribuyente, el ciudadano que antaño se ponía corbata para pagar sus impuestos y que hoy declara por medios digitales, y que en la terminología de una de las más destacadas cartas fundamentales francesas, tenía el honor de contribuir al financiamiento del gasto público.

Frente a algunas disposiciones legales que tendieron a robustecer —y otorgar, en algunos casos, atribuciones exorbitantes— la fiscalización y persecución del pago de los impuestos, así como la aplicación de sanciones, la actual reforma crea una instancia de defensa del contribuyente. Esta es una figura inédita en nuestro sistema tributario que no puede tener otra finalidad que dar garantías de un debido proceso judicial y administrativo a todos los contribuyentes, incluidos aquellos que no tienen acceso a una asesoría y defensa judicial efectiva.

Haciéndose cargo de un sistema de tributación que hace tiempo renunció a medir la capacidad contributiva real de los contribuyentes, en aras de una no bien entendida homogeneidad y simpleza recaudatoria, también de manera inédita el nuevo proyecto establece una tasa de impuestos de primera categoría diferenciada de acuerdo al tamaño de las empresas.

El Estado, hasta ahora “socio” de las pymes solamente al momento de la generación de rentas, con la reforma aporta y reconoce el esfuerzo de miles de contribuyentes, permitiendo importantes deducciones a la base imponible y otros beneficios que favorezcan el crecimiento y desarrollo de este importante motor de la economía.

Por otra parte, y basado en el principio de la igual repartición de los tributos, el proyecto del Ejecutivo se hace cargo de una serie de inequidades resultantes de la integración tributaria parcial, de la ausencia de normas que gravan las rentas resultantes de la economía digital y de una mal diseñada tributación a las empresas contaminantes, entre otras.

Por primera vez en nuestra historia legislativa —y esto sin duda debemos celebrarlo— los principios y garantías constitucionales de los contribuyentes ciudadanos no son mirados como meras limitaciones o trabas al poder tributario del Estado, sino más bien como principios inspiradores de las nuevas normas tributarias que se proyectan impulsar.

**4.7 Reforma Tributaria: sin incentivos no habrá desarrollo**

*23 de agosto de 2018, columna de Dante Arrigoni, Presidente de Asimet, disponible en* [*https://www.latercera.com/pulso/noticia/reforma-tributaria-sin-incentivos-no-habra-desarrollo/291524/*](https://www.latercera.com/pulso/noticia/reforma-tributaria-sin-incentivos-no-habra-desarrollo/291524/)

La intervención del Presidente de la República anunciando los lineamientos centrales de la Reforma Tributaria, abordó temas que permitirán contar con un sistema integrado, estímulos a las pymes y depreciación acelerada, entre otros, que ayudarán a mejorar las inversiones en nuestro país, pero que son insuficientes para la manufactura.

Como presidente de Asimet, en el Foro Anual de la Industria, solicité a las más altas autoridades la rebaja del impuesto corporativo a un 24%. ¿Por qué? Chile necesita una mirada de largo plazo, con un Plan Industria 4.0 de aquí al 2040 que nos permita regresar al 15% del PIB en manufactura de los años noventa, recuperando 250 mil empleos directos y 750 mil empleos indirectos de calidad para la clase media.

Algunas de las propuestas que hizo el Mandatario, como el tributo a la renta del 25% para las pymes, que será automático y universalizando los beneficios, sin duda es positivo, porque las pymes son las que generan el mayor número de empleos. Sin embargo, y cuando se discuta en el Parlamento, es fundamental que se puedan sumar a este beneficio todas aquellas empresas que inviertan en transformación tecnológica 4.0, lo que representará un salto cualitativo para la manufactura nacional.

Otro punto importante son las depreciaciones del 100% para la Araucanía y un 50% para el resto del país. En este tema llegó el momento de encararla con una visión de futuro. El Plan Industria 4.0 de Italia permite una depreciación del 400% del capital invertido en las nuevas tecnologías, en el buen entendido que los frutos que generará (empleo de calidad y mayor recaudación fiscal) son muy superiores a una tributación inmediata.

Chile debe dar sí o sí un salto tecnológico, por lo que un proyecto país debe ineludiblemente contar con un plan de incentivos fiscales muy fuertes para la investigación, la innovación y las inversiones. La Reforma Tributaria era la oportunidad para que el Gobierno diera una señal clara de que este es uno de los objetivos centrales de su mandato. Sin duda, ello se hubiera evidenciado con una rebaja al impuesto corporativo de un 24%, que es el promedio de los países de la OCDE.

En los últimos 22 años, Chile ha perdido el 33% de su industria manufacturera, pasando del 15% del PIB a sólo el 10%, con una pérdida potencial de 250 mil empleos de calidad para sectores medios y técnicos calificados. En este lapso, aumentamos la brecha del PIB per cápita con los países más ricos. Por ejemplo, con la Alemania industrializada la brecha de riqueza subió en un 65%, pasando de una diferencia de US$16.100 a US$26.600 (PPA2018).

Los países OCDE con los que competimos, están invirtiendo en la modernización de sus industrias con incentivos fiscales para la investigación, la innovación y las inversiones, para fortalecer sus posiciones en la economía globalizada. Esto les ha permitido tener un crecimiento constante de la manufactura, alcanzando en la OCDE un promedio de un 16% del PIB. Chile tuvo un desarrollo industrial importante, pero en la actualidad la mayoría de nuestros socios comerciales nos aventajan, y trabajan sostenidamente en construir el puente entre la Industria 3.0 a la 4.0. Adoptar esta revolución industrial no significará para Chile una pérdida de empleos, sino que al igual que en los países desarrollados, recuperará los puestos de trabajo de calidad que hemos perdido en los últimos años.

**4.8 ¿Modernización?**

*23 de agosto de 2018, columna de Magdalena Brzovic, Socia de Brzovic & Cia, disponible en* [*https://www.df.cl/noticias/opinion/columnistas/modernizacion/2018-08-22/222520.html*](https://www.df.cl/noticias/opinion/columnistas/modernizacion/2018-08-22/222520.html)

¿Cómo entender este anuncio de Proyecto de Modernización?, sólo tenemos hasta ahora lo que dijo el Presidente el día martes y una minuta de los principales ejes del mismo y ya algunos critican y otros aplauden.

No sería conveniente y prudente darle el beneficio de esperar que entreguen el contenido completo? Con lo que hemos podido revisar hasta ahora este parece un esfuerzo importante por darle sentido a una reforma que cómo habrá sido de técnicamente defectuosa que tuvo que reformarse antes de entrar en vigencia. A mis 47, no conozco una ley que haya sido perfeccionada antes de entrar a regir!!!.

Sin embargo, se entiende que eso haya sido así, recordemos que el Proyecto de Reforma Tributaria presentado por Michelle Bachelet fue aprobado por la Cámara de Diputados sin que lo leyeran siquiera, y eso no lo digo yo, lo declararon los mismos disputados que lo aprobaron en 24 horas!!!. Incluso en el Senado hubo senadores que lo aprobaron sin haberse leído el texto completo, como relato más de alguna vez en entrevistas al entonces senador Candidato Presidencial.

El resultado de esa forma de legislar terminó en un monstruo que salió de la cocina de Zaldívar que nos devoró a todos. Contribuyentes sorprendidos, contadores, auditores y abogados apremiados por estudiar para no quedarnos fuera. Y resulta que nuevamente estamos con un Proyecto que cambia nuevamente las reglas del juego.

Las novedades que trae el anuncio del Ministro de Hacienda son buenas pero la experiencia indica que lo que sale del Congreso puede ser tan distinto a lo que presenta el ejecutivo, entonces no queda otra que esperar el texto que en definitiva se apruebe. ¿La pregunta es, y qué hacemos mientras eso ocurre? ¿Cómo prepararnos para este nuevo escenario tributario? Desde ya parece atractiva la idea de poder declarar bienes en el extranjero que no se han declarado en Chile, un nuevo Super 8 como se conoció vulgarmente en la Ley 20.780 de reforma tributaria, pero ahora sería un Super 10, es decir, aquellos que quieran "blanquear" activos que están en el extranjero deberán pagar al fisco de Chile un 10% sobre el valor de esos bienes. Rescatamos también el estatuto PYME, que de verdad simplifique la vida para los emprendedores y permita pagar una tasa menor de impuesto a la empresa, 25% versus 27%.

En esa misma línea la idea de la depreciación instantánea también es bienvenida, qué mejor que poder llevar a gastos la inversión que una empresa hace en activo fijo en el mismo año en que hace la inversión?

No puedo dejar de mencionar las normas que tratarán de dar certeza a los contribuyentes, y aquí aplaudimos la idea del Defensor del Contribuyente y el silencio administrativo positivo. La primera institución un contrapeso a la presencia del SII en todos los procesos en que se discuten impuestos y el segundo, lo que por años hemos reclamado de la administración del estado, si no se pronuncia dentro de un plazo prudente se entiende que me dan la razón.

Tal vez los términos no sean los más académicos, pero sirven para tratar de explicar en fácil estos temas que son de por sí áridos y por lo mismo la gente les huye y con mayor razón se discuten cargados de ideologías que sólo argumentan lo que técnicamente no pueden.

Esta vez seamos serios, saquémonos nuestras ideologías y prejuicios y hagamos un debate técnico y racional, que creo son las únicas formas de poder tener de una vez por todas un sistema tributario moderno y justo que haga que aquellos que pagan impuestos, que somos todos los chilenos sin excepción, veamos cómo se invierten bien esos dineros y de paso pagarlos pase a ser un aporte positivo y consciente al crecimiento de nuestro Chile.

**4.9 Muchas nuevas noticias**

*23 de agosto de 2018, columna de Soledad Recabarren, socia de Recabarren y Asociados, disponible en* [*https://www.df.cl/noticias/opinion/columnistas/muchas-nuevas-noticias/2018-08-22/223242.html*](https://www.df.cl/noticias/opinion/columnistas/muchas-nuevas-noticias/2018-08-22/223242.html)

El mensaje de presentación del Proyecto de Modernización Tributaria que realizó el Presidente Sebastián Piñera, trajo muchas nuevas noticias y puede ser interesante resaltar algunas de ellas.

Se confirmó que existirá un sistema tributario único, totalmente integrado. Esta noticia era muy esperada, ya que con ello se pasa a tener justicia horizontal en materia tributaria, esto es, que en dos situaciones similares se tengan igual tributación. En el régimen actualmente vigente la justicia horizontal no existe ya que, si un emprendedor conseguía financiamiento, dependiendo quien fuera su financista era la carga tributaria que lo afectaba; en efecto, si el financiamiento provenía de un capital ángel, podía optar por acogerse al 14 bis o al régimen atribuido, esto es, el emprendedor nunca estaría sometido a una carga tributaria superior al 35%, por el contrario si su financista era una Sociedad Anónima, que se incorporaba a la propiedad de la sociedad, la tasa máxima a la que se vería afecto este mismo emprendedor es de 44,45%, y esto se debe a que el impuesto de primera categoría no podía usarse en un 100% (integración total), sino que sólo se podía usar un 65% de él (integración parcial).

Se modifica el sistema tributario para las pymes, las que estarán afectas a impuesto de primera categoría con tasa 25%, y los dueños tributarán sobre base retirada, pudiendo acogerse voluntariamente estos contribuyentes a tributar en base caja con rentas atribuidas y exentas de primera categoría.

Quizás lo más novedoso que se anunció es la creación de la figura del Defensor de Derechos del Contribuyente (denominado "DEDECON"), la cual pretende dejar en igualdad de condiciones, frente a un conflicto, a los Contribuyentes con el Servicio de Impuestos Internos, esta institución conversará en igualdad de condiciones con el SII, lo que hasta ahora no existía, y que está en línea con lo recomendado por la OECD.

Las medidas pro inversión se radicarán principalmente en zonas extremas y la Araucanía, en este último caso, operará una depreciación instantánea por el plazo de dos años. Esto implica que cualquier inversión en activo fijo, esto es maquinarías o construcciones que se realicen en esta zona, serán considerados un gasto del ejercicio. Adicionalmente, se da el beneficio de una depreciación hiper acelerada a todas las empresas, ya que podrán depreciar el 50% del activo fijo en un año. Este beneficio durará 2 años y claramente busca reactivar la inversión.

Y para el final, hay todo un cambio de criterio en cuanto a la deducción de gastos, permitiendo deducirse aquellos gastos vinculados a la actividad del contribuyente y ya no exigiéndose que fuera inevitable u obligatorio.

Este proyecto trae muchísimas materias y habrá tiempo de revisarlas una a una, así como conocer la opinión del Congreso, cuando las discuta.

**4.10 La ilusa modernización tributaria sin rentas regionales**

*24 de agosto de 2018, columna de Esteban Valenzuela y Jaime Mulet, ex diputados, disponible en* [*http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2018/08/24/la-ilusa-modernizacion-tributaria-sin-rentas-regionales/*](http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2018/08/24/la-ilusa-modernizacion-tributaria-sin-rentas-regionales/)

*El anuncio de una ley de “modernización” tributaria por parte de Sebastián Piñera, junto con evitar el regreso de malas prácticas evasivas de grandes empresas, tendrá alguna viabilidad si busca el acuerdo con los territorios, combina la redistribución de recursos con tasas incrementales a industrias de recursos naturales con bajísima tributación territorial y pierde el miedo a dar autonomía a las regiones para que se hagan corresponsables de su desarrollo en verdaderas alianzas público-privadas y sociales, en un ciclo virtuoso de neodesarrollismo que no pierda de vista la competitividad sistémica, poniendo en movimiento el capital social endógeno.*

Es inviable políticamente, para activar el país, no considerar el empoderamiento fiscal de las regiones en una nueva reforma tributaria llamada “de modernización” en cuatro años –la quinta desde que volvió la democracia–. Invisibilizar lo regional, ad portas de iniciar un proceso hacia la elección de gobernadores regionales, después de 190 años de haberles quitado a los territorios dicho derecho, resulta injusto porque las coyunturas tributarias requieren grandes consensos para ser sostenibles. Lo obrado por el ministro Arenas y Bachelet tuvo méritos en terminar con privilegios y abierta corrupción tributaria, pero le faltó consenso para asegurar incentivos de capitalización a las Pymes e incluir el notable consenso alcanzado en materias de rentas subnacionales por la Comisión Presidencial para la Descentralización del año 2014, la que adecuadamente argumentó de manera unánime en favor de la descentralización fiscal. Ello porque:

Posibilita mejorar la eficiencia en el uso de los recursos al disminuir la burocracia de intermediación, acortando los ciclos desde el levantamiento de demanda hasta la provisión de soluciones públicas.

Posibilita la Cohesión Social y Gobernanza Territorial, entendida como el resultado esperado de avanzar hacia la construcción de un país territorialmente equilibrado.

Activa las economías locales, siendo clave en la teoría del desarrollo la reinversión de renta en los territorios para su infraestructura, capital social avanzado y redes de emprendimiento e innovación.

El anuncio de una ley de “modernización” tributaria por parte de Sebastián Piñera, junto con evitar el regreso de malas prácticas evasivas de grandes empresas, tendrá alguna viabilidad si busca el acuerdo con los territorios, combina la redistribución de recursos con tasas incrementales a industrias de recursos naturales con bajísima tributación territorial y pierde el miedo a dar autonomía a las regiones para que se hagan corresponsables de su desarrollo en verdaderas alianzas público-privadas y sociales, en un ciclo virtuoso de neodesarrollismo que no pierda de vista la competitividad sistémica, poniendo en movimiento el capital social endógeno.

Llamamos a integrar en este posible Acuerdo Tributario Amplio Regionalizado (ATAR), a considerar las 10 principales propuestas de dicha Comisión que actualizamos en los siguientes puntos para proponerse por ley que municipios, regiones y autonomías indígenas alcancen el 35% del gasto fiscal hacia el 2025, en un mix de normas de redistribución de recursos actuales, actualización catastral municipal y rentas regionales.

Pero no basta elegir autoridades y tener competencias, se requieren recursos y autonomía para endeudarse en megaproyectos con prudencia, lograr terminar con brechas, obligarse a la austeridad como Estado central sin multiplicar las agencias y servicios nacionales en una sobreinstitucionalización inútil para avanzar.

Recordemos que en el contexto de la OCDE Chile está muy rezagado, porque su carga fiscal es 21% versus 34% del conjunto, la descentralización de los mismos se mueve en un 17% versus el 40% del club “desarrollado”, siendo más grave en inversión física, en que nuestro país es solo un 15% de resorte municipal y regional versus el 80% en las democracias avanzadas.

No hay mucho que estudiar y es hora de empujar las propuestas de la Comisión Descentralizadora del 2014, las que fueron unánimes y tras 16 cabildos regionales (incluyó pioneramente a Ñuble), como lo hizo el ex ministro Pacheco, de Energía, al tomar la propuesta de rango de convergencia en el precio de la energía eléctrica domiciliaria, evitando una injusta discriminación.

Llamamos a integrar en este posible Acuerdo Tributario Amplio Regionalizado (ATAR), a considerar las 10 principales propuestas de dicha Comisión que actualizamos en los siguientes puntos para proponerse por ley que municipios, regiones y autonomías indígenas alcancen el 35% del gasto fiscal hacia el 2025, en un mix de normas de redistribución de recursos actuales, actualización catastral municipal y rentas regionales.

1. Traspaso de los impuestos mineros territoriales al sistema regional: Se mejora la actual patente minera y se traspasa el Impuesto Específico Minero al sistema regional (elevándolo del 3.8 al 5%), con la siguiente distribución que asegura el mantenimiento del porcentaje actual de los Fondos de Innovación para la Competitividad Regional y con mayor protagonismo con sus consejos de innovación. Se propone la siguiente distribución:

20% al o los Municipios de localización de las faenas mineras (un reglamento combinará las variables: yacimiento, logística, instalaciones y lugar de residencia de trabajadores).

20% a las comunas restantes al lugar de localización de la faena minera, según población.

10% se destina a Fondos Regionales de Innovación en Ciencia y Tecnología.

50% al Fondo de Convergencia y Solidaridad Interregional.

2. Ley espejo de inversión en metros, trenes y corredores urbanos de buses: Esto obliga a que anualmente lo invertido en la RM en estos ítems, que hoy manejan MOP, MINVU, METRO y EFE, signifique un máximo de 40% de la inversión, debiendo invertirse un 60% en las restantes regiones. Para evitar inflexibilidad, se puede ecualizar el gasto en períodos trianuales.

3. Permitir endeudamiento para megaproyectos: Esto permite asociarse entre regiones, con provincias argentinas, consorcios público-privados que transformen los territorios y dinamicen la economía, tales como de carreteras, túneles bioceánicos con tope máximo de pago anual de deuda que no supere el 7% del presupuesto anual. Del mismo modo, podrán acordar financiamiento plurianual de obras, programas y subsidios.

4. Fortalecer la recaudación predial municipal por mejores servicios y terminar con privilegios de las grandes cadenas en patente comercial: En el impuesto de bienes raíces se debe obligar al Estado Central de manera incremental, en 6 años, a devolver a los municipios el 100% de los montos de exención del impuesto territorial a las municipalidades y el FCM (hoy el 80% de los predios está exento), a cambio de Servicios Municipales Garantizados que se formulan quinquenalmente con alta eficacia o se suspende a los alcaldes por alto abandono de deberes. Los municipios con más de 20 mil habitantes deberán tener oficina de catastro pactada con el SII para mantener reavalúo vigente, esto es, concordante con el principio de corresponsabilidad.

También terminar con privilegios de grandes cadenas al eliminar el tope de patentes comerciales (hoy en ocho mil UTM) y se establece una patente mínima de UTM 1, el valor mínimo de patente se aplicará por sucursal, oficinas, establecimientos, locales u otras unidades de gestión empresarial, con objeto de eliminar inequidad en el pago entre grandes empresas y empresas de menor tamaño. Se pone fin a exenciones en el pago de patentes comerciales a industrias extractivas de áridos, pesca y forestal (minería paga patente propia).

5. Crear la Patente Eléctrica: Impuesto que debe pagar cada central de generación en el o los municipios donde se localiza, distribuyéndose el pago en un 70% en el municipio respectivo y un 30% para la región respectiva. Con un 60% deducible del impuesto de primera categoría. Aplicándosele el régimen general de cálculo de patentes. Debe considerarse, en caso de afectar comunidades indígenas, procesos participativos en conformidad con el Convenio 169.

6. Tasa Portuaria Territorial: Se crea la tasa portuaria a las empresas portuarias concesionarias y no concesionarias, según tipo de carga a aplicar por tonelada . La puesta en marcha no será inmediata, sino gradual, comenzando el año 2019, estableciendo que el monto máximo corresponderá a US$ 0,5 por tonelada a alcanzar en un plazo de cinco años. Dicho cobro se tipificará según la siguiente tabla (Valores en dólares):

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Granel líquida: 0.1 0,2 0,2 0,2

Carga fraccionada: 0,1 0,3 0,3 0,3

Carga de contenedores: 0,1 0,3 0.35 0,5

Granel sólido: 0,1 0,3 0,35 0,5

En cuanto a la distribución, se propone que un 50 % de la recaudación quede en la Comuna de localización del Puerto y el 50 % restante al Gobierno Regional. Así, también, se establecerá por ley que el 50% del canon de arriendo y otros pagos que se hagan al fisco por parte de las empresas concesionarias y no concesionarias de los puertos de Chile, tanto a las empresas portuarias estatales como al fisco. Se transfieran a las arcas municipales respectivas, de un modo directo y no condicionado, en forma anual, el 70% de este canon, y el 30% se distribuye a los municipios de la provincia respectiva.

7. Pago de las forestales a los territorios: Por la vía de impuesto especial de tala a grandes empresas forestales (consideradas como aquellas que tienen más de 200 hectáreas plantadas). Dichas empresas se mantendrán exentas del pago del impuesto predial, pero al cosechar pagarán al municipio respectivo un impuesto de 20 UTM por hectárea (según informe Conaf).

8.-Establecer El Fondo de Convergencia y solidaridad interregional con privilegio a zonas rezagadas, extremas, indígenas y agrícolas: El objetivo del Fondo es permitir la intervención en territorios funcionales, mediante la generación de inversiones públicas y estimular la inversión privada, desde una lógica de desarrollo endógeno de los territorios y la reducción de brechas socioeconómicas. El Fondo de Convergencia opera como block grant (menú flexible de proyectos y programas a cargo de cada región) de carácter plurianual y no como fondo condicionado (categorical grant) a gasto específico. Los montos que lo integrarán provendrán en un 50% del presupuesto nacional (royalties), en un 25% del presupuesto de la respectiva región y en un 25% de derechos y patentes del respectivo territorio.

9. Incentivos a localización de actividades productivas en regiones: Se propone la disminución gradual de los impuestos de primera y segunda categoría en regiones, en la misma proporción de su aumento en la Región Metropolitana, de un modo que este incentivo sea neutro para las arcas fiscales. En específico, se debe establecer un mecanismo que permita que el impuesto a la renta de las empresas y las personas sea entre un 2% y 4% menor, dependiendo de la ubicación geográfica donde ejercen y del tipo de actividades.

10. Permitir la creación de empresas públicas regionales y convertir la Corfo en 16 corporaciones regionales de fomento: Esto con el objetivo de crear servicios, asociarse con privados, traspasándole a ellas los bienes fiscales, terrenos sin uso, remanentes de recursos mineros y del litio, todo lo cual requiere la aprobación del 60% del respectivo Consejo Regional.

**4.11 Minuta progresista: apoyo a reintegración tributaria**

*25 de agosto de 2018, columna de Gonzalo Restini, empresario y panelista de Información Privilegiada de Radio Duna, disponible en* [*https://www.latercera.com/pulso/noticia/minuta-progresista-apoyo-reintegracion-tributaria/294902/*](https://www.latercera.com/pulso/noticia/minuta-progresista-apoyo-reintegracion-tributaria/294902/)

Querides amigues, adjuto minuta con argumentos de apoyo a Modernización Tributaria.

1. Un Sistema Complejo crea incertidumbre: La mejor razón para volver a la integración es el sistema que les persones entienden y han usado por 30 años. En Suecia se manejaba a la inglesa hasta 1967. En el “H Day” se comenzó a manejar por la derecha para coordinarse con países vecinos. El caos fue inmenso. Acá se instaló un sistema triple (Atribuido, Integrado y Pyme), con el triple de registros y decenas de Declaraciones Juradas. Podría ser nuestro “3X H Day” (aunque la H puede llevar a interpretaciones erróneas). Fue como si además de cambiarnos de lado para manejar, nos hubiesen subido a una moto con side car controlada mediante de 72 botones (las DJ). Nadie entendió, les contadores se declararon en rebeldía, les contribuyentes se aterraron y el SII colapsó. No había para qué… Un mínimo de sensatez indica volver a lo conocido.

2. El Sistema Integrado es más Justo: Algo que los críticos del FUT nunca entendieron o quisieron entender es que les persones deben pagar impuestos por los ingresos que realmente perciben. En el caso de les empresaries, sus sueldos más los dividendos retirados. El clásico Sistema Integrado captura esta lógica. El cuento de que les empresaries “postergan el pago del impuesto” es falso. El impuesto la empresa lo paga al tiro. De las utilidades, lo que no se retira, se mete de vuelta al negocio. Le empresarie paga s us impuestos cuando finalmente le llega la plata, descontando los impuestos pagados antes. Así, paga impuestos idénticos a un empleade po que nunca ha hecho un negocio. Así, les empresaries que reinvierten pagan mucho más impuestos que un empleade, la ya mítica “Paradoja de Segurelli y Paganini”. En el caso del Parcialmente Integrado, hay un castigo que hace que los sueldos paguen menos impuestos que el retiro. Esto desalienta el emprendimiento y empuja a les posibles empresaries a transformarse en asalariades.

3. El Sistema Integrado Promueve la Inversión: pagar impuestos a nivel personal cuando las utilidades se retiran implica un incentivo a la reinversión. La Reforma Tributaria mató uno de los factores que determinaron las altísimas tasas de Inversión / PGB en Chile hasta 2014. Según la CPC, el 70% de la reinversión en los últimos 30 años se financió por utilidades retenidas. Luego de la Reforma, la inversión no hizo otra cosa que caer. No fue la única razón, pero sí es un gran sospechose de ello.

4. El Argumento “Recauda menos” es miope: no nos cansaremos de repetirlo: el presupuesto del Estade de Chile en 2017 fue 10 X el de 1990 en US$. Es de hecho, equivalente a TODO el PGB de ese año. Como es obvio, la inmensa proporción del aumento se debe al crecimiento. Si hay un sistema tributario (3 en rigor) de tasas más altas, pero enredado, que desincentiva la inversión y el emprendimiento, al poco andar recaudará menos. Todo lo demás igual, la diferencia entre crecer al 1,8% vs al 4% en 20 años es una economía (y una recaudación) 75% más grande. No hay tasa que compense. La mejor receta para tener más recursos para políticas sociales es el crecimiento.

En base a todo esto, si piensa en el bienestar de les chilenes, recomendamos apoyar. Si tiene dudas, consúltelas con le almohade. Saludes.

**4.12 Más allá de 2019**

*26 de agosto de 2018, columna de Sebastián Claro, disponible en* [*http://www.elmercurio.com/blogs/2018/08/26/62785/Mas-alla-de-2019.aspx*](http://www.elmercurio.com/blogs/2018/08/26/62785/Mas-alla-de-2019.aspx)

Las cifras macroeconómicas están dando cuenta de una economía que crece con ímpetu. El crecimiento del primer semestre fue 5,3%, y esta cifra no solo refleja una recuperación de la minería, que sufrió una fuerte paralización en la primera parte del año pasado, sino también de otros sectores de la economía. Junto con ello, destaca el repunte de la inversión y la mejoría en las expectativas empresariales y de consumidores.

Las perspectivas de crecimiento para este año y para 2019 bordean el 4%, lo que representa un aumento significativo respecto de lo observado en los últimos años. De ahí en adelante, sin embargo, la pregunta está abierta. Los ruidos externos, la caída de la bolsa y la debilidad del peso levantan legítimas inquietudes. ¿Qué esperar?

La tasa de crecimiento de tendencia se ha estacionado en valores algo superiores a 3%. Ello significa que, una vez eliminado el exceso de capacidad que acompañó a los años de bajo crecimiento, la economía debiera andar entre 3% y 3,5%. Las holguras no son tan amplias como en otros ciclos en el pasado -en buena parte porque el menor crecimiento de los últimos años refleja exactamente la caída en el crecimiento potencial-, por lo que dos años creciendo en torno al 4% parecen suficientes para eliminarlas.

Así, para sostener este dinamismo desde el 2020 en adelante y superar la fuerza de gravedad que empuja hacia el 3% se requiere algo más. Los ruidos del cóctel que combina alzas de tasas en Estados Unidos, el esfuerzo por controlar la deuda en China y una guerra comercial que no da señales de frenarse sugieren que no será el impulso externo lo que haga la diferencia. Si algo, los riesgos externos apuntan a la baja.

Por ello, el esfuerzo debe ser interno, con propuestas en áreas clave que estimulen el crecimiento de mediano plazo. Estrictamente hablando, esta debiera ser una prioridad permanente. En parte, porque la dicotomía entre crecimiento y distribución del ingreso está lejos de ser cierta. En un mundo integrado, el costo de las políticas que desincentivan la inversión y deterioran la productividad recae con mayor fuerza en los sectores de menores ingresos, cuyas opciones de trabajo y movilidad están más restringidas.

El proyecto tributario del Gobierno es una buena oportunidad para corregir ciertas trabas al crecimiento. La propuesta reconoce que un cargo excesivo a las rentas del capital -como el que ha experimentado Chile en los últimos 10 años- ha afectado la inversión, y se hace cargo de la apretada situación fiscal. Es sensata y equilibrada, lo que facilita su discusión en el Congreso. El país demanda un acuerdo duradero en esta materia. De lograrse, ello podría ser un catalizador para un aumento más sostenido en la inversión.

**4.13 Tres falacias con que se pretende justificar la nueva Reforma Tributaria**

*29 de agosto de 2018, columna de Ramón López disponible en* [*http://www.elmostrador.cl/mercados/2018/08/29/tres-falacias-con-que-se-pretende-justificar-la-nueva-reforma-tributaria/*](http://www.elmostrador.cl/mercados/2018/08/29/tres-falacias-con-que-se-pretende-justificar-la-nueva-reforma-tributaria/)

Revisemos tres razones con las que se ha intentado justificar la Reforma Tributaria

1. La integración tributaria propuesta, sería pro-inversión. Falso; La integración beneficia los dividendos ya retirados de las empresas sobre todo por los grandes inversionistas que ganarían USD 600 millones anuales si la reforma prospera. Estos ingresos ya están fuera de la empresa (son dividendos) y de acuerdo con estimaciones la propensión a consumir (en bienes durable y suntuarios) sobre los ingresos del capital es alrededor de 0.66. Es decir 2 tercios de los USD600 millones anuales van a fomentar el consumo y solo un tercio iría a aumentar el ahorro. Cuanto de este ahorro va a la inversión en Chile es incierto, ya que una parte importante de estos mayores ahorros se invierten fuera del país o van a inversión meramente financiera. Así, el efecto sobre la inversión de esta medida, a un tremendo costo fiscal, es mínimo.

Además, integrar el sistema genera mayores incentivos para que las empresas distribuyan una parte mayor de sus ganancias como dividendos ya que estos pagarían una tasa menor de impuestos, lo cual reduce los incentivos a invertir en la forma de utilidades retenidas.

2. La reintegración fomentaría la equidad tributaria entre ingresos del trabajo y del capital. Falso, lejos de mejorar esta equidad la reintegración del sistema la empeora. Los proponentes de la integración argumentan que esto se debe a que la tasa de impuesto máxima al ingreso del trabajo es 35% pero sobre las utilidades retiradas es 44%. La falacia de esta comparación está en el hecho de que las bases tributarias sobre las cuales se aplica el impuesto son diferentes. La base tributaria del impuesto al trabajo (digamos un ingeniero que gana $50 millones anuales) es prácticamente el 100% de este ingreso ya que, a diferencia de los ingresos de capital, los empleados no tienen derecho a deducir de la base tributaria la depreciación de su capital humano (el cual sí se deprecia con la edad y la obsolescencia) ni los intereses pagados por la deuda incurrida para financiar sus estudios. En cambio, al ingreso tributable del capitalista se le permite deducir todos los intereses incurridos en la deuda para financiar la inversión y además pueden deducir la depreciación del capital físico, la cual como un beneficio adicional se permite depreciar a una tasa acelerada. Así, la base tributaria del ingreso de capital puede fácilmente ser menos de 50% del ingreso neto total del capital. Por lo tanto, si el capitalista paga impuesto sobre solamente el 50% de su ingreso neto la tasa marginal de impuesto efectiva es solo 22% y no 44% como se plantea. Mientras tanto, al ingeniero del ejemplo el SII calcula sus impuestos sobre el 100% de su ingreso neto, pagando el 35% marginal, un 60% mayor que el impuesto al ingreso de capital. Esto implica que en la actualidad el sistema tributario genera inequidad horizontal, pero el sesgo a favor de los ingresos del capital.

La reintegración tributaria aumenta todavía más esta inequidad. La tasa efectiva de impuesto del capitalista bajaría de 22% a 17.5% (que corresponde al 50% del 35% que sería la nueva tasa para los ingresos del capital con la reforma) mientras que la tasa marginal del ingeniero se mantiene en 35%. Así, la brecha de inequidad entre la tributación de los ingresos del capitalista y del ingeniero sube casi al 100%.

3. El ministro Larraín insiste en que el sistema tributario actual discrimina contra el inversionista nacional y a favor del extranjero. Otra falacia. Su argumento se basa en que el inversionista extranjero paga en el margen solo el 35% de impuestos mientras que el chileno paga 44%. Sin embargo, el inversionista extranjero tiene además que pagar impuesto en su país de origen por los dividendos obtenidos en Chile. Y la gran mayoría de los países no tiene la generosidad que tenemos aquí para con los capitalistas. En USA, por ejemplo, el inversionista paga una tasa de 20% sobre los dividendos sin derecho a descontar lo que su empresa ha pagado. Así, el inversionista norteamericano por cada $100 de utilidad paga $35 en Chile más el 20% sobre el remanente no gravado en Chile, o sea paga una tasa neta de 48% comparado con los $44 que actualmente paga el inversionista chileno.

**4.14 Modernización tributaria: un nuevo concepto de gasto**

*30 de agosto de 2018, columna de Camilo Béjar, director del Grupo Tributario de AZ, disponible en* [*https://www.df.cl/noticias/opinion/columnistas/modernizacion-tributaria-un-nuevo-concepto-de-gasto/2018-08-29/151728.html*](https://www.df.cl/noticias/opinion/columnistas/modernizacion-tributaria-un-nuevo-concepto-de-gasto/2018-08-29/151728.html)

El día lunes de esta semana Juan, el director de Capital Humano de una multinacional con sede en Chile, le propuso al country manager (CM) comprar una consola de videojuegos, una mesa de pool y una parrilla (calificada como "atómica" en sus palabras) para la celebración del 18.

Los colaboradores de esta empresa, cuya base está en el llamado Silicon Valley, tienen en su mayoría menos de 35 años y, de alguna forma, están acostumbrados a este tipo de gestos.

La respuesta del CM, fue un tanto dura... "esto claramente va a ser un gasto rechazado".

Esta historia (no muy alejada de la realidad) lleva a lo que el proyecto del gobierno ha llamado la "Modernización del concepto de gastos del giro de la empresa".

Hasta hoy, el SII ha repetido una suerte de mantra respecto de cuáles son los requisitos que debe cumplir un empresa para que un gasto califique como necesario.

Los adjetivos utilizados han sido que un desembolso debe ser "inevitable", "obligatorio" o "indispensable". Pero más aún, no solo es necesario que ellos cumplan cualitativamente con estas condiciones, sino que además el servicio ha indicado que el monto del desembolso es un factor indicativo de su necesariedad (es decir que no sea "mucho", sino pareciera que por defecto cae en la calificación de no necesario).

La discusión no es superflua, ya que cualquier desembolso no necesario se grava con un impuesto especial del 40%.

Por otro lado, la aplicación práctica de estos criterios ha sido muchas veces bastante estricta (cuestión que el propio mensaje del proyecto reconoce).

He sido testigo de fiscalizaciones donde se han rechazado gastos de abogados en litigios, intereses pagados en financiamientos con partes relacionadas a tasas de mercado (por estimar que una estructura de back to back no era indispensable, sino que los flujos podrían haber ingresado como capital), correcciones monetarias de estos pasivos y otras partidas, solo porque el fiscalizador estimó que el desembolso no cumplía en su opinión con estos criterios.

Para qué decir el caso de las costas judiciales de las Isapres, los pagos derivados de cláusulas contractuales que establecen "multas" por término anticipado de un contrato o lo que ocurre con los desembolsos en RSE.

Por esta razón, la nueva definición de gasto aceptado es especialmente valiosa, ya que incluye conceptos como: a) el gasto puede estar directa o indirectamente vinculado al giro; b) debe tener causa lícita y no un origen en comportamientos dolosos (sí, solo menciona doloso); c) se agregan gastos especiales como gastos en RSE y en cumplimiento de una transacción o bien de una cláusula penal.

Sobre el primer punto, la norma propuesta señala que este concepto incluye "el desarrollo de las operación o negocios de la empresa o (...) el interés de la misma; incluyendo gastos ordinarios, extraordinarios, habituales, excepcionales, voluntarios (sí, VOLUNTARIOS) u obligatorios".

Además, el proyecto propone: a) permitir el castigo de incobrables con no relacionados impagos por más de un año desde su vencimiento o el valor que resulte de aplicar los porcentajes de castigo que establecerá el SII mediante resolución (tomando en consideración indicadores de incobrabilidad del sector relevante); b) permitir la deducción como gasto de las indemnizaciones por años de servicios pagadas cuando una compañía reconoce antigüedad de trabajadores, aun si no opera el principio de continuidad en materia laboral y varias otras medidas.

Como se ve, a diferencia de lo que ocurrió con la reforma del 2014, la modernización pareciera comenzar a recoger una nueva mirada de lo que es la empresa y de cómo esta invierte sus recursos para generar ingresos futuros. Pero, como en toda reforma, esta historia recién está comenzando.

**4.15 Una reforma para el futuro**

*30 de agosto de 2018, columna de Francisco Lyon, socio Líder de Tax&Legal de KPMG, disponible en* [*https://www.latercera.com/pulso/noticia/una-reforma-futuro/300450/*](https://www.latercera.com/pulso/noticia/una-reforma-futuro/300450/)

Es de esperar que los distintos sectores tengan la capacidad de entenderse, frente al proyecto de modernización tributaria recientemente presentado por el Gobierno, con miras a un necesario ajuste en nuestro sistema y normas tributarias. Debemos tener la capacidad de discutir bajo estrictos estándares técnicos, dejando a un lado consideraciones que no contribuyan en esta dirección.

Así, a modo de ejemplo, es importante que podamos entender la conveniencia de avanzar en simplificar nuestra estructura sobre impuesto a la renta empresarial, con miras a tener un solo régimen general de tributación (sin perjuicio de ciertas excepciones sectoriales optativas), siendo la integración propuesta en el Proyecto un paso importante (entre otros aspectos que se proponen).

Esto, sin mencionar la notable mejora que se produciría en concepto de equidad horizontal, la que actualmente se ve afectada por la coexistencia de los regímenes Atribuido y Semi-Integrado, lo que en la práctica genera una serie de distorsiones que se corregirían. Por supuesto que la recaudación y la carga tributaria final son muy importantes, pero no podemos extremar la instrumentalización de la estructura impositiva, al punto de “justificar” lo negativo de su diseño, por la necesidad de alcanzar el “número”.

Lo correcto sería, por un lado, acordar una adecuada estructura impositiva, la que nos pueda acompañar por muchísimos años, y por otro, fijar la carga correspondiente, en tasa impositiva. Y, cuando se necesiten ajustes, en lo posible que sea esto último y no la estructura lo que deba moverse en forma dramática cada vez, afectando la necesaria estabilidad y seguridad del sistema.

El Proyecto contiene otros avances, como los impuestos digitales, modificaciones en materia de gastos rechazados, tratamiento sobre Pymes, correcciones y modificaciones a normas sobre mercado de capitales y, otras modificaciones que en general son positivas sobre distintos cuerpos legales, cuyo análisis técnico debiera imponerse, nuevamente, por sobre toda otra consideración, reconociéndose asimismo, y en todo caso, los aspectos susceptibles de perfeccionarse o corregirse en la tramitación correspondiente.

Finalmente, como un paso modernizador debiera ser entendida la nueva Defensoría del Contribuyente. Nuestro SII se ha destacado históricamente por su profesionalismo, seriedad y eficiencia, en que la creación de este nuevo organismo del Estado, no hará sino confirmar nuestro liderazgo, en un paso más de modernización en la relación autoridad – contribuyente.

Sería un error entender esta Defensoría como una forma de debilitamiento del eficiente actuar fiscalizador del SII, pues más bien se trata de avanzar en un marco relacional bajo objetivos comunes: por un lado incentivar el adecuado cumplimiento tributario de los contribuyentes, y por el otro, bajo una fiscalización eficiente de la autoridad y con los más altos estándares, fomentar en todo momento un ambiente de cercanía con el contribuyente, en el marco de la continua observancia de sus garantías y derechos, potenciándose cada vez más el mejor ambiente de negocios, en pro del desarrollo de nuestro país .

**4.16 Reforma tributaria: ¿y si conversamos en serio?**

*30 de agosto de 2018, columna de Sergio Espejo, disponible en* [*http://www.elmostrador.cl/mercados/2018/08/30/reforma-tributaria-y-si-conversamos-en-serio/*](http://www.elmostrador.cl/mercados/2018/08/30/reforma-tributaria-y-si-conversamos-en-serio/)

El debate sobre el proyecto de reforma tributaria estos días ha sido de antología. Primero, con un ministro de Hacienda que no parecía dominar el detalle de los cálculos financieros que justifican una iniciativa de gran complejidad. Luego, con parte importante de la oposición anunciando su rechazo a un texto que no conocían. Los chilenos, sobre cuyos impuestos es precisamente este debate, merecemos más que eso.

Para ser consistente con mi argumento, difícilmente podría entrar a calificar el detalle de un proyecto que todavía requiere mucho estudio. Pero aquí aventuro algunas ideas.

En primer lugar, contrariamente a lo que parece reclamar la mayoría de la oposición, la integración tributaria es una medida de justicia. A igual ingreso, igual tributación. Lo relevante no es la empresa, sino las personas que pagan los impuestos. Eso se llama equidad tributaria. No está de más recordar que la reforma tributaria original de la Presidenta Bachelet planteaba precisamente un sistema integrado. Tampoco sobra el señalar que el sistema atribuido, al que adscribe la mayoría de las empresas, es un sistema integrado.

Así las cosas, si lo que queremos es aún más justicia tributaria, existen múltiples opciones para debatir a propósito de este proyecto. Distintas, por cierto, de oponerse a una integración que parece razonable.

Contrariamente a lo que parece reclamar la mayoría de la oposición, la integración tributaria es una medida de justicia. A igual ingreso, igual tributación. Lo relevante no es la empresa, sino las personas que pagan los impuestos. Eso se llama equidad tributaria. No está de más recordar que la reforma tributaria original de la Presidenta Bachelet planteaba precisamente un sistema integrado. Tampoco sobra el señalar que el sistema atribuido, al que adscribe la mayoría de las empresas, es un sistema integrado.

La primera, de enorme impacto, es terminar con el verdadero “forado” que representa la exención tributaria por ganancias de capital derivadas de la venta de acciones con alta presencia bursátil. Comprenderán ustedes que no son los más pobres ni los sectores medios quienes viven de esto, por lo que terminar con esta figura es un avance real en progresividad. Si no lo creen, pregunten a los accionistas de SQM que entendieron bien (para variar) hace pocas semanas, las ventajas impositivas de dar a sus papeles en venta “presencia bursátil” mediante la contratación de un market maker.

En segundo lugar, un sistema más progresivo pasa por terminar con la renta presunta. ¿Se atreverán nuestros parlamentarios a revisar este espacio atávico de injusticia tributaria? ¿O se atreverán a revisar al alza el impuesto al diésel, mantenido arbitrariamente bajo para evitar conflictos políticos con gremios poderosos?

Por último, si queremos un sistema progresivo, podemos tomar la palabra del presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Alfonso Swett, y subir la tasa de impuesto de los más ricos. Es decir, con integración, tributación de la compra y venta de acciones en bolsa, fin de la renta presunta y alza de la tasa del impuesto global complementario para las personas de mayores ingresos, tendríamos no solo equidad horizontal sino además progresividad.

Más allá de este debate, está en la cancha del Gobierno el demostrar que efectivamente su propuesta no disminuye la recaudación. La experiencia de la reforma tributaria anterior demuestra que las expectativas de recaudación siempre están sobreestimadas. Nada hasta ahora parece indicar lo contrario. De hecho, el mayor ingreso vía boleta electrónica parece marginal cuando se piensa que los mayores resultados ya se produjeron con la conversión de los recibos de tarjetas en boletas y con la incorporación de la factura electrónica. Deberá el Gobierno además trabajar, durante el proceso legislativo, para modificar su propuesta hasta asegurar la progresividad que resulta razonable exigir a cualquier sistema tributario.

Así las cosas, lejos de considerar esta reforma como una excusa más para las escaramuzas entre el Gobierno y la oposición, estoy convencido de que se trata de una gran oportunidad para construir un mejor sistema tributario. Uno que no solo haga nuestro país más justo, sino también le ayude a recuperar el dinamismo económico indispensable para abrir más oportunidades.

Entonces, ¿qué tal si conversamos en serio?

**4.17 Modernización tributaria: justicia y eficiencia**

*31 de agosto de 2018, columna de John Henríquez, abogado de Libertad y Desarrollo, disponible en* [*https://www.df.cl/noticias/opinion/columnistas/modernizacion-tributaria-justicia-y-eficiencia/2018-08-30/183445.html*](https://www.df.cl/noticias/opinion/columnistas/modernizacion-tributaria-justicia-y-eficiencia/2018-08-30/183445.html)

Recientemente ingresó a tramitación al Congreso la anhelada modernización tributaria, una de las principales banderas de campaña del actual gobierno. Dicha discusión es mayoritariamente técnica, pero no debemos olvidar sus componentes filosóficos.

Adam Smith, padre de la economía liberal, en “La Riqueza de las Naciones” se refirió a las tareas legítimas u obligaciones del Estado. El filósofo moral señaló que el Estado, además de encargarse de la defensa nacional y la administración de justicia, debía “establecer y sostener aquellas instituciones y obras públicas que, aun siendo ventajosas en sumo grado a toda la sociedad, son, no obstante, de tal naturaleza que la utilidad nunca podría compensar su costo a un individuo o a un corto número de ellos y, por lo tanto, no debe esperarse que éstos se aventuren a fundarlas ni a mantenerlas”. Así, contrario a la creencia popular, Smith adhiere a una intervención estatal acotada, la recaudación de fondos vía impuestos e incluso a que estos sean progresivos (que quienes ganen más, aporten en mayor proporción).

Respecto de la forma de recaudar impuestos para el financiamiento de bienes públicos debemos ser cautelosos. Los sistemas tributarios, para ser eficientes y evitar distorsiones, deben cumplir con ciertos principios. De esta manera, para evaluar el mérito de la propuesta del Ejecutivo, debemos analizar si la iniciativa avanza en simplicidad del sistema, equidad y eficiencia.

El sistema tributario vigente carece de equidad horizontal. Hoy, una persona que recibe dividendos de una sociedad que tributa en el sistema semiintegrado con base en utilidades retiradas, sólo puede destinar el 65% del impuesto pagado por la empresa como crédito a sus impuestos personales, por lo que termina pagando una mayor tasa que el ingreso del trabajo, a pesar de que se trate de los mismos montos. En este caso, estamos frente a una distorsión injusta, en que se termina afectando tanto a los dueños de las PYME como a la inversión. Peor es el panorama para un chileno en comparación con un inversionista de un país con el que Chile tenga convenios de doble tributación.

Asimismo, debemos tener en consideración que el sistema tributario altamente complejo creado por la reforma de la administración anterior, difícil de fiscalizar para el Servicio de Impuestos Internos y con elevados costos de cumplimiento, no contribuye a generar certidumbre y simpleza para los contribuyentes, otro atributo que debiera tener un sistema impositivo.

Respecto del principio de eficiencia, recordemos que la literatura económica indica que los impuestos con mayor impacto negativo sobre el PIB y el empleo son los que recaen en las empresas, seguidos de los impuestos personales y, por último, los impuestos al consumo y a la propiedad.

Concluyendo, la idea de reintegrar nuestro sistema es un avance y es coherente con el ideal de justicia en materia tributaria, toda vez que resguarda la equidad horizontal y evita la doble tributación de los ingresos del capital proveniente de las utilidades de las empresas.

**4.18 La reforma tributaria y el debate por integración**

*01 de septiembre de 2018, columna de Patricio Arrau, economista, disponible en* [*https://www.latercera.com/pulso/noticia/la-reforma-tributaria-debate-integracion/303158/*](https://www.latercera.com/pulso/noticia/la-reforma-tributaria-debate-integracion/303158/)

Finalmente salió humo blanco en Teatinos 120 y tenemos Reforma Tributaria (RT), pues se trata de mucho más que una modernización. Con buena voluntad y altura de miras está la posibilidad para consensuar una RT definitiva que sirva de marco tributario para muchos años. A diferencia de los cambios anteriores, como el actual gobierno no tiene mayoría en el Congreso, y ello obliga a buscar acuerdos. Y sobre todo tengamos un debate informado, sin eslóganes.

Y aquí surge el primer escollo. Se dice muy abiertamente que la integración del sistema al 100%, esto es que los impuestos pagados por las empresas sean crédito total para los impuestos personales, sería una medida regresiva, que favorece a los ricos o “súper ricos”. Discrepo con esa aseveración.

El porcentaje que no se reconoce como crédito para los impuestos personales genera un recargo de 9,45% para todos los tramos de ingreso, no solo a los de más altos ingresos. Incluso más, me atrevo a decir que los ricos y súper ricos no pagarán este recargo. Los dividendos distribuidos a las matrices hoy están integrados al 100% y los empresarios pueden retirar sus gastos personales como sueldos de sus sociedades anónimas y como dietas de sus directorios.

Son los muchos pequeños empresarios que trabajan con sus familias en sus empresas quienes no tienen esa opción. De hecho hay 150.000 empresas pymes que hoy están en el sistema semi-integrado. La única forma de tener una equidad horizontal perfecta, esto es igual impuesto a igual ingreso, es con el sistema integrado al 100%. ¿Cómo se resuelve esta diferencia de opinión entre los sectores políticos?. Muy simple, informando el pago de este impuesto adicional por tramo de ingreso en la declaración del año 2018. Nos vamos a sorprender.

Creo que la resistencia a integrar el sistema radica en otra creencia.

Se trata de que se piensa que el sistema integrado es más susceptible a la elusión y evasión que el sistema desintegrado. Otro error, el sistema integrado es simple, fácil de llevar, y la elusión se controla con las muy mejoradas facultades del Servicio de Impuestos Internos (SII), no con la desintegración que genera muchos otros problemas. Lo que sí es muy progresivo es controlar agresivamente la elusión en los tramos altos personales de ingreso, algo que todavía es insuficiente.

Un segundo tema relevante con la integración es la disminución de la recaudación tributaria. El Informe Financiero estima en régimen US$ 833 millones de costo.

Creo que esta estimación sobreestima el efecto en disminución de la recaudación y deberemos esperar la liberación de las bases de datos para corroborarlo. Probablemente se estima suponiendo políticas de retiro históricas y ello no considera el cambio de comportamiento y aprendizaje de los contribuyentes a momento de decidir como remunerarse.

El impuesto digital y la boleta electrónica son evidencia de que nuestro sistema se moderniza y pone al día, pero ello es tema de una próxima columna.

**4.19 La Casen y la "modernización tributaria"**

*01 de septiembre de 2018, columna de Francisco Vidal, disponible en* [*http://www.elmercurio.com/blogs/2018/09/01/62952/La-Casen-y-la-modernizacion-tributaria.aspx*](http://www.elmercurio.com/blogs/2018/09/01/62952/La-Casen-y-la-modernizacion-tributaria.aspx)

Durante la semana pasada, el Gobierno dio a conocer prácticamente el mismo día los resultados de la Casen 2015-2017 y su proyecto de "modernización tributaria", que ingresó al Parlamento en esos días.

Quiero vincular ambas situaciones, porque justifican aún más, dados los resultados de la Casen, la necesidad de rechazar en sus aspectos centrales, la denominada "modernización tributaria" del actual gobierno.

La Casen nos mostró, en lo sustantivo, tres grandes resultados: la pobreza por ingreso disminuyó en tres puntos, llegando en la actualidad a algo más del 8% de la población viviendo en esa situación. No está de más recordar que este es el resultado de una constante disminución de este indicador desde el retorno a la democracia, pues la dictadura cívico-militar de derecha nos legó el 11 de marzo de 1990 el 38,8% de la población chilena viviendo en la pobreza. El actual indicador, además, hecha por tierra un argumento permanente de la derecha, el cual consiste en que solo el crecimiento económico disminuye la tasa de pobreza, lo anterior porque durante el gobierno de Bachelet 2, donde se aplicó la mencionada encuesta, el crecimiento económico fue muy bajo, promediando 1,7% por año; no obstante, la pobreza disminuyó en más de tres puntos.

El segundo gran resultado es que se estancó la medición de pobreza en torno al 20% con respecto al resultado anterior, cuando más allá de los ingresos se consideran otras cinco variables, vinculadas estas últimas al contexto en el cual se mueven las familias chilenas. Lo anterior demuestra que bajo este indicador se requieren políticas públicas que vayan más allá del mero aumento del ingreso personal y familiar. Y el tercer resultado nos mostró un leve aumento en la desigualdad, considerando el índice Gini, que transitó desde un casi 0,49% a algo más del 0,50%. Asimismo, otro de los indicadores utilizados para medir la desigualdad fue un retroceso al comparar los ingresos del 10% más pobre versus el 10% más rico, en donde este último tramo supera en 39 veces al anterior; no obstante, en la medición anterior esa diferencia era de 34 veces. Cabe consignar que dicha medición considera solo los ingresos autónomos, pero al aplicar las transferencias monetarias desde el Estado al segmento más pobre, la diferencia disminuye a 17 veces.

En conclusión, la Casen nos muestra una reducción de la pobreza de tres puntos, un estancamiento en la pobreza multidimensional en torno a un 20% y un leve aumento de la desigualdad. Dada la descripción anterior, nos resulta particularmente complejo el proyecto de "modernización tributaria", porque en su esencia va a aumentar la desigualdad, considerando que el capítulo principal de dicho proyecto es la reintegración del sistema tributario, el cual beneficiará en más de un 80% de este "beneficio" a los dueños de las 1.000 empresas más grandes de Chile, cuyos propietarios y accionistas, sin duda alguna, están en el 1% de mayores ingresos, y en consecuencia, dada la regresividad de este proyecto, no va en la dirección correcta, que para nosotros es transformar a Chile en un país más justo. Cuando el informe financiero de dicha propuesta nos dice que por efecto de la integración del sistema el Estado reduce sus ingresos en más de US$ 800 millones, de los cuales más de US$ 600 millones terminarán en los bolsillos del 1% más rico para su consumo, nos conduce a ser enfáticos en rechazar dicha propuesta específica; no obstante que hay otros elementos del proyecto, de menor significación monetaria, que sí considero justos y apropiados, como por ejemplo: reducir parcialmente la evasión al IVA mediante la boleta electrónica y establecer un impuesto que hoy día no existe a los servicios digitales. En conclusión, a la oposición nos hizo muy bien, para ratificar nuestro rechazo al proyecto de "modernización tributaria" del Gobierno, el haber conocido el mismo día los resultados de la encuesta Casen, porque reafirma nuestras convicciones para rechazar dicho proyecto, cuyo resultado evidente será aumentar la desigualdad en Chile.

**4.20 Ni mayor progreso ni más igualdad**

*02 de septiembre de 2018, columna de Hernán Büchi, disponible en* [*http://www.elmercurio.com/blogs/2018/09/02/62988/Ni-mayor-progreso-ni-mas-igualdad.aspx*](http://www.elmercurio.com/blogs/2018/09/02/62988/Ni-mayor-progreso-ni-mas-igualdad.aspx)

El segundo mandato de la Presidenta Bachelet se caracterizó por ser profundamente ideológico y resucitar lenguajes y diagnósticos del siglo pasado. Sus impulsores parecen haber sufrido amnesia al no recordar los rotundos fracasos y costos humanos de los intentos por poner esas ideas en práctica.

La disyuntiva crecimiento e igualdad volvió a estar de moda y la ex Presidenta indicaba que sacrificar el crecimiento era necesario. Según ella, se estaría sembrando un futuro mejor y promisorio. Su nostalgia por los gobiernos totalitarios de Europa del Este es consecuente con esta inclinación. Después de todo, los regímenes comunistas propugnaban -y actuaban en consecuencia- derrumbar las estructuras e instituciones del pasado, aprovechando de concentrar el poder, aunque ello tuviera un elevado costo en aras de una promesa de futuro que nunca llegó.

El gobierno pasado no llegó a ese extremo, pero la famosa frase -pasar la retroexcavadora- ilustra su estado de ánimo. Importaba más destruir lo existente que prestar atención a la calidad de lo creado. Lo único consistente de este proceso de destrucción fue concentrar el poder en la burocracia que esperaban seguir controlando. Es esta perspectiva la que ayuda a entender la actitud actual de obstrucción a ultranza de la oposición -no le interesa construir sobre lo destruido o corregir lo hecho con apresuramiento-, su objetivo es político y de poder.

Se sabe que el resultado de la gestión anterior fue pobre en términos de progreso. Hay que remontarse hasta muy atrás, a épocas económicas críticas, para encontrar períodos con tan bajo crecimiento: 1,7% promedio anual durante todo el gobierno pasado. Acompañado, además, por una caída anual sistemática de la inversión y un magro desempeño en la creación de empleos privados. Se requiere de un gran esfuerzo para retomar un crecimiento sostenido.

Hace pocos días se conocieron los datos de la Casen. De los resultados publicados es posible afirmar que no solo se estancó el progreso, sino que tampoco se lograron avances en los indicadores sobre los que el ex oficialismo puso énfasis especial.

Así, promovieron la redefinición de pobreza agregando el concepto multidimensional. Sobrevaloraron al indicador Gini y a la relación de ingresos entre los diferentes deciles o quintiles. Asimismo, restaron valor a otros antecedentes como los inmejorables avances en materia de mortalidad infantil, acceso a la educación -en especial educación superior-, y disponibilidad de todo tipo de bienes que permitió el progreso acelerado de las últimas décadas.

Para desgracia de los promotores del relato opositor, la última Casen muestra que deteniendo el progreso no lograron ningún resultado positivo en sus indicadores predilectos de igualdad. La pobreza multidimensional no varió y el Gini no tuvo cambios significativos. Lo mismo sucede con los índices de desigualdad 10/10 y 20/20, que muestran -respectivamente- la relación entre los ingresos del 10% (20%) más pudiente versus el 10% (20%) de menores recursos. Sin embargo, en el 20/20 del ingreso del trabajo hay un empeoramiento.

No es de extrañar que el relato que plantean hoy justifique esta realidad. La nueva argumentación plantea que los cambios requieren tiempo para rendir frutos y se debe profundizar lo realizado. Tal como en el pasado, piden más sacrificio hoy en aras de una utopía inexistente.

Desafortunadamente el estancamiento del progreso implica que se deja de avanzar en aspectos concretos de bienestar. No se trata de comparar utopías, se sacrifica bienestar en salud, educación y bienes materiales por teóricas mejoras futuras en indicadores abstractos y complejos de medir como el Gini o la pobreza multidimensional.

Para comprender que no es razonable utilizar esos indicadores como guía de cambios radicales, debemos recordar que los números están sujetos a grandes variaciones según como se les mida o defina. Para algunos la relación entre los ingresos del 20% más rico y el 20% más pobre en Estados Unidos es de 26 veces, para otros es solo de 3. La diferencia está en incorporar o no los efectos de impuestos y subsidios. En suma, distintos analistas calculan de distinta manera y obtienen resultados tan diversos como los señalados. A su vez, hay estudios que muestran que la comparación entre países depende en gran medida de cómo se definan los conceptos y se realicen las encuestas, aun usando datos supuestamente estandarizados. Dramatizar comparaciones para justificar revoluciones institucionales puede ser atractivo para sus fines políticos, pero es tremendamente dañino para la ciudadanía.

El Gobierno actual fue elegido por quienes deseaban que volviera a imperar el sentido común y se acelerara el progreso en el país. En estos días ha quedado claro, luego de la negativa de la oposición a cambios razonables al salario mínimo, que harán lo posible para impedirle su tarea. Ello es consecuente con el espíritu de la retroexcavadora.

Pero el Gobierno no debiera amilanarse. Debe presentar sus propuestas e intentar llevarlas adelante. Se acaban de conocer los cambios tributarios que la actual administración estima necesarios. Lo propuesto no es un cambio profundo que asegure una clara mayor competitividad para la economía, pero es un avance importante respecto a problemas concretos que legó el gobierno anterior en su cruzada refundacional.

A pesar de ello, se perfila una oposición intransigente y basada en datos errados o descontextualizados. Una parte de la propuesta busca dar racionalidad al sistema tributario chileno mediante la integración del impuesto a la renta como regla general.

No es cierto que ello beneficie a unos pocos. Primero, porque aun cuando afecte a un limitado número de empresas, ellas serían las que explican gran parte de la inversión y producción. Que innoven e inviertan beneficia a todo el país. Pero además los números citados por la oposición son incorrectos; son cientos de miles de pymes que están encajonadas en regímenes inadecuados.

Otra dimensión de la propuesta del Ejecutivo intenta poner en mejor pie al ciudadano frente a una autoridad omnipotente. Muchos parecen haber olvidado que los impuestos, como su nombre lo indica, son una extracción forzosa de lo que tiene un individuo por parte de la autoridad. Lo mínimo que se debe esperar de este tipo de acciones es que existan normas simples, claras y previamente difundidas. Todos los principios protectores del derecho deben estar a favor del ciudadano. En el proyecto se avanza parcialmente en esa dirección y es difícil que quienes se estimen democráticos se opongan a ello.

Desafortunadamente, dentro de las propuestas se nota un avance en consolidar un Gran Hermano, que todo lo sabe y todo lo requiere. La tecnología es de doble filo: facilita la labor de la administración, pero también allana el camino al totalitarismo. Un atenuante es que por primera vez se da un pequeño paso hacia la transparencia. Las boletas informarán separadamente el impuesto involucrado, para que lo conozcan los ciudadanos.

El Gobierno optó por cambios moderados y es un buen paso, aunque insuficiente para relanzar con fuerza el progreso. Si lo hizo como estrategia para facilitar su aprobación, ojalá le rinda frutos. Para desgracia de Chile, la oposición parece no tomar nota que con sus propuestas no ha logrado, ni logrará, ni mayor progreso ni más igualdad.

Se acaban de conocer los cambios tributarios que la actual administración estima necesarios. Lo propuesto no es un cambio profundo que asegure una clara mayor competitividad para la economía, pero es un avance importante respecto a problemas concretos que legó el gobierno anterior en su cruzada refundacional. A pesar de ello, se perfila una oposición intransigente y basada en datos errados o descontextualizados.

**4.21 Modernización tributaria y obsolescencia política**

*03 de septiembre de 2018, columna de Manuel Bengolea, gerente general de Octogone Chile, disponible en* [*https://www.df.cl/noticias/opinion/columnistas/manuel-bengolea/modernizacion-tributaria-y-obsolescencia-politica/2018-08-31/191817.html*](https://www.df.cl/noticias/opinion/columnistas/manuel-bengolea/modernizacion-tributaria-y-obsolescencia-politica/2018-08-31/191817.html)

Los comentarios de la oposición sobre el proyecto de modernización tributaria han sido débiles en contenido y cargados de populismo. Muchos han sostenido, con más retórica descalificativa que consensual, que la reintegración implica que el Estado financiará a los más ricos a costa de los más pobres. Nada más alejado de la realidad, como se constata al analizar la evidencia empírica.

Primero, es bueno que se entienda que el Estado y los políticos que lo manejan no son los dueños de esos recursos, sino que sus administradores temporales, y deben rendir cuentas por su correcta aplicación. Lo segundo, si de justicia se trata, es entender que la equidad horizontal también es justa, porque si un emprendedor, un profesional y un inversionista extranjero generan el mismo flujo, todos ellos deberían pagar lo mismo, y resulta que la actual ley, reformada en 2014, no hace eso y castiga con más impuestos al emprendimiento, la llave de ingreso al progreso y desarrollo. Tercero, la equidad vertical o progresividad, que hace referencia a quien más genera más paga, que fuera el centro de la anterior reforma, tiene formas más inteligentes de lograr los objetivos que lisa y llanamente castigando el emprendimiento.

El manido argumento de que el Fisco recaudaría menos con la reintegración es, a lo menos, erróneo. Muchos políticos han callado, convenientemente, la evidencia que arroja la reforma de 2014, cuando aumentaron la tasa de impuestos a las empresas y se recaudó menos, pues como muchos entendidos de todo el espectro político lo anticiparon, subir demasiado los impuestos impacta la inversión, lo que se traduce en menor crecimiento económico y luego en menor recaudación. La reintegración tendrá un efecto positivo en la inversión, que luego redundará en un crecimiento económico más acelerado y, por ende, en mayor recaudación. Por último, llama la atención el celo en los equilibrios fiscales que exhibe la oposición, cuando siendo gobierno los desdeñaron.

El proyecto de modernización tributaria ha vuelto a hacer palpables las diferencias políticas. La oposición sigue vendiendo la idea de que es el Estado quien nos llevará al desarrollo, y que capitalismo y mercado son ideologías depredadoras que sólo reparten pobreza. La evidencia histórica es irrefutable, el mercado administra mejor los recursos que el Estado, y los países que han logrado entrar al desarrollo lo han hecho de la mano del primero, mientras que quienes han decidido por el segundo, han terminado irremediablemente más pobres.

En 1990, los países con mayor ingreso per cápita (a precios de poder de paridad de compra) en Latinoamérica, según el FMI, eran Venezuela y Argentina, con US$ 9.560 y US$ 7.250, respectivamente, mientras Chile alcanzaba los US$ 5.840. Nuestro país hoy ostenta US$ 25.657 de ingreso, el más alto de la región, muy por sobre los US$ 9.870 de Venezuela (que supera sólo a Bolivia) o los US$ 21.530 de Argentina.

En conclusión, quienes sostienen o creen que exigiendo más impuestos a las empresas para transferirlos al Estado impulsarán una mayor igualdad debieran darle una mirada a la evidencia, pues usualmente las políticas discrecionales de redistribución de riqueza terminan con todos siendo igualmente más pobres, con los emprendedores arrancando del país y con unos pocos políticos sirviéndose de ello, como es el caso de Argentina y Venezuela. El proyecto de modernización tributaria arregla el estropicio causado por el anterior y convierte nuevamente el esfuerzo y el trabajo en la principal palanca de progreso.

**4.22 Un debate tributario centrado en las personas**

*03 de septiembre de 2018, columna de Jaime Del Valle, profesor de derecho Tribuario, disponible en* [*https://www.latercera.com/pulso/noticia/debate-tributario-centrado-las-personas/304783/*](https://www.latercera.com/pulso/noticia/debate-tributario-centrado-las-personas/304783/)

El sistema actual no es justo. Conforme a cifras del SII, 150.533 pymes (de ingresos hasta 50 mil UF anuales), representativas del 17% del total, tributan obligatoriamente en el sistema semi-integrado.

El proyecto de Modernización Tributaria señala tener por pilares fundamentales principios que resultan imposibles de no defender en forma transversal. Si nos centramos en lo que persigue, en lo que pretende, la invitación a la discusión y aportar democráticamente en el proceso legislativo resulta ineludible para cualquier representante de la voluntad popular. Me centro brevemente en dos principios.

Equidad y justicia en la distribución de los tributos. El sistema actual no es justo. Conforme a cifras del SII, 150.533 pymes (de ingresos hasta 50 mil UF anuales), representativas del 17% del total, tributan obligatoriamente en el sistema semi-integrado. Ellas representan el 90% aprox. del total de empresas en dicho sistema. Sus propietarios, los emprendedores, tributan 9,45% más que el resto de los contribuyentes. No importa el ingreso, pagan más que empleados, independientes o quienes califican para el sistema alternativo. Para pagar la misma tasa, el emprendedor puede retirar hasta $646 mil mensuales, mientras que el empleado para pagar esa tasa efectiva necesita un sueldo de $3.945.000. Sólo ahí ambos pagan la misma tasa: 9,45%. ¡Pero el empleado gana seis veces más que el emprendedor! A todas luces es inequitativo, injusto. Requiere una urgente corrección. Bienvenido el debate democrático respecto al mecanismo.

Certeza y seguridad jurídica. El proyecto incorpora principios constitucionales y de la Ley de Bases de Procedimientos Administrativos del Estado (Ley 19.880) al Código Tributario. Se observa de manera irrestricta el principio de legalidad, exigiendo que la ley se respete tal cual fue creada producto de la discusión legislativa. Se incorporan derechos básicos del contribuyente reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico, como que las resoluciones del SII sean fundadas. Que el contribuyente entienda lo que se le pide, legítimamente impugna y lo que paga. Se reconocen recursos -como el jerárquico- existentes en cualquier procedimiento administrativo. Se fomenta el acuerdo entre las partes haciendo más eficiente el rol recaudador del Fisco, fortaleciendo la determinación conjunta de la obligación tributaria, evitando esa visión de contraparte que es ineficiente y tantas veces inconducente. En materia de Norma General Anti-elusión (NGA), se busca hacerla aplicable. Se eliminan rasgos subjetivos y se adecua para que converse con nuestro ordenamiento jurídico. No se trata de qué derecho prima como han sostenido algunos; el derecho es uno solo y los cambios que se proponen a la norma aportan por fin a ello, dando certeza de lo que se puede y no se puede hacer. Bienvenido también el debate sobre la forma de alcanzar el objetivo.

Lamentablemente aún no vemos una discusión con sustento técnico. Al emprendedor, al que arriesga su capital, esfuerzo y se juega la vida en una idea no le interesa la consigna genérica, las derechas o izquierdas, ni si la NGA es una “norma” o una “cláusula”. Quiere un trato justo, sentirse parte de un sistema equitativo, progresivo, fácil, entender que paga, que se le cobra, sentirse acogido por una administración que lo acompaña en su deber de contribuir a la sociedad en la medida de sus capacidades. Bienvenido entonces un debate democrático, riguroso, alejado de intereses particulares, centrado en cada persona. Quienes nos representan fueron elegidos para ello y precisamente por personas

**4.23 Reforma tributaria: Preguntas para Hacienda**

*04 de septiembre de 2018, columna de Andrea Repetto, disponible en* [*http://www.elmercurio.com/blogs/2018/09/04/63036/Reforma-tributaria-Preguntas-para-Hacienda.aspx*](http://www.elmercurio.com/blogs/2018/09/04/63036/Reforma-tributaria-Preguntas-para-Hacienda.aspx)

El Gobierno acaba de presentar su proyecto de reforma tributaria. Las autoridades lo describen como una modernización fiscalmente neutra, que simplifica el sistema. Dicen también que es la "reforma más pro pymes que ha surgido en Chile" y que trae medidas "especialmente pro clase media".

Pero al revisar los detalles, más allá de lo que se dice en los medios, aparecen dudas, dudas que a mi juicio son legítimas. ¿Podrán los expertos del Ministerio de Hacienda ayudarnos a comprender mejor el proyecto y sus implicancias? Aquí listo algunas de esas interrogantes.

1. El Informe Financiero:

a. Llama fuertemente la atención la importancia de la boleta electrónica en la recaudación estimada. Implícitamente se supone que la evasión del IVA, que fluctúa en torno al 20%, cae en la cuarta parte. ¿Cómo es eso posible si ya el comprobante de compra con tarjetas es considerado boleta de venta, la factura electrónica permite seguir la cadena de pagos prácticamente completa y la fiscalización ha aumentado de manera importante? ¿Está de acuerdo el SII con estas estimaciones? ¿Por qué no se implementó antes?

b. ¿Por qué no se reporta el impacto de los cambios en la Norma General Antielusión (NGA)? ¿No se recaudará menos si la norma es más débil?

c. ¿Por qué no se contabilizan los efectos negativos sobre la recaudación de ampliar el concepto de gastos que se pueden deducir, incluyendo ahora gastos que no están necesariamente vinculados con la generación de rentas?

2. Los beneficios:

a. ¿Qué empresas se llevan los US$ 800 millones del costo de la reintegración? Los datos disponibles indican que se los llevarán el 100% de las grandes y una fracción menor de las pymes (alrededor del 15%), en proporciones del 90% para las grandes y 10% para esas pymes. ¿Es así? ¿No preocupa erosionar la progresividad del sistema? ¿Por qué no entregar el beneficio de la reintegración solo a las pymes?

b. ¿Qué se quiere decir cuando se indica que buena parte de los beneficios de la reintegración van a empresas extranjeras? ¿Son empresas de extranjeros? ¿De países con los que ya hay acuerdo y por tanto no hay beneficio? ¿O son empresas de chilenos en el extranjero?

c. ¿Por qué se considera el proyecto como pro pyme si la gran mayoría de las pymes no está en el sistema parcialmente integrado, que es donde se concentran los beneficios? Además, ellas ya tienen acceso a depreciación instantánea en el 14ter y pueden optar a pagar en proporción a sus ingresos sin pasar por el Impuesto de Primera Categoría, beneficios que se plantean como nuevos en el proyecto. Asimismo, ¿no será muy costoso para las pymes llevar contabilidad completa como exige el proyecto?

d. ¿Por qué se dice que el alza del tope del crédito especial de IVA a la venta de viviendas beneficia a la clase media? El tope se refiere al costo de construcción y no al valor de venta. Una vivienda que cuesta 4.000 UF construir se vende en muchas zonas por al menos 10.000 UF. ¿Qué sucede, además, si las compras beneficiadas las hacen inversionistas de alto patrimonio para renta? ¿No les parece un subsidio altamente desfocalizado?

3. Simplicidad:

a. Se dice que se crea un sistema de impuesto a la renta único, que engloba a todas las empresas (excepto las que están en el régimen de renta presunta). Para ello se deroga el régimen de renta atribuida y el 14ter, regímenes donde hoy está alrededor del 80% de las pymes. Pero luego se crean dos excepciones al sistema único: una que simula la atribución (lo que el proyecto llama "transparencia") y otra que se parece al 14ter (la "cláusula pyme"). En resumen, se derogan dos regímenes y se crean dos muy similares a los derogados. ¿Dónde está la simplificación?

4. La Norma General Antielusión:

a. El Mensaje del proyecto dice valorar la NGA; también dice hacerle solo adecuaciones menores. Sin embargo, los cambios a la norma implican una sujeción del derecho tributario al derecho civil. ¿No es el objeto de la NGA que el sentido de la ley tributaria prime por sobre lo que acuerden las partes en un contrato; esto es, que hay abuso si un contrato va en contra del sentido de la ley?

5. El Informe de Productividad:

a. ¿Es posible conocer las estimaciones de los efectos del proyecto sobre el empleo y la productividad que no están en el informe? Y si bien no se espera de este informe, ¿tendrán estimaciones de qué sucede con la desigualdad? Un estudio del Banco Mundial indica que al considerar los ingresos reportados al SII, además de la información en la CASEN, el índice Gini de desigualdad se acerca a 70, lejos del 50 que se obtiene cuando solo se usa la información en la CASEN.

Hay dudas sobre este proyecto, sobre todo en lo que respecta al relajamiento de las normas que regulan el tratamiento de las rentas del capital, y que de paso erosionan la recaudación y la progresividad del sistema. La negociación que viene en el Congreso -que quizá suceda previamente si el Gobierno se abre a discutir antes- no puede hacerse sin una mejor comprensión de lo que de verdad está en el proyecto. Es hora de pasar a una real discusión.

**4.24 Entre la realidad económica y la jurídica**

*05 de septiembre de 2018, columna de Ignacio Esnaola Vidal, socio Bruzzone & González Abogados, disponible en* [*https://www.df.cl/noticias/opinion/columnistas/entre-la-realidad-economica-y-la-juridica/2018-09-04/193632.html*](https://www.df.cl/noticias/opinion/columnistas/entre-la-realidad-economica-y-la-juridica/2018-09-04/193632.html)

Tras una tensa espera, al fin tenemos en nuestras manos el proyecto de ley sobre “modernización tributaria” que propone el Ejecutivo. Este proyecto presenta diversas iniciativas, destacando entre ellas la modificación a la normativa general anti-elusión (NGA).

Los principales ajustes a la NGA corresponden a la incorporación de ciertos conceptos, como el de simulación absoluta y relativa y de actos notoriamente artificiosos, acotando su aplicación a las operaciones que no sean fiscalizadas según normas especiales anti-elusivas (como tasaciones y rebaja de gastos, entre otras), evitando superponer en fiscalizaciones, y procesos judiciales, normas sancionatorias especiales a aquellas contenidas en la NGA.

Se indica que esta reforma nace de la necesidad de incorporar una interpretación orgánica, dentro de los parámetros del derecho común, a los principios tributarios de economía de opción y las facultades de re-calificación de actos y contratos, otorgando mayor certeza a los contribuyentes y mejores herramientas al SII para su aplicación.

Lo anterior ha sido criticado por ciertos sectores políticos y académicos, señalando que su aprobación reduciría las facultades del SII, haciendo primar las formas jurídicas sobre la realidad económica, retrocediendo en la “modernidad” de nuestra legislación y el efecto disuasivo que tendría la norma actual. Frente a eso, cabe indicar que la NGA proviene de iniciativas internacionales que han incorporado en distintas legislaciones normas similares a la chilena, siendo poco probable, en un mundo globalizado, volver a un sistema netamente formalista.

A su vez, desde la otra vereda, pretender que la NGA establezca criterios taxativos y ejemplificadores de operaciones elusivas haría que dicha norma perdiera toda su naturaleza y su carácter general. A mayor abundamiento, y pese al formalismo del pasado, la aplicación del derecho común no debiera colisionar necesariamente con el principio de realidad bajo una interpretación moderna de la ley, haciendo uso de principios relevantes, como lo es la primacía de la intención real de los contratantes, más allá de la literalidad de sus declaraciones.

En efecto, según la experiencia comparada –particularmente la española, base de la NGA chilena – no le corresponderá al legislador demarcar, en la práctica, los límites entre la buena fe, la economía de opción y la recalificación de actos elusivos o artificiosos, sino que entregar lineamientos para que sean los jueces quienes interpreten tales operaciones, en base a criterios jurídico-económicos armónicos, permitiendo la constante evolución de éstos de acuerdo a la práctica y realidad de cada acto sujeto a revisión.

Esperamos que se discuta sobre una normativa general anti-elusión que otorgue bases adecuadas para su aplicación informada, tanto para los contribuyentes, como para los fiscalizadores y jueces, logrando un efecto disuasivo o una eventual aplicación práctica de la misma, según corresponda.

**4.25 Modernización tributaria: una invitación a nuevo tipo de debate**

*05 de septiembre de 2018, columna de Alfonso Swett, disponible en* [*http://www.elmercurio.com/blogs/2018/09/05/63047/Modernizacion-tributaria-una-invitacion-a-nuevo-tipo-de-debate.aspx*](http://www.elmercurio.com/blogs/2018/09/05/63047/Modernizacion-tributaria-una-invitacion-a-nuevo-tipo-de-debate.aspx)

A pocos días de conocerse el proyecto de modernización tributaria presentado por el Gobierno, resulta procedente reflexionar sobre el contexto en que surge esta iniciativa y cómo ello debiera inspirar la futura discusión que se dé en torno a esta materia fundamental para el progreso de nuestro país.

El primer paso es reflexionar con datos reales sobre los efectos que tuvo, entre otras cosas, el alza de impuestos a las empresas del 20% al 27% y la pérdida del sistema tributario integrado, ambos cambios que introdujo la última reforma tributaria.

Las cifras de los últimos años son decidoras: en primer lugar, el país pasó de crecer desde un 5,1% (promedio compuesto desde 1990 a 2013), a solo un 1,7% (promedio compuesto desde 2014 a 2017), sin recesión internacional mediante. En segundo lugar, entre 2014 y 2017, el empleo que más creció fue el de cuenta propia, que trae consigo la amplificación de la desigualdad. Con estos resultados, no debe extrañarnos el aumento de la desigualdad (en el índice 10/10) y el estancamiento de la disminución de la pobreza multidimensional mostrados por la encuesta Casen 2017, dejando en evidencia que sin crecimiento económico se postergan las demandas sociales, porque no hay recursos para financiarlas. Una tercera cifra es el deterioro del balance fiscal efectivo de un -0,6% a un -2,8%, aumentando al doble la deuda pública del país y empeorando nuestra clasificación de riesgo internacional.

Estos números, que hoy nadie discute, nos muestran que claramente todos hemos perdido: las personas vulnerables, las empresas, el Estado y la sociedad en su conjunto. Pero también son cifras que nos confirman que es mejor recaudador de impuestos el crecimiento que las alzas de tasas por sí solas combinadas con la pérdida de la integración tributaria. Nos demuestra también que es mejor política social y de equidad la recaudación total que proveen el crecimiento y la inversión, que las alzas de tasas por sí solas combinadas con la pérdida de la integración tributaria.

Es en este contexto que desde la CPC hemos construido una propuesta junto a todas nuestras ramas asociadas, formando equipo también con la Conapyme, la Asech y la Multigremial. Entre todos compartimos la visión y la voluntad de aportar, dialogar y reflexionar en torno a una modernización de nuestro sistema tributario que nos permita crecer más a cada uno de los sectores de la pequeña, mediana y gran empresa, y que logre mayor recaudación tributaria para potenciar la política social tan demandada por la ciudadanía.

Tenemos claro que el 1% adicional de crecimiento del PIB recaudaría en cinco años la suma de 10.000 millones de dólares. Para alcanzar este crecimiento inclusivo e integral, impulsar el empleo de calidad y el bienestar de la sociedad, necesitamos un mejor sistema tributario, que permita más y mejor inversión, aumente la competitividad y entregue simpleza, certeza y justicia tributaria.

Para conseguir estos objetivos, se requiere reducir la tasa de impuestos corporativos de todas las empresas y concretar la integración total de sistema tributario. Porque integrar permite que se fomente el emprendimiento y la capacidad empresarial de invertir. Porque integrar permite justicia, al igualar la carga tanto de las empresas nacionales con las extranjeras, como la de las personas que perciben un mismo ingreso. Porque integrar beneficiaría directamente a 14.000 grandes empresas y 150.000 empresas pequeñas. Este es el corazón de nuestra propuesta tributaria a la que hemos adherido -a través de sus gremios- todas las empresas de nuestro país en un trabajo conjunto en que ha primado el diálogo constructivo y responsable, y donde el interés general de la sociedad ha sido nuestro norte.

Este es el espíritu que hoy debiera caracterizar el debate en torno al proyecto de modernización tributaria, comenzando por conocer en profundidad su contenido, reflexionar con responsabilidad, y proponer alternativas que nos permitan avanzar efectivamente en más crecimiento y menos desigualdad.

**4.26 Principios, ideología y objetivos del proyecto de la contrarreforma tributaria**

*05 de septiembre de 2018, columna de Eugenio Rivera, disponible en* [*http://www.elmostrador.cl/mercados/2018/09/05/principios-ideologia-y-objetivos-del-proyecto-de-la-contrarreforma-tributaria/*](http://www.elmostrador.cl/mercados/2018/09/05/principios-ideologia-y-objetivos-del-proyecto-de-la-contrarreforma-tributaria/)

Finalmente ha sido presentado el proyecto de reforma tributaria. Se trata de una contrarreforma, pues apunta a revertir no solo aspectos fundamentales de la reforma del 2014 (avances en la desintegración tributaria, en la búsqueda de una mayor contribución del impuesto a la renta de los propietarios de las grandes empresas), sino que también busca debilitar las capacidades fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos (SII), construidas desde el fin de la dictadura.

La discusión tributaria tomará meses, quizás años y atravesará diversos tipos de discusión y debate. Aun cuando es claro que “el diablo está en los detalles” (cuestión que requerirá en la segunda fase de discusión una lectura detenida del proyecto), el actual es el momento de debatir sobre los principios, la ideología y los objetivos del proyecto.

La ideología del proyecto.

El análisis del proyecto deja en evidencia dos principios ideológicos propios del pensamiento neoliberal.

El primero y más importante es que el motor de la economía y del progreso de la sociedad es el empresariado, por tanto, reducir la carga tributaria que pesa sobre ellos es condición para beneficiar al resto de la sociedad. Eso explica que el proyecto, más allá del avance en la digitalización de las relaciones entre SII y los pequeños empresarios, concentre los beneficios de la contrarreforma en los propietarios de las mayores empresas del país.

El segundo principio ideológico es que el Estado es una carga, un lastre que hay que sobrellevar, que si bien es relevante para la defensa de los contratos y la seguridad, no tiene funciones productivas en otros campos. Pese a los problemas que sufre el país por falta de financiamiento suficiente (y también gestión deficiente en muchos casos) de la salud, la previsión y la educación pública, por la falta de acciones relevantes en el campo de la innovación tecnológica (la experiencia internacional es clara en que el Estado ha jugado un papel central en los países exitosos en este campo, como son países tan diferentes como los del norte de Europa y del Asia), del desarrollo de la infraestructura entre otros ámbitos, el proyecto ignora la necesidad de ir paulatinamente elevando los ingresos fiscales para avanzar efectivamente hacia el desarrollo.

La única preocupación del proyecto en este campo es propender a la llamada “equidad horizontal”, que busca asegurar que los altos ejecutivos de las grandes empresas, los profesionales de más altos ingresos, tengan cargas tributarias similares con los propietarios del capital. Eso afecta/beneficia a poco más del 5% más rico de la población. Desde el punto de vista de la gran mayoría de la población, el proyecto no solo no mejora el carácter regresivo del sistema sino que lo profundiza, pues reduce el impuesto a la renta de los propietarios mayoritarios de las grandes empresas y apunta a fortalecer la recaudación del IVA (impuesto que, si bien es más fácil de recaudar, es el impuesto regresivo por excelencia) con la aplicación de la boleta electrónica.

Los objetivos del proyecto

En el corto plazo, el proyecto busca reducir significativamente la carga tributaria del 1% más rico, reintegrando el sistema tributario, lo que representa una reducción de la carga tributaria de los propietarios mayoritarios de las mil empresas más grandes del país.

Del mismo modo, tras el argumento de incentivar la inversión, el proyecto reduce la carga tributaria de las grandes empresas mediante la depreciación instantánea, equivalente al 50% de la inversión en activos fijos nuevos o importados (¿?) durante el período 2019 - 2020.

Más importante que lo anterior, la reforma busca debilitar las capacidades fiscalizadoras del SII, organismo reconocido internacionalmente por la calidad de su gestión. La señal de esto la dio el propio Presidente de la República, al anunciar el envío del proyecto en cadena de radio y televisión, donde atacó –como nunca había ocurrido antes desde el fin de la dictadura– la función pública del servicio. En efecto, el Primer Mandatario señaló lo siguiente:

“Hoy los contribuyentes, y estoy pensando en el millón de pequeñas y medianas empresas, están absolutamente indefensas ante Impuestos Internos, que actúa con mucha arbitrariedad, con mucha discrecionalidad, cambia de criterio, a unos los trata de una manera y a otros de otra, así que vamos a crear el Estatuto de Defensa de los Derechos de los Contribuyentes, para que el contribuyente sepa que tiene que pagar sus impuestos, pero que Impuestos Internos tiene que cobrar los impuestos que corresponden y no actuar con tanta arbitrariedad”.

Entre las medidas que apuntan al debilitamiento de las capacidades fiscalizadoras de Impuestos Internos cabe destacar las siguientes:

Imposición de plazos legales perentorios para la persecución de delitos tributarios (silencio positivo). La alta complejidad que plantean los mecanismos modernos de evasión y elusión, tiene como consecuencia que muchos delitos quedaron impunes en función de estos plazos.

Exigencia de que se observen plazos de prescripción (“el Servicio no podrá solicitar antecedentes anteriores a los plazos de prescripción, lo que incluye la revisión de capital propio tributario, pérdidas tributarias y remanente de crédito fiscal”).

Ampliación del concepto de gasto que puede ser deducido de la renta a prácticamente cualquier tipo de gasto (“que se encuentren vinculados directa o indirectamente al desarrollo del giro” (ver p. 30 proyecto de ley), lo que representa un retroceso de 25 años de lucha contra la evasión y tributación. Cabe imaginar cómo se multiplicará la consulta típica que se hace en restaurantes y negocios de diversa índole: ¿boleta o factura?

El principal mecanismo de debilitamiento de las capacidades fiscalizadoras del SII es el cuestionamiento de la Norma General Antielusiva: que según informes del servicio ha sido altamente exitosa en reducir la elusión tributaria. En tal sentido, el proyecto señala:

“Hemos constatado que en los últimos años y especialmente a raíz de la incorporación de la Norma General Antielusiva ('NGA') el Servicio de alguna manera recrudeció el rechazo de gastos en la determinación de la renta líquida imponible, aplicando esta norma especial antielusión, de manera bastante extendida, y poniendo en tela de juicio o privando al contribuyente de la posibilidad de deducir gastos que resultan en interés del negocio de la empresa y que, pese a no generar rentas de manera directa, sí son necesarios para desarrollar el giro. Incluso las interpretaciones más estrictas llevaron a exigir a los contribuyentes que para deducir un gasto debía tratarse de un desembolso inevitable u obligatorio, casi indefectible, rechazando en general todos los gastos voluntarios, extraordinarios y que no generaran una renta correlativa” (Pp. 29 - 30 del proyecto)

Sobre ese diagnóstico, el proyecto propone:

Dar por bueno cualquier mecanismo de valoración de activos y “se establecen presunciones que otorgan puertos seguros a los contribuyentes respecto de los valores que pueden considerar para realizar ciertas operaciones” (sic).

Del mismo modo, en el proyecto de ley “se incorporan normas más modernas de reorganización de grupos empresariales, que exigen darles una mirada consolidada, propia de su naturaleza, para efectos de calificar sus efectos tributarios o de fiscalizarlas, y se regula dicho procedimiento”.

Aunque cabe un análisis más detenido, en principio la creación de la Defensoría de Derechos del Contribuyente amenaza con debilitar la ya difícil tarea del SII. La norma no mejora la situación de quienes cumplen con sus obligaciones tributarias, pues ello está bien cubierto por los tribunales tributarios y aduaneros. La iniciativa se ubica más bien en la misma línea que apunta a debilitar las capacidades del sector público de defender a los consumidores, en el caso del Sernac, y a garantizar un correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias, como es el caso del SII.

La fuerza de las normas generales antielusivas radica en la flexibilidad que entrega para hacer frente a las acciones tendientes a evadir y eludir las obligaciones tributarias. Corresponde a los tribunales aduaneros asegurar que la acción administrativa se mantenga dentro de la legalidad. Todos los contribuyentes pueden hacer valer sus derechos frente a estas entidades. El proyecto de ley busca eliminar el carácter general de la norma mediante la denegación al servicio de considerar que existe abuso de las formas si no existen “efectos jurídicos o económicos relevantes” (en lo que se refiere a los efectos económicos, es un elemento central de las leyes de defensa de la competencia), lo cual en todo caso puede ser alegado ante los tribunales. En la misma dirección se apunta al buscar incorporar que el abuso tributario debe ser “notoriamente artificioso”, como si la elusión no tuviera justamente como característica el disimulo.

Los temas que no preocupan a los autores del proyecto.

Chile aparece como uno de los países más desiguales de América Latina y el mundo. Más aún, cuenta con un sistema tributario altamente regresivo que tiene como resultado que el índice de Gini prácticamente no varía antes y después de impuestos y gastos públicos. En los países de la OCDE, en cambio, la distribución del ingreso después de gastos sociales e impuestos mejora hasta más de 0,10 puntos. Ninguna de las medidas del proyecto apuntan, directamente, a mejorar la distribución del ingreso.

La única preocupación del proyecto en este campo es propender a la llamada “equidad horizontal”, que busca asegurar que los altos ejecutivos de las grandes empresas, los profesionales de más altos ingresos, tengan cargas tributarias similares con los propietarios del capital. Eso afecta/beneficia a poco más del 5% más rico de la población. Desde el punto de vista de la gran mayoría de la población, el proyecto no solo no mejora el carácter regresivo del sistema sino que lo profundiza, pues reduce el impuesto a la renta de los propietarios mayoritarios de las grandes empresas y apunta a fortalecer la recaudación del IVA (impuesto que, si bien es más fácil de recaudar, es el impuesto regresivo por excelencia) con la aplicación de la boleta electrónica.

Desde una perspectiva de largo plazo, tampoco importa a los autores del proyecto los estímulos a la inversión. En efecto, según la propia clasificación del Mensaje, las únicas medidas directas en este campo son las relativas a la inversión instantánea/acelerada y la relativa al IVA de las viviendas. Seguro que las autoridades del Gobierno aducirán que las materias reunidas bajo el concepto de seguridad jurídica, al generar más certidumbre, tendrían un efecto positivo en esa materia. Lo cierto es, sin embargo, que el efecto más probable de este paquete de medidas será el aumento de la evasión y la elusión.

Los ardides del proyecto

El principal elemento que lleva a la confusión es el concepto de compensación que utiliza la iniciativa. En efecto, en los diferentes anuncios se señaló que la reforma tributaria sería neutra desde el punto de vista recaudatorio. Visto en general, este no es el caso de la contrarreforma. La menor recaudación que generan las principales medidas se compensan, supuestamente, con la aplicación generalizada de la boleta electrónica. No puede compensar la menor recaudación del impuesto a la renta la lucha permanente contra la evasión y la elusión. Del mismo modo, forma parte de la presunta compensación la aplicación de los llamados impuestos digitales. El ardid es que esa mayor recaudación tiene como objeto natural compensar las pérdidas por recaudación del IVA producidas por el desplazamiento de compras desde negocios internos (arriendo de videos, por ejemplo) a plataformas internacionales que permiten acceder a películas y series (Netflix).

Desde el punto de vista de la compensación, es dudosa además. La seguridad con que se señala que la boleta electrónica generará ingresos adicionales de 1.181 millones de dólares. Los negocios fáciles de ser incorporados ya lo están desde hace tiempo y los que faltan requieren de diferentes y variadas acciones.

Del mismo modo, la reversión de los avances en desintegración del sistema tributario (adquiriendo así las características de la mayoría de los países civilizados) es presentado como un mecanismo que favorece a 150 mil Pymes que estarían sujetas a este sistema. En realidad, el sistema favorece a los propietarios mayoritarios de mil empresas que ven reducida su carga tributaria entre 600 y 833 millones de dólares. Las 150 mil Pymes podrían ver resuelto su problema con mayor información, de manera que se adscriban a los sistemas previstos para las Pymes.

Temas relevantes no abordados

El proyecto ni siquiera menciona los problemas derivados de los mecanismos de renta presunta que, según estudio de Agostini y otros, concentra los beneficios en los grupos más ricos del país.

No hay espacio para analizar en detalle el cuadro. Cabe señalar solo que quienes tienen participación en empresas que usan la renta presunta del 1% más rico de los contribuyentes, captan casi el 50% de las ganancias totales de estas empresas.

Sin duda que el principal problema de la reforma del 2014 fue la reducción de la tasa máxima del Impuesto Global Complementario y de Segunda Categoría de 40% a 35%. Según especialistas, esta reforma puede estar explicando buena parte del estancamiento del índice de Gini que dejó en evidencia la, recientemente dada a conocer, encuesta Casen.

Sigue pendiente la necesidad de legislar para la instalación de un sistema tributario sobre la renta de los recursos naturales.

Los aspectos positivos del proyecto

Sin duda que el principal aspecto positivo del proyecto es que, en relación con los contribuyentes, se continúa el proceso de digitalización y se extiende a la Pyme el proceso mediante el cual el SII elabora una propuesta de declaración tributaria. Del mismo modo, la generalización de la boleta electrónica representa un importante paso adelante.

Las medidas respecto a la Pyme son interesantes de estudiar, en particular la idea de buscar la formalización de las empresas y la idea de que empresas con ingresos anuales inferiores a 10 mil UF tributen su renta líquida imponible, de acuerdo a una propuesta elaborada anualmente por el Servicio sobre la base de márgenes de rentabilidad determinados por tipos de industria o negocio.

**4.27 Una mirada de justicia**

*07 de septiembre de 2018, columna de Fernando Barros Tocornal, abogado, Consejero de Sofofa, disponible en* [*https://www.df.cl/noticias/opinion/columnistas/fernando-barros/especial-opinion-una-mirada-de-justicia/2018-09-06/191619.html*](https://www.df.cl/noticias/opinion/columnistas/fernando-barros/especial-opinion-una-mirada-de-justicia/2018-09-06/191619.html)

La propuesta tributaria del gobierno plantea una modernización inédita, al adecuar la normativa impositiva al estándar de un Estado de derecho moderno, en que la ley reconoce la dignidad, el debido proceso, el trato justo y equitativo y, en síntesis, el respeto de los derechos fundamentales de los contribuyentes de igual forma como se les reconoce a todos los demás ciudadanos en su interacción con el Estado.

En relación a la equidad tributaria, aspecto medular y no comprendido cabalmente, el proyecto busca terminar con la actual discriminación entre chilenos, y entre éstos y extranjeros, en el derecho al crédito por el impuesto corporativo pagado. Éste varía también según la forma de organización empresarial, donde se da el absurdo de que los socios de dos empresas que desarrollan idéntico negocio y con igual resultado, pagan impuestos a la renta muy distintos.

Así, al comparar la tributación final del socio de una PYME que tributa en el sistema integrado (art. 14-A), con el de una que quedó en el sistema semi integrado (art.14-B), ambas con una utilidad líquida de $ 24 millones, el primero pagará impuesto por menos de $1 millón, mientras que el segundo pagará sobre $ 3 millones. Si elevamos dicha utilidad a $ 36 ó $ 48 millones, la diferencia en contra del que quedó "atrapado" en el semi integrado se incrementa a $ 3,5 y $4,5 millones respectivamente. En breve, la carga tributaria para niveles de emprendedores medios, que retiran todas las utilidades, puede triplicarse entre uno y otro régimen.

Con este objetivo, la propuesta simplifica el sistema de registros y permite el reconocimiento del crédito integro a todos los contribuyentes, en términos más favorables para los pequeños y medianos contribuyentes que queden por sobre la Cláusula Pyme. Las empresas que no tienen utilidades acumuladas, regla general entre las pequeñas y medianas, recibirán crédito por la totalidad del impuesto de primera categoría contra el impuesto personal de los socios, con lo que su tributación final corresponderá al nivel de rentas que reciben.

Por su parte, para las empresas más grandes con utilidades antiguas acumuladas, lo más habitual entre dichas empresas, las utilidades del ejercicio con crédito de 27% se agregarán a los registros de utilidades y créditos acumulados, y se determinará un crédito promedio para el dividendo que se distribuya al accionista. Por ello, son erróneos los cálculos de déficit que presagian los detractores del proyecto, o los que buscan compensaciones o incrementar la tributación de los empleados medios y altos; ya que mientras más utilidades acumuladas, y de mayor antigüedad, tenga una empresa, menor será el crédito promedio asociado a las distribuciones de utilidades. Sólo una vez que se agoten las utilidades acumuladas, el crédito será equivalente al impuesto de primera categoría pagado en el año.

Sin perjuicio de las legítimas discrepancias sobre aspectos puntuales del proyecto, es innegable que constituye un esfuerzo serio para una necesaria modernización de nuestro sistema tributario, eliminando evidentes desaciertos que generaron sucesivas reformas, y entregando certeza y estabilidad jurídicas para el desarrollo de los proyectos de inversión y la creación de empleos que el país necesita.

Está en manos del mundo político que esas inversiones se realicen en Chile, al amparo de una legislación que las promueva y reconozca su aporte a nuestro desarrollo, y no en otros países que claman por capitales y emprendedores.

**4.28 Modernización tributaria**

*11 de septiembre de 2018, columna de Natalia González, subdirectora Asuntos Jurídicos y Legislativos del Instituto Libertad y Desarrollo, disponible en* [*https://www.latercera.com/opinion/noticia/modernizacion-tributaria/315556/*](https://www.latercera.com/opinion/noticia/modernizacion-tributaria/315556/)

Esta semana, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados comenzará a conocer el proyecto de modernización tributaria. Se trata de una iniciativa muy relevante que simplifica el sistema tributario chileno, volviendo a integrar totalmente el impuesto corporativo con el impuesto global complementario (IGC), sobre la base de retiros. La integración beneficiará a más de 200.000 contribuyentes de ingresos bajos o medios, que se encuentran en los tramos exentos e inferiores del IGC (y que representan el 68% del total de contribuyentes del IGC) los que dejarán de pagar la injusta sobretasa de 9,45% que hoy les es aplicable. La reforma, así descrita, también beneficiará a un importante número de empresas de menor tamaño que hoy se encuentran en el sistema de renta atribuida. Habrá quienes argumentarán que volver a un sistema en base a retiros genera espacios de elusión y evasión. Sin embargo, tales espacios se cerraron en reformas anteriores. Además, la iniciativa sobre modernización tributaria mantiene y fortalece la norma anti-elusiva, lo que es sin perjuicio del importante desarrollo jurisprudencial del Servicio de Impuestos Internos (SII) en la materia, por lo que esta inquietud no debiera estar al centro del debate.

Junto con ello, la propuesta legal reorienta diversas disposiciones del Código Tributario haciendo patente la aplicación a éste de los principios del debido proceso y la legalidad tributaria. La certeza jurídica es así un eje y un fin de la iniciativa, cuestión que debiera ser compartida por todos los sectores pues, al final del día, todos somos de una u otra manera sujetos de impuestos. Así, la autoridad tributaria habrá de fundar sus resoluciones; actuar dentro de los plazos establecidos y podrá ser objeto de recursos jerárquicos (como cualquier otra autoridad en un procedimiento administrativo). Los contribuyentes, en tanto, gozarán de importantes derechos y mecanismos para hacerlos valer. A su vez y para evitar el incumplimiento de las obligaciones tributarias por errores de los contribuyentes, se contempla que el SII pueda ejecutar algunas medidas preventivas y de colaboración, de cumplimiento voluntario por parte del contribuyente, lo que resultará muy relevante para las PyMES.

Se trata de una iniciativa robusta, sobre un tema complejo, respecto de la cual y no obstante sus bondades, es esperable que surjan polémicas y diferencias. No faltarán aquellos que “para facilitar la discusión” se valgan de eslogans que no corresponden a un debate razonado. Pero lo cierto es que los contribuyentes que a diario deben convivir con un sistema tributario enredado, en el que invierten horas tratando de no equivocarse, esperan que el Parlamento discuta en serio. Comienza así el primer tiempo de la reforma tributaria y el Congreso tiene en este debate una inmejorable oportunidad para no desatender las verdaderas necesidades de la ciudadanía.

**4.29 Las bondades de la reforma tributaria: sorpresas para la filantropía**

*13 de septiembre de 2018, columna de Sharoni Rosenberg, gerente de Tax y Legal de PwC, disponible en* [*https://www.df.cl/noticias/opinion/columnistas/las-bondades-de-la-reforma-tributaria-sorpresas-para-la-filantropia/2018-09-12/090445.html*](https://www.df.cl/noticias/opinion/columnistas/las-bondades-de-la-reforma-tributaria-sorpresas-para-la-filantropia/2018-09-12/090445.html)

El rol cada vez más protagónico de la sociedad civil a través del trabajo en fundaciones, corporaciones, empresas (a través de sus departamentos de responsabilidad social o sustentabilidad) y filantropía en general, se ve recogido -para asombro de muchos- en el proyecto de Modernización Tributaria. Muchos pensábamos que la meta de lograr una Ley única de Donaciones sería la única oportunidad de recoger las demandas de la sociedad civil, pero el Ejecutivo nos sorprendió, y positivamente.

El proyecto propone cambios a la Ley de Herencia, Asignaciones y Donaciones, Ley sobre Impuesto a la Renta y Ley sobre Donaciones con Fines Sociales.

La gran novedad, es la ampliación del concepto "Límite Global Absoluto" que permitiría donar a empresas con pérdidas y a sociedades de inversión que no generan rentas propias, cosa que actualmente es prácticamente imposible. Este cambio sería posible al contemplar un nuevo límite: el 3,2 por mil del capital propio tributario o 1,6% del capital efectivo de una empresa.

Otra buena noticia, pero que ya se había adelantado, es la propuesta de consagrar legalmente la deducción como gasto de ciertos bienes cuya comercialización se ha vuelto inviable, lo cual aumenta la posibilidad de las empresas de realizar donaciones en el marco de su política de responsabilidad social empresarial (RSE), pero restringiéndolo sólo a empresas productoras o comercializadoras de bienes, y -en la medida que se trate de bienes de su giro. Las empresas de servicios aún no tendrían norma para deducción de gastos en RSE.

Sumado a esto, se exime a las S.A del trámite de insinuación a las donaciones que realicen a entidades no relacionadas, siempre que hayan sido aprobadas en junta de accionistas.

También se valora el esfuerzo del Ejecutivo al hacerse cargo de la omisión en que incurrió la ley 20.780 en relación a las ganancias de capital generada en la enajenación de bienes raíces. En esa ocasión las personas naturales tuvieron la oportunidad de retasar sus inmuebles, cosa que no ocurrió con las organizaciones sin fines de lucro (OSFL). Ahora se pretende que las fundaciones y corporaciones puedan actualizar el valor de adquisición de los inmuebles adquiridos antes del 2012, de acuerdo a su valor de mercado, siempre que sea debidamente acreditado ante el SII.

Por último, no podemos dejar de mencionar la controvertida propuesta de modificación a la Ley de Herencias, Asignaciones y Donaciones, ya que por un lado gravaría donaciones desde el exterior a Chile cuando el donatario sea chileno, situación que hoy estaba fuera del ámbito de aplicación del impuesto, pero, por otro lado, las donaciones desde Chile al exterior, que actualmente están gravadas con el impuesto en comento, quedarían exentas en la medida que el donatario no sea relacionado. En este último caso, el proyecto no distingue entre tipos de entidades donatarias, por lo que podría tratarse de cualquier beneficiario, no sólo entidades sin fines de lucro. Además, se establece un nuevo beneficio aplicable a donaciones realizadas por personas naturales, pues se pretende eximirlas del impuesto y del trámite de insinuación siempre que no excedan del 20% de la renta anual del año comercial anterior o 500 UTM, el que fuera menor. Para que sea aplicable el beneficio, se deberá informar al SII y éstos aplicarán cualquiera sea el fin de la donación (de beneficencia o no).

**4.30 ¿Y si no fuera solo modernización?**

*12 de septiembre de 2018, columna de Magdalena Brzovic, presidenta Comisión Tributaria Cámara Nacional de Comercio, disponible en* [*https://www.latercera.com/pulso/noticia/no-solo-modernizacion/316777/*](https://www.latercera.com/pulso/noticia/no-solo-modernizacion/316777/)

Desde el día 28 de agosto de este año, fecha en que el Presidente de la República presentó el Proyecto de Modernización Tributaria, usted podrá haber visto en diarios, radios y programas de TV que el tema de impuestos está nuevamente en el centro de la discusión.

¿Cómo puede ser, se preguntará usted, que cada vez que alguien sube al poder pretenda reformar el sistema para recaudar impuestos? ¿Qué ocurre cuando las reglas del juego se intentan cambiar permanentemente? Las respuestas pueden ser disímiles. La mía se resume en una sola idea: todo gobierno requiere recursos para llevar a cabo sus políticas públicas y con ellas dar a sus gobernados un mejor bienestar.

Pero sabemos que de buenas intenciones el infierno está lleno. Tantos cambios en tan poco tiempo hacen que las cosas se enreden. Los funcionarios que tienen que fiscalizar la aplicación de esas normas, los contribuyentes que tratan de cumplirlas, los asesores que tratamos de entenderlas para asistir a nuestros clientes, etc.

Pero creo que este gobierno no tenía otra opción que hacer lo que hizo. Tenía que corregir ese sistema tributario que nos rige desde 2015 hasta hoy de manera tan imperfecta.

Seamos serios, el sistema como está es ininteligible para aquellos que no se dedican a estos temas y eso tiene que cambiar. Al menos el ciudadano común debe tener ciertas aproximaciones que le permitan, en el plano de la intuición, detectar cuando sus impuestos están mal determinados.

Aplaudo el nuevo proyecto de modernización, pues intenta de manera seria aclarar lo que está oscuro y eso se agradece. Este nuevo proyecto trae novedades que celebro como, por ejemplo, el silencio administrativo positivo, que permite que el contribuyente entienda como aprobado aquello que presenta a la administración si en un determinado plazo ésta no se pronuncia.

Valoro también la figura del Defensor del Contribuyente, así como un Sernac del Contribuyente. ¿Cómo no mencionar la nueva conceptualización de gastos rechazados? Al fin podremos terminar con la arbitrariedad del Servicio de Impuestos Internos (SII), cuando rechaza a las empresas gastos para el bienestar de su personal, como lo es, por ejemplo, la construcción de una cancha de futbol para los trabajadores. ¿Sabía usted que cuando una empresa destina recursos a este tipo de gastos en más de alguna ocasión, el SII ha interpretado que eso no es un gasto necesario para producir la renta y lo sanciona con un impuesto multa del 40% del valor de este gasto?

No puedo terminar sin mencionar los impuestos digitales, la boleta electrónica, que pretenden de una vez por todas “emparejar la cancha” para aquellos que pagan todos sus impuestos y que no pueden competir en las mismas condiciones con aquellos que no lo hacen.

Finalmente, y lejos de agotar el tema, espero que la discusión en el Congreso sea seria, con argumentos técnicos y no ideológicos que permitan a nuestra patria contar con un sistema tributario justo, claro y que permita que todos los chilenos vivan más y mejor.

**4.31 Que paguen los súper ricos**

*13 de septiembre de 2018, columna de Juan Manuel Baraona, profesor de Derecho Tributario U. de Chile y socio Baraona, Fischer y Spiess Abogados, disponible en* [*https://www.latercera.com/pulso/noticia/paguen-los-super-ricos/318246/*](https://www.latercera.com/pulso/noticia/paguen-los-super-ricos/318246/)

El tema ha vuelto a la palestra a consecuencia del proyecto de modernización tributaria. La reforma tributaria de 2014 estableció la convivencia de dos sistemas paralelos.

El así denominado sistema atribuido, incluye a un mayor número de empresas de menor tamaño, es integrado en el sentido de que el impuesto de la empresa se acredita totalmente en contra del impuesto personal del propietario, pero éste último debe tributar aún cuando no reciba distribuciones.

Por su parte, el así sistema llamado semi integrado combina la ventaja de tributación sobre distribuciones con una acreditación parcial del impuesto de la empresa, lo que se traduce en una sobre tasa de impuesto del propietario de 9,45 puntos a todos los niveles de rentas.

El proyecto propone un sistema único que se caracteriza por ser integrado y de tributación sobre las distribuciones de utilidades. Me parece una buena idea porque logra los propósitos de simplificar el sistema al contemplar un régimen único, de neutralidad tributaria al establecer una integración total y de posponer la tributación de todos los propietarios con el consiguiente efecto en el ahorro empresarial. Se ha criticado la iniciativa señalando que el nuevo sistema beneficiaría a las empresas más grandes de Chile que están en el sistema semi integrado.

La verdad no es fácil entender la lógica del argumento. ¿En qué sentido se benefician las empresas más grandes si están ya pagando un 27%? Entonces habría que reformular el argumento y decir que la iniciativa está hecha para los súper ricos.

Pero tampoco es claro el planteamiento. En primer lugar, el cambio hace desaparecer los 9,45 puntos de impuesto personal que pagan todos los empresarios del sistema semi integrado, grandes y chicos por igual. Esta sobre tasa sí que es regresiva, y basta un ejemplo elemental para demostrarlo.

A un empresario que está en la tasa de impuesto personal de 5% el efecto del régimen semi integrado aumenta su carga a 14,45%, vale decir casi tres veces, en tanto que un empresario que ya está en el 35% la ve aumentar a 44,45%, valer decir, menos de la mitad.

Concluyo entonces que el cambio del sistema favorece a los pequeños y medianos empresarios que están en el régimen semi integrado, así como a los pequeños y medianos empresarios que están en el sistema atribuido cuyos propietarios tributarán ahora solamente cuando reciban distribuciones.

¿Y qué pasa con los súper ricos?

La primera dificultad es definir qué es un súper rico ya que en una encuesta habrían tantas respuestas como encuestados. Ensayemos una definición entendiendo por tales a los integrantes de los grandes grupos económicos con participación determinante en las mil empresas más importantes de Chile.

Entonces, ¿cómo se establece sobre qué base pagan, con qué tasa y cuándo?, o basta con volver a un 40% las tasa del impuesto Global Complementario lo que afectará a muchos más que a los súper ricos?

Debo confesar que la propuesta me parece algo ingenua respecto de su efecto recaudatorio. Se podría contra argumentar a favor de volver a todos al régimen atribuido y se acaba el problema. Y ahí sí que volvemos a fojas cero. Al proyecto original de la reforma de 2014 que hubo de ser cambiado en medio de su tramitación en el Congreso porque todos, Gobierno y Parlamento, se dieron cuenta que no funcionaba

**4.32 Modernización Tributaria: un gran avance para Chile**

*15 de septiembre de 2018, columna de Francisco Moreno, Subsecretario de Hacienda, disponible en* [*https://www.latercera.com/pulso/noticia/modernizacion-tributaria-gran-avance-chile/321033/#*](https://www.latercera.com/pulso/noticia/modernizacion-tributaria-gran-avance-chile/321033/)

El proyecto de ley de Modernización Tributaria de nuestro gobierno está inspirado en tres grandes pilares: simplificar, incentivar y proteger a los contribuyentes de Chile. Detrás de este proyecto está el interés de nuestro gobierno de poner en el centro de su acción a las personas y a los emprendedores, de facilitarles la vida y de potenciar sus capacidades para promover el desarrollo integral de nuestro país.

Buscamos que esta iniciativa sea una herramienta central para la recuperación del crecimiento. A pesar del complejo estado en que recibimos las finanzas públicas y el incierto escenario internacional por mayores presiones proteccionistas, nuestra economía ha mostrado signos evidentes de recuperación. Estamos liderando el crecimiento en Latinoamérica, con un segundo trimestre que llega al 5,3% del PIB y un aumento de 7,1% en la inversión.

Pero el crecimiento no está asegurado. Por eso buscamos crear las condiciones de un desarrollo sostenible en el tiempo.

Para las Mipymes, la creación de un sistema tributario único e integrado permitirá un ingreso automático a este régimen, con una tasa de impuesto del 25%.

Facilitaremos el cumplimento de sus obligaciones, a través de una declaración de impuestos tal como hoy existe para las personas naturales. Asimismo, crearemos la figura del Defensor del Contribuyente (Dedecon), de modo que nuestras pymes puedan recurrir a esta figura y no se sientan en desventaja frente al Servicio de Impuestos Internos (SII). Finalmente, el proyecto apunta que el uso de la “Cláusula Pyme” sea mucho más extensivo, permitiendo que cerca de 700 mil pymes puedan acceder al beneficio del 14 ter.

Para las regiones extremas, las buenas noticias están dadas por la extensión del plazo de las zonas francas hasta 2035, estableciendo 10 años adicionales en caso de que venzan en 2025. Esta es una positiva medida para nuestras zonas extremas, pues asegura estos beneficios por un largo período.

La Modernización Tributaria es balanceada. El costo fiscal de la integración total ascenderá a US$ 833 millones anuales cuando el nuevo sistema esté en régimen. Sin embargo, la mayor recaudación producto del uso obligatorio de la boleta electrónica significará en régimen US$ 1.181 millones por reducción de evasión.

La Modernización Tributaria no son solo números, sino que realidades: cada punto de mejoría y los buenos resultados se traducirán en mejores empleos, salarios y oportunidades, junto con una posición más sólida de nuestras empresas y un impulso decisivo para el desarrollo de industrias y emprendimientos.

Para el gobierno el diálogo es importante. Esperamos que el clima de discusión en el Congreso sea con una disposición de diálogo y sano debate. Confiamos que el oficialismo y la oposición estarán a la altura de los desafíos que hemos planteado y buscaremos en conjunto sacar estas medidas adelante, para el beneficio de todos los chilenos.ç

**4.33 Reforma tributaria: una buena propuesta**

*16 de septiembre de 2018, columna de Francisco Pérez Mackenna, gerente general de Quiñenco, disponible en* [*https://www.latercera.com/pulso/noticia/reforma-tributaria-una-buena-propuesta/321570/*](https://www.latercera.com/pulso/noticia/reforma-tributaria-una-buena-propuesta/321570/)

La propuesta del gobierno en materia tributaria es acertada y equilibrada, ya que corrige errores de la reforma del 2014, principales responsables del alicaído crecimiento de la administración anterior. Los méritos de la modernización planteada son tres: la integración total del sistema eliminando la renta atribuida, el perfeccionamiento de la norma antielusión y la creación de la defensoría del contribuyente.

La primera medida implica una rebaja del impuesto a los retornos del capital invertido a través de sociedades anónimas. Ello es adecuado, porque ese tributo, al igual que al calcular los gastos en peajes de la carretera a Viña del Mar, corresponde a la suma de lo pagado en las distintas plazas. Aunque en el papel la reforma anterior fijó una tasa corporativa de 27%, ese es solo el primero de los peajes en un camino que tiene dos: el corporativo y el personal. La suma de ambos, que es la que importa al inversionista cuando evalúa un proyecto, dejó en los hechos el impuesto a los retornos de capital en 44,45%.

Por su parte, las otras dos modificaciones propuestas son muy necesarias para dar mayor certeza jurídica. Si los contribuyentes son percibidos como potenciales delincuentes, pocos jóvenes con buenas ideas y espíritu emprendedor querrán aventurarse por la senda del emprendimiento. Cuando en un país el Servicio de Impuestos Internos gana la mayoría de las causas, el costo tributario esperado de quien evalúa un proyecto, sin duda, excede ese 44,45%.

La modernización tributaria presentada por el gobierno del Presidente Piñera, en la práctica, rebaja el impuesto corporativo por medio de la integración, pero al mismo tiempo es neutra o incluso recauda algo más, gracias a una menor evasión de IVA y nuevos impuestos digitales. En consecuencia, no tiene lógica que terceros pidan compensar lo que no necesita ser compensado con una mayor tasa marginal de impuesto personal. Además, ello resultaría perjudicial para la reducción de la desigualdad por sus implicancias en la acumulación de capital humano.

El capital humano es la principal empresa de una economía. Es en lo que más invierte el país año a año (recordar el enorme esfuerzo financiero que implica la gratuidad en educación), y constituye la principal fuente de movilidad social. Su contribución al PIB y al bienestar es enorme y corresponde al esfuerzo de arquitectos, abogados, médicos, ingenieros, artistas, deportistas o músicos, entre muchos otros profesionales y técnicos.

Pasarle la cuenta al capital humano por una supuesta rebaja a la tasa corporativa es un error. El costo de capital en una economía abierta incorpora tanto las tasas corporativas como las tasas personales de impuestos, las que se multiplican. En cambio, para las personas naturales, para los profesionales que trabajan en las empresas, quienes no descuentan gastos ni difieren ingresos, una modificación así no sería neutra, ya que aumentaría el costo de la inversión en capital humano después de impuestos.

Ese planteamiento es también un error dinámico, porque la experiencia indica que en materia tributaria todo lo que sube se queda arriba y todo lo que baja sube (como lo demuestra la propuesta de volver al 40%). En ese escenario, la expectativa racional de los inversionistas que planifiquen a más de tres años y medio será que la rebaja de la tasa corporativa durará poco en el tiempo. Con ello, en el equilibrio final terminaríamos con un alza en la tasa personal, sin el beneficio de la rebaja a la tasa de impuesto corporativo, lo que implica un costo de capital mayor también para las empresas. Es por ello que acertadamente el ministro de Hacienda, entrevistado en el Chile Day, le ha cerrado la puerta a esta alternativa.

Si de lo que se trata es de generar propuestas provocativas, resultaría menos distorsionador reemplazar el impuesto a la renta por uno al gasto. Claro está que la transición no sería sencilla, puesto que quienes ya pagaron por sus ingresos no debieran pagar dos veces (cuando ganaron y cuando gasten). Una alternativa a considerar sería la de igualar las tasas en un 30% (flat tax), subiendo la tasa corporativa tres puntos y bajando en un 5% la tasa marginal máxima de las personas. Con ello se aumenta el impuesto a las utilidades retenidas, pero se reduce el de los dividendos, por lo que el costo de capital cae para ambas inversiones (capital corporativo y humano). Dicha medida generaría una recaudación mayor al principio y creciente en el tiempo.

Es de esperar que la propuesta del gobierno avance en los términos en que fue planteada, porque es una buena propuesta. Obviamente, ha encontrado barreras en el camino. Partiendo por los padres de la reforma tributaria de 2014, que no han sido capaces de reconocer que su obra es defectuosa y que requiere de cambios para recuperar la capacidad de crecer. Solo el doctor Frankenstein se aferra a su creación sin reconocer sus limitaciones. Ha llegado la hora de que esa criatura ingrese al quirófano para darle un alma más benévola con el desarrollo, el empleo y los salarios, materia prima esencial en la batalla contra la pobreza y desigualdad.

**4.34 Modernización tributaria, crecimiento sostenible**

*17 de septiembre de 2018, columna de Felipe Larraín B., Ministro de Hacienda, disponible en* [*http://www.elmercurio.com/blogs/2018/09/17/63348/Modernizacion-tributaria-crecimiento-sostenible.aspx*](http://www.elmercurio.com/blogs/2018/09/17/63348/Modernizacion-tributaria-crecimiento-sostenible.aspx)

El desempeño de la economía chilena ha sorprendido positivamente en 2018. Quienes analizan nuestra economía han debido revisar al alza sus estimaciones de crecimiento, ante la contundencia de un dinamismo no visto en seis años. Este mayor crecimiento está llegando a las personas, como muestra la sostenida creación de empleos de calidad que está generando el sector privado desde inicios de año, en claro contraste con lo que venía ocurriendo hasta 2017. Además, la inversión y la productividad dejaron atrás cuatro años de caídas.

La recuperación es más destacable considerando el marcado deterioro del escenario internacional, como consecuencia del avance de la guerra comercial y del sostenido aumento de las tasas de interés internacionales.

En este contexto, la fragilidad de algunas economías emergentes ha quedado en evidencia. Chile no es inmune a los embates de un escenario internacional más complejo, pero ciertamente estamos mejor preparados para enfrentarlo. Con todo, este sobresaliente desempeño resalta la importancia de perseverar en un manejo fiscal responsable y de continuar impulsando todas las medidas que estén a nuestro alcance para que la recuperación sea sostenible en el tiempo.

El proyecto de modernización tributaria, junto con modernizar el sistema impositivo y entregar mayor certeza jurídica a los contribuyentes, genera las condiciones que permitirán dar sostenibilidad a la recuperación económica, al emprendimiento, la inversión y la creación de empleos de calidad. Mandatados por la contundente mayoría que apoyó al Presidente Piñera en diciembre pasado, este proyecto pondrá al país en una sólida posición para enfrentar los desafíos de las próximas décadas.

Los mecanismos de depreciación instantánea propuestos harán perdurar la recuperación de la inversión que hemos comenzado a ver este año. A ellos se suma la reducción del plazo para las devoluciones de IVA por inversiones en activo fijo (de 8 meses a 65 días) y la extensión de la rebaja del crédito fiscal de IVA en la construcción de viviendas hasta las 4.000 UF, que favorecerá con menores precios a la clase media de nuestro país.

Además, el proyecto contempla la integración total entre los impuestos pagados por las empresas y los de sus socios. Esta medida es necesaria para restablecer la equidad del sistema tributario. Para que emprendedores y trabajadores dependientes, inversionistas locales y extranjeros paguen los mismos impuestos si reciben la misma renta. Este es un principio básico que debe cumplir cualquier sistema tributario.

La integración total del sistema tributario es progresiva, porque favorece relativamente más a personas que están en los tramos más bajos del impuesto global complementario. De hecho, cerca de 80 mil personas que ganan menos de 634 mil pesos mensuales (el mínimo exento de global complementario) deben soportar un impuesto de 9,45% por la desintegración parcial; ellas volverán a estar exentas de impuesto personal con la reintegración. Además, 91% de quienes se vieron perjudicados por el régimen semiintegrado este año tienen una tasa de impuesto global complementario menor o igual a 13,5% y solo 3% corresponde a personas en el tramo más alto de dicho impuesto.

Las pymes son uno de los motores de nuestra economía, del crecimiento y de la generación de empleos. Atendiendo tanto a su relevancia, como a las dificultades que han enfrentado con el sistema actual, el proyecto crea la cláusula Pro Mipyme, la que opera de forma automática sin distinguir por estructura jurídica ni por tipo de socios, y contempla una tasa de impuesto de primera categoría de 25%, con un incentivo adicional para favorecer la reinversión de utilidades. Además, las mipymes hasta 50.000 UF de venta contarán con una propuesta de declaración de renta de parte del SII y con el apoyo y la orientación tributaria de la nueva Defensoría del Contribuyente.

Este proyecto resguarda también los equilibrios fiscales. En efecto, las medidas de incentivo a la inversión, apoyo a la clase media, al emprendimiento y a las pymes están debidamente financiadas; la recaudación neta será de US$ 428 millones anuales en régimen. Esta estimación es conservadora, al no considerar los efectos positivos que generará el proyecto en el crecimiento económico, que es la mayor y más eficiente fuente de generación de ingresos fiscales.

Los chilenos valoran las bondades del proyecto de modernización tributaria, según queda de manifiesto en las encuestas de opinión, en el respaldo que públicamente han manifestado emprendedores y pymes, así como también en las opiniones de analistas locales y externos que anticipan un salto de inversión, como consecuencia de las medidas proinversión contenidas en la iniciativa. Considerando esta favorable recepción del proyecto y de cara al debate parlamentario que se inicia, la actitud del Gobierno será de permanente apertura al diálogo y disposición a escuchar. Debemos alcanzar acuerdos que sean beneficiosos para el país. Nos gustaría que este proyecto sea aprobado por una mayoría amplia y vamos a empeñarnos en que sea así.

**4.35 Modernización tributaria**

*19 de septiembre de 2018, columna de Cristóbal Gigoux, gerente ejecutivo de Horizontal, disponible en* [*https://www.latercera.com/opinion/noticia/modernizacion-tributaria-2/323444/*](https://www.latercera.com/opinion/noticia/modernizacion-tributaria-2/323444/)

El 4 de junio de 1940, en la Cámara de los Comunes en Westminster, Winston Churchill pronunció uno de sus más famosos discursos: el anuncio que la Operación Dynamo (la evacuación de Dunkerque) había sido un éxito y que desde ese día el Reino Unido se encontraba completamente solo en la misión de derrotar al fascismo. Sin embargo, la convicción era la correcta.

Esa misma sensación de soledad, pero también de tener la convicción de que el camino es el correcto, parece estar acompañando al gobierno en sus principales reformas económicas: el proyecto de modernización tributaria actualmente en tramitación en el Congreso; y la reforma al sistema de pensiones, de momento en los hornos de La Moneda.

La necesidad de la modernización tributaria es urgente en consideración con el diagnóstico de la actual situación impositiva la cual, en definitiva, ha atentado fuertemente contra las oportunidades de miles de chilenos de acceder al mercado laboral formal. En efecto, ya sea como causa directa o concausa, la reforma tributaria de Bachellet II implicó una caída en la inversión generando un enfriamiento polar en materia de creación y calidad del empleo formal.

En un estudio elaborado por Horizontal se constató que la inversión empezó a caer desde que el gobierno de Bachelet II anunció el proyecto de reforma. En efecto, durante el período 2014-2017, la inversión cayó sostenidamente todos los años, promediando un crecimiento negativo de 1,7% anual. Esta caída de la inversión se vio acompañada de una disminución en la creación de empleo formal. De hecho, considerando la serie del empleo asalariado, se constata que su crecimiento cayó significativamente luego de anunciarse la reforma tributaria de 2014, implicando que entre 2014 y 2017 éste bajara a un promedio de 62 mil plazas por año, cerca de 172 mil puestos menos por año comparado con el cuadrienio anterior.

Es por esto que llama la atención la frialdad que parte importante de los liderazgos políticos han tenido respecto del proyecto de modernización tributaria, hecho que ha dejado al gobierno relativamente solo en los remos de su tramitación legislativa. Recuperar la inversión y el empleo son parte fundamental de la misión del presente gobierno, ya que sólo de esa manera se lograrán las condiciones suficientes para alcanzar una sociedad meritocrática e igualitaria.

Al igual que hace más de medio siglo, la constancia y la convicción de que se camina en el sentido correcto no son suficientes sin los aliados necesarios para alcanzar la victoria.

**4.36 Mayor seriedad en la discusión tributaria**

*20 de septiembre de 2018, columna de Ricardo Walker, colaborador del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile, disponible en* [*https://www.df.cl/noticias/opinion/columnistas/mayor-seriedad-en-la-discusion-tributaria/2018-09-14/105536.html*](https://www.df.cl/noticias/opinion/columnistas/mayor-seriedad-en-la-discusion-tributaria/2018-09-14/105536.html)

A pocos días de su ingreso al Congreso, ya son varios los parlamentarios de oposición que han manifestado su desacuerdo con el proyecto de modernización tributaria.

Se oponen, entre otras cosas, a la reinstauración de un sistema tributario integrado, argumentando que ello beneficiaría principalmente a algunas grandes empresas. Lo anterior no es correcto. La reintegración propuesta justamente resguarda la equidad horizontal, donde su principal efecto es que dos personas con el mismo ingreso pagarán el mismo impuesto independientemente de la procedencia de sus rentas.

También se oponen a las modificaciones introducidas a la norma general antielusión (NGA), ya que en su parecer "la debilitarían". Lo anterior tampoco es acertado. En nuestro último trabajo publicado hace ya algún tiempo, "Hacia una interpretación jurídica de la Economía de Opción y el Abuso en la NGA del Código Tributario", hicimos un esfuerzo por tratar de ilustrar la forma en cómo la actual normativa debiera de ser entendida bajo una interpretación estrictamente jurídica, atendidas las contradicciones y vaguedades que a ella le afectan.

La nueva normativa que se propone, a pesar de que en nuestra opinión en ella también se incurren en ciertos defectos que serían deseables que se pudieran subsanar –en su estructura–, está muy lejos de poder ser calificada como una disposición que se ha debilitado.

Asimismo, el nuevo tratamiento que el proyecto otorga a los gastos realizados por los contribuyentes, –en orden a que ellos se aceptarán cuando se encuentren vinculados directa o indirectamente al desarrollo del giro, entendiéndose por tal, el que se realiza para el desarrollo de las operaciones o negocios de la empresa, o el que se efectúa en interés de la misma–, es un entendimiento moderno y acorde con la realidad de las empresas, en contraposición al anticuado concepto de gasto necesario para producir la renta que actualmente rige, el cual se ha interpretado como sinónimo de obligatorio, indispensable, forzoso e ineludible, y que en la práctica ha significado que todos ellos terminen siendo rechazados.

La misma modernidad la encontramos con la incorporación de la Defensoría de Derechos del Contribuyente; así como también en la instauración del silencio positivo en materia tributaria, en la facilitación de la normativa sobre donaciones, o en las mejoras a la tributación de las ganancias de capital y a las que alivian la doble tributación internacional.

Se suman a esta disconformidad los funcionarios del SII, quienes para manifestar su contrariedad han organizado un paro, el que además de ser ilegal, es tan inaceptable, como lo sería, si la misma actitud fuera realizada por los jueces de la República en aquellas oportunidades en que no les parece el contenido de las leyes que deben aplicar.

Todo proyecto es perfectible, y para eso justamente está la discusión parlamentaria. No ayuda en nada a la prosperidad de las ideas, que ellas sean objetadas por el solo hecho de plantearlas y sin el necesario rigor de un serio y profundo análisis técnico, académico, y si se quiere, también político.

**4.37 Modernización tributaria**

*21 de septiembre de 2018, columna de Manuel Agosin, académico de la Facultad Economía y Negocios U. de Chile, disponible en* [*https://www.latercera.com/opinion/noticia/modernizacion-tributaria-3/325580/*](https://www.latercera.com/opinion/noticia/modernizacion-tributaria-3/325580/)

El gobierno recientemente envió al Parlamento un proyecto de ley que busca modernizar (para algunos, reformar) el sistema tributario heredado de la administración de la Presidenta Bachelet. El proyecto de ley contiene un sinnúmero de propuestas. Aquí me concentro en lo medular del proyecto: la propuesta de reintegrar el impuesto a la renta. Recuérdese que, en estos momentos, una buena parte de las empresas grandes están utilizando el sistema semi integrado, que otorga a los accionistas o dueños de una empresa un crédito de un 65% del valor del Impuesto de Primera Categoría pagado por la empresa. Las personas que están en el tramo más elevado del impuesto a la renta (35%) tendrán un crédito no del total tributado por la empresa en primera categoría (cuya tasa es 27%) sino del 65% de ese 27%. En otras palabras, el crédito que reciben es de tan sólo 17,55%, lo que implica que esas personas tienen que tributar, en total, un 44,45% de las utilidades generadas por la empresa.

Debe recordarse que el sistema semi integrado surgió de un largo debate en el Parlamento y el mismo no estaba contemplado en la propuesta inicial que hizo la administración de la Presidenta Bachelet. Lo curioso es que, ahora, los defensores originales del sistema integrado se han vuelto sus principales detractores, quizás porque se dieron cuenta que el sistema actual grava las rentas del capital a una tasa más alta que la propuesta Piñera. Se calcula que ella le ahorraría impuestos por unos US$ 600 millones a los perceptores de dividendos.

No cabe duda de que la equidad horizontal se logra sólo con un sistema integrado. Imaginémonos dos situaciones. Un contribuyente, digamos, una figura de la televisión, tiene un ingreso bruto, fruto de su trabajo, de $ 100 millones; otro, un jubilado, tiene el mismo ingreso, el cual en su totalidad proviene de dividendos. El primer individuo termina pagando $ 35 millones en impuestos y el segundo $ 44,45 millones. Sí, existen personas con elevados ingresos del trabajo que tienen rentas superiores a las de los perceptores de dividendos, como por ejemplo los altos ejecutivos de las grandes empresas. No parece haber buenas razones para que tengan que pagar impuestos a una tasa menor que nuestro proverbial jubilado, quien vive de los dividendos que le reportan sus inversiones.

La solución parece ser bastante sencilla: reintegrar el sistema y agregarle, para las rentas más altas, uno o dos tramos adicionales al Global Complementario. Hasta la administración Lagos, la tasa máxima del Global Complementario era de 45%. Si se repone una tasa marginal máxima mayor al 35%, ello también tendría la virtud de incentivar la inversión con retenciones de utilidades.

**4.38 Por un debate constructivo de Modernización Tributaria**

*22 de septiembre de 2018, columna de Matías Acevedo, subdirector de Racionalización y Función Pública de la Dirección de Presupuestos, disponible en* [*https://www.latercera.com/pulso/noticia/debate-constructivo-modernizacion-tributaria/326557/*](https://www.latercera.com/pulso/noticia/debate-constructivo-modernizacion-tributaria/326557/)

EL informe financiero que acompaña al proyecto de ley de Modernización Tributaria realizado por la Dipres estima el impacto de las medidas propuestas en la recaudación tributaria. Por las expectativas que genera un proyecto de ley de estas características, era previsible un debate al respecto. Sin embargo, durante las últimas semanas hemos observado con cierta desazón, desde algunos sectores, críticas que no apuntan a un debate de ideas sino más bien lo señalan como un informe poco trasparente. Esta crítica no sólo nos parece injusta, sino también desinformada. El estándar utilizado en su elaboración supera ampliamente al informe financiero realizado en el año 2014 para la reforma tributaria tanto en la profundidad del análisis como en accountability.

Profundidad: el informe financiero de modernización tributaria con un impacto en mayor recaudación en régimen de 0,1% del PIB, explica detalladamente cada una de las medidas y, para las que son cuantificables, se agrega una descripción de cómo fueron estimadas, las fuentes utilizadas y supuestos implícitos.

Mientras el informe financiero de la Reforma Tributaria de 2014, con un impacto teórico de mayor recaudación de 3% del PIB (30 veces superior al proyecto actual) en ninguna de sus 6 páginas explica los supuestos y las fuentes utilizadas para sus cálculos. Es decir, un informe que obliga a los ciudadanos a realizar un verdadero acto de fe sobre donde provendrán los US$7.000 millones de mayor recaudación esperada.

Accountability: en el presente informe se han especificado todas las fuentes de información que la Dipres utilizó para realizar los cálculos. Por ejemplo, el impacto de la depreciación semi-instantánea, utiliza las bases de formación bruta de capital fijo del Banco Central e información de la Corporación de Bienes de Capital.

Otro ejemplo, es el caso de la boleta electrónica. Los supuestos de mayor declaración de ventas en boleta por tamaño de empresa están explicados en detalle.

Quienes están familiarizados con los temas tributarios saben que la base para realizar este cálculo -a diferencia de otro tipo de información que son de carácter reservado- se encuentra en la página web del SII (formulario 29) y se aplica las tasas de crecimiento económico. De esta manera, con los supuestos entregados en el informe se pueden replicar íntegramente los cálculos realizados para la mayor recaudación de la boleta electrónica.

Por el contrario, del informe financiero de la Reforma Tributaria de 2014, que con alta probabilidad no alcanzará la recaudación esperada, aún no sabemos los supuestos y sus fuentes.

Estamos convencidos de que el proyecto de ley de modernización tributaria presentado por el Presidente Sebastián Piñera al Congreso permitirá retomar la senda del crecimiento, de la mano de las pymes, que son el motor de la generación de empleos en nuestra economía. Invitamos a todos aquellos que quieran ser parte de un debate democrático crítico, pero constructivo, a informarse y aportar en la discusión de este proyecto de ley. Esperando que fruto de ese debate, nos permita avanzar hacia un sistema tributario más moderno, más simple y competitivo, que generar más y mejores oportunidades de crecimiento y empleo para nuestros ciudadanos.

**4.39 Integración tributaria: un gran paso hacia la equidad con progresividad**

*23 de septiembre de 2018, columna de Alfonso Swett y Claudio Agostini, disponible en* [*https://www.latercera.com/pulso/noticia/integracion-tributaria-gran-paso-hacia-la-equidad-progresividad/326857/*](https://www.latercera.com/pulso/noticia/integracion-tributaria-gran-paso-hacia-la-equidad-progresividad/326857/)

Mucho se ha comentado en estos días sobre uno de los principales elementos que contiene la propuesta de reforma tributaria presentada por el gobierno. Nos referimos a un sistema con completa integración tributaria. Han surgido críticas iniciales a esta propuesta de integración que queremos analizar, en primer lugar, desde la evidencia de las cifras de la Operación Renta 2018, y en segundo lugar, desde la claridad de conceptos tributarios básicos.

Una primera crítica que ha surgido es que un sistema integrado sería regresivo. Las cifras de la Operación Renta 2018 muestran que si bien el sistema semiintegrado les subió el impuesto en 9,45% adicional a 10.440 personas del tramo de más altos ingresos, también les subió el impuesto a casi 300.000 personas de los tramos más bajos. El resultado de la aplicación del semiintegrado significó más que duplicarles los impuestos personales a 257.305 personas que antes pagaban entre 0% y 8%, o sea, el doble de los impuestos que les correspondía pagar de acuerdo a sus ingresos.

Estos datos confirman que en Chile el sistema integrado es el gran paso hacia la equidad horizontal con progresividad. Y se podría dar un paso adicional en la reforma, eliminando las exenciones tributarias y los espacios de elusión que favorecen a personas de mayores ingresos, como ocurre, por ejemplo, con la renta presunta.

Una segunda crítica es que un sistema integrado favorece a las grandes empresas y no a las pymes. Esa mirada tiene un error fundamental. La teoría y la evidencia es que solo las personas pagan impuestos, siempre. En el caso del impuesto a las empresas, la mejor evidencia hasta ahora es que ese impuesto recae fundamentalmente sobre sus dueños.

Por eso, lo relevante es considerar quiénes son los dueños de las empresas y no su tamaño. Hay muchas empresas grandes que tienen socios minoritarios con ingresos bajos, como personas jubiladas que tienen unas pocas acciones, por ejemplo. Esas personas se ven perjudicadas fuertemente con la desintegración. Por lo anterior, nuevamente podemos afirmar que el sistema integrado es un gran paso hacia la equidad con progresividad.

Revisemos conceptualmente lo que hay detrás de un sistema integrado. Un sistema integrado consiste en que los impuestos pagados por una empresa se reconocen cuando el dueño de la empresa paga sus impuestos personales. Por ejemplo, si una empresa tuvo utilidades de 1.000 y pagó 250 en impuestos de Primera Categoría, cuando el dueño pague sus impuestos personales en el impuesto Global Complementario, se le reconocerán como pagados esos 250. Entonces, si el dueño tiene que pagar 300, pagará solo 50, porque 250 ya fueron pagados en la empresa.

El resultado final es que una persona paga la tasa que le corresponde de acuerdo a sus ingresos y, por eso, la integración tributaria es una condición necesaria para que exista equidad tributaria horizontal, es decir, que dos personas que tienen los mismos ingresos paguen los mismos impuestos, independiente de la fuente de esos ingresos.

Por el contrario, si hay desintegración tributaria, no se reconocen como pagados los impuestos que ya pagó la empresa. En este caso, al mismo dueño anterior, si tiene que pagar 300 en el impuesto Global Complementario, no se le reconocerán los 250 ya pagados y terminará pagando en total 550. Es decir, pagará más impuestos que lo que le corresponde de acuerdo a sus ingresos.

Es así como la desintegración tributaria puede generar inequidades muy grandes, especialmente en los tramos de menores ingresos. Por ejemplo, el dueño de una pyme que gana $ 500 mil mensuales en su empresa, pagaría $ 100 mil al mes en impuestos si el impuesto a las utilidades es de 20%. En un sistema integrado, se le reconocería lo pagado en su pyme y, por eso, cuando tenga que pagar el impuesto Global

Complementario, se le devolvería todo lo pagado y su tasa final de impuestos sería cero, que es lo que corresponde dados sus ingresos. En un sistema desintegrado no se le devolvería nada y pagaría 20% de sus ingresos en impuestos, a pesar de estar exento.

Por todo lo anterior, aplaudimos la integración total, ya que tener un sistema no integrado no es el instrumento adecuado para lograr progresividad; equivale a usar un serrucho en vez de un martillo para clavar un clavo.

**4.40 Defensoría del Contribuyente: una deuda pendiente**

*24 de septiembre de 2018, columna de Ignacio Gepp, director de Puente Sur Tax Advisory, disponible en* [*https://www.latercera.com/pulso/noticia/defensoria-del-contribuyente-una-deuda-pendiente/327964/*](https://www.latercera.com/pulso/noticia/defensoria-del-contribuyente-una-deuda-pendiente/327964/)

Cuando en agosto el Presidente Sebastián Piñera comentó las bases de lo que sería la reforma tributaria, me quedó claro que la tenía difícil. Con todo, nunca imaginé que la creación de la Defensoría Del Contribuyente (Dedecon) fuera a generar un rechazo pasional del mundo público.

¿En qué se funda ese rechazo? Según dicen: (i) debilitaría la función fiscalizadora del SII al constituirse como un protector de los derechos del “enemigo”; (ii) sería la “institucionalización del lobby” al poder sugerir medidas correctivas a la jerarquía superior del SII; (iii) le quitaría recursos a los ya colapsados Tribunales Tributarios y Aduaneros, entre otras razones.

Admito que frente a esas críticas no puedo sino estar perplejo, ya que como decía mi amigo Coke, Chile se debe a sí mismo un ombudsman: un Defensor del Pueblo.

¿Por qué un país serio y con bajos índices de corrupción necesita esa figura en materia tributaria?

Porque por muy buenos alumnos que seamos, seguimos siendo el país de la desigualdad, de las donaciones truchas a todo el espectro político y de los pitutos.

Nuestro apodo: el país del lobby.

Mirándonos al espejo, Chile necesita una Defensoría porque de lo contrario sólo los poderosos tienen derecho efectivo a un trato justo por parte del Estado. La clase media que se joda.

¿Qué significa el no tener una Defensoría para el ciudadano común o la Pyme?

Que cuando, sin justa causa, no le permitan emitir un documento o no le respeten sus derechos en una fiscalización, tendrá que tratar de entender por sus propios medios la burocracia tributaria, con el probable resultado de no poder hacer más que reclamar al guardia de la recepción y que terminará en nada.

¿Qué hace el poderoso?

Llamará a su asesora que hablará en términos técnicos con un funcionario, si le va mal hablará con el jefe del área, la directora Regional, el subdirector de Fiscalización, y si es necesario incluso irá a denunciar esta agraviante e indignante situación al director Nacional.

¿Es justo que los ciudadanos de a pie no tengan quién los oriente y apoye de buena fe al interactuar con el burocrático mundo de los impuestos?

En mi opinión, no es justo.

Negar a los chilenos y chilenas la opción de una Defensoría del Contribuyente por temor a que se sugieran conciliaciones en lugar de juicios (para quienes pueden pagar un abogado), o se ponga en conocimiento de la jerarquía superior del SII circunstancias objetivas de abuso de los derechos de los contribuyentes para que éstos sean remediados, no es sino validar tácitamente la cultura del lobby que tenemos hoy donde sólo unos pocos poderosos con privilegios pueden acceder a la real justicia tributaria.

Dejando de lado la ironía que una parte del Estado le tema a otra parte del Estado (algo así como Economía versus Hacienda), creo que es hora de decir basta a la cultura de la judicialización innecesaria, basta al temor a procesos reglados y basta al temor a la rendición de cuentas. Si no es por Chile, al menos por la Ocde que también recomienda esta institución.

Como diría Coke, Chile se merece una Dedecon

**4.41 Consideraciones financieras del proyecto tributario**

*25 de septiembre de 2018, columna de Mario Arend, jefe de Estudios de la Dirección de Presupuestos, disponible en* [*https://www.df.cl/noticias/opinion/columnistas/mario-arend/consideraciones-financieras-del-proyecto-tributario/2018-09-24/184239.html*](https://www.df.cl/noticias/opinion/columnistas/mario-arend/consideraciones-financieras-del-proyecto-tributario/2018-09-24/184239.html)

La ciudadanía confió en el Presidente Sebastián Piñera el mandato que apunta a incentivar el crecimiento, inversión, emprendimiento y empleo, para llevar a Chile hacia el desarrollo y superación de la pobreza. Una de las herramientas claves para el logro de este objetivo es el proyecto de Modernización Tributaria, que tiene la virtud de mantener un equilibrio de las finanzas públicas.

En materia de crecimiento, el proyecto contiene cuatro medidas principales: (i) un sistema de tributación basado en retiros efectivos e integración total del impuesto corporativo y personal, lo que disminuye el costo de uso de capital, (ii) un régimen transitorio de depreciación instantánea para el 50% de la inversión en maquinaria y construcción, y el 50% restante con un régimen de depreciación acelerada, (iii) una extensión del crédito especial del IVA para la construcción de viviendas de hasta 4.000 UF, y (iv) la reducción del plazo de devolución del IVA soportado en la adquisición de activos fijos.

Si bien, tenemos el convencimiento de que estas medidas permitirán un mayor crecimiento económico, que estimamos entre 0,6% y 0,8% del PIB anual, y en consecuencia significarán una mayor recaudación fiscal, de forma conservadora preferimos no incorporar este supuesto en nuestro informe financiero. De todos modos, como referencia, por cada punto porcentual de mayor crecimiento, los ingresos fiscales se pueden incrementar en 0,2% del Producto Interno Bruto (PIB).

El informe financiero contempla una moderada mayor recaudación de 0,1% del PIB, con una contribución negativa de 0,2% del PIB por integrar los impuestos corporativos y personal, y una contribución positiva de 0,3% del PIB por la incorporación de la boleta electrónica obligatoria, y adicionalmente mayor recaudación por medidas transitorias.

Hay que destacar que la menor recaudación que se genera por la integración del sistema tiene la cualidad de beneficiar a todas las empresas que tributan actualmente en el régimen semi integrado, donde aproximadamente el 90% son empresas pequeñas, con ventas menores a las 50.000 UF. Asimismo, la integración del sistema tributario beneficiará especialmente a los propietarios de estas empresas, quienes actualmente se ven afectados con una sobre tasa de impuesto a todo evento de 9,45% por los retiros que realizan, donde según datos de la operación renta de este año un 85% de las personas se encontraban en alguno de los tres primeros tramos de menores ingresos del impuesto global complementario.

Respecto de la recaudación por la obligatoriedad de la boleta electrónica, los 0,3% del PIB de menor evasión se obtienen tomando como referencia la experiencia en el uso de los vouchers de Transbank como boleta, considerando el efecto sobre una muestra completa, donde, de acuerdo a los datos del SII, en torno a un 10% de menor evasión se da para las micro y pequeñas empresas, y en el caso de empresas de mayor tamaño asumimos una menor evasión de 5% para empresas medianas y de 1,5% para empresas grandes. Se debe considerar que la mayor recaudación se daría tanto por un aumento en la base del IVA como del impuesto a la renta.

No es de extrañar que el Fondo Monetario Internacional haya reconocido que “varias medidas, como el retorno a un sistema impositivo único y totalmente integrado, la depreciación acelerada y un reembolso más rápido del IVA, deberían impulsar la inversión y el crecimiento en general”, y celebrado el compromiso del gobierno que el proyecto se financie por completo.

**4.42 Gastos deducibles: reglas claras, buena fe y claridad**

*27 de septiembre de 2018, columna de Jaime del Valle, abogado de la Universidad Católica, disponible en* [*https://www.df.cl/noticias/opinion/columnistas/gastos-deducibles-reglas-claras-buena-fe-y-claridad/2018-09-26/123218.html*](https://www.df.cl/noticias/opinion/columnistas/gastos-deducibles-reglas-claras-buena-fe-y-claridad/2018-09-26/123218.html)

Como parte de los importantes aportes que hace el proyecto de ley de modernización tributaria en materia de seguridad jurídica, encontramos la actualización del concepto de gastos que resultan deducibles para una empresa.

La Ley de la Renta grava el incremento patrimonial que obtiene una persona, su renta, razón por la cual los ingresos que obtiene deben depurarse antes de ser gravados, rebajando sus costos y gastos asociados, a efectos de tributar únicamente sobre lo que representa realmente una utilidad.

Actualmente, entre otros requisitos, la LIR exige genéricamente que los gastos sean necesarios para producir la renta. Por su parte, con la venia de los tribunales superiores, el SII ha interpretado lo anterior en el sentido el gasto debe relacionarse con el giro del contribuyente; ser indispensable o contrapuesto a lo superfluo, y debe ser inevitable u obligatorio en cuanto a su monto y naturaleza.

Producto de la expansiva interpretación anterior, se han apreciado en la práctica ejemplos -aún cuando aislados- que parecieran no ajustarse a una realidad económica ni razonable expectativa de un contribuyente actuando de buena fe en el interés de su negocio, derivando incluso en algunos casos en una aparente intención del SII en modelar conductas, estándares de comportamiento o decisiones financieras con ocasión de la verificación de deducibilidad de un desembolso.

Por ejemplo, bajo los criterios actuales, se ha cuestionado en casos un interés asociado a un endeudamiento al tener la posibilidad la empresa de ser capitalizada. Se permitió deducir como gasto la reunión-almuerzo de un directorio de una empresa, pero no el vino, porque el alcohol no sería necesario para producir la renta (¿a diferencia de una bebida de fantasía?). A ratos pareciera estar prohibido a las empresas equivocarse, fallar, ya que cualquier pago que realicen por un incumplimiento contractual (i.e. multa por atraso), resarcir a un cliente por un error involuntario, será considerado gasto rechazado. Tampoco podría deducirse un bono pagado a un trabajador por su desempeño extraordinario en un año determinado. Sólo lo sería si se beneficia con el mismo bono a todos los trabajadores o si la empresa se obliga contractualmente en forma permanente.

El proyecto, en un afán de reconocimiento de la realidad económica actual y ciertamente dar mayor certeza jurídica al contribuyente y al SII, define los criterios que deben ser evaluados al respecto, tomando los resguardos necesarios para evitar abusos y encausar el correcto comportamiento de los contribuyentes. Incluye, entre otros, la posibilidad de pagos voluntarios y extraordinarios, siempre y cuando se relacionen directa o indirectamente con las actividades del contribuyente, tengan causa lícita y exigiéndose su acreditación con medios idóneos dependiendo del acto que corresponda.

El aporte modernizador y consistente con la realidad de los negocios es evidente. La certeza promueve un correcto cumplimiento de la obligación tributaria y un esperable trabajo conjunto entre contribuyentes y SII, quienes no son ni deben ser contrapartes cuando impera la buena fe. Independiente de la legítima y esperable discusión parlamentaria acerca de los criterios de deducibilidad y resguardos necesarios proteger el interés fiscal, se aprecia un avance ineludible para que los contribuyentes confíen en que los desembolsos que efectúen en interés de sus negocios cumpliendo con los necesarios resguardos serán considerados al momento de determinar sus rentas, gravándose así únicamente su verdadero incremento patrimonial.

**4.43 Algunas impresiones en torno al debate tributario**

*27 de septiembre de 2018, columna de Christian Aste, socio de VLA, disponible en* [*https://www.df.cl/noticias/opinion/columnistas/algunas-impresiones-en-torno-al-debate-tributario/2018-09-25/092705.html*](https://www.df.cl/noticias/opinion/columnistas/algunas-impresiones-en-torno-al-debate-tributario/2018-09-25/092705.html)

El 12 de septiembre el gobierno inició el trámite legislativo del proyecto de modernización tributaria, iniciativa sobre la cual se ha debatido bastante las últimas semanas con posturas a favor y en contra de los cambios propuestos.

El contexto donde se inicia esta discusión es un esquema tributario que es, a todas luces, inconstitucional. Un botón de muestra: nadie todavía ha sido capaz de explicar por qué actualmente si una empresa está organizada bajo una estructura jurídica determinada tiene que pagar un 27% y su dueño, por la riqueza que retira o distribuye, un 44,45%, en circunstancia que otro, con ingresos equivalentes pero estructurado de otra forma, paga un 25% y cuando retira esa utilidad un 35%. Esa diferencia la ley no la establece en función de los ingresos que se obtengan ni en base al monto que se retira, sino que es consecuencia directa de la forma en cómo la sociedad está estructurada, lo que es inconstitucional.

Un principio base es la igualdad. No es justo ni equitativo que ante una misma riqueza unos paguen 35% y otros 44,45%. Menos que se diga que quienes pagan 35% son las PYME, cuando se sabe que el régimen que se estableció en beneficio de ellas está condicionado primero a que no sean sociedades anónimas ni estén constituidas por personas jurídicas, lo que deja fuera a una gran cantidad de PYME. Además, para que las sociedades que cumplen con los requisitos referidos puedan acogerse al régimen 14 ter se exigía que hicieran un pago de impuestos. Eso explica que muchas PYME no optaran por el 14 ter y paguen en vez de un 25% un 27% en la empresa, y que sus retiros estén sujetos a una tasa máxima de un 44,45% y no de un 35%. El proyecto que impulsa el actual gobierno se hace cargo de esta desigualdad, ya que para acogerse a la "Claúsula Pyme" no hay condición de pago y este sistema no se acota a una estructura jurídica determinada. Por el solo ministerio de la Ley, las PYME pagarán un 25% y cuando sus dueños hagan retiros su tasa máxima será de 35%.

Con la modernización tributaria, las PYME además tendrán derecho a depreciación instantánea y podrán optar por registrar sus ingresos cuando los perciben y sus gastos cuando los paguen. Esto es un avance notorio y resulta aún más beneficioso para aquellas empresas que siendo PYME registran ingresos por menos de 10.000 UF anuales, porque si están en esa situación, en base a la información que el SII tiene, no pagarán la tasa del 25%, sino directamente la tasa que corresponda en su Global Complementario, que puede ser menor a ese porcentaje. Eso es muy positivo y además liberará a los fiscalizadores de revisiones menores y que no reditúan, y a los contadores del tiempo que utilizan para llevar registros, que ahora se eliminan. Evidentemente esto no puede concebirse como un acto elusivo, ya que supone información proporcionada por el mismo SII y porque para acogerse a esa norma, es condición no registrar otros ingresos.

Con la propuesta tributaria del gobierno los contribuyentes ya no estarán obligados a llevar varios registros y, por lo tanto, a contratar sistemas tecnológicos para operarlos. Esto, porque con la modernización no será necesario llevar ningún registro -cuando no se tienen ingresos exentos o no rentas-, y solo será necesario confeccionarlos si se quiere demostrar que la utilidad se imputó a capital.

En el debate de las últimas semanas, ha habido mucho desconocimiento, lo que incluso resulta sorprendente en algunos casos de personas que se suponen manejan los temas tributarios. Se ha dicho que la boleta electrónica no va a recaudar nada, cuando al ser electrónica se evita traspasar manualmente los registros a los libros de compra y venta, oportunidad en la que se produce evasión. Además, con esta medida se ahorra tiempo y esfuerzo en el timbraje de documentos, se disminuyen los puntos de falla en la venta y se mantiene el control actualizado de las ventas diarias. Los consumidores sabrán, además, cuánto es lo que pagan de IVA y, por lo tanto, tendrán mayor conciencia en la exigencia del documento.

Algunos han cuestionado también la creación de la Defensoría del Contribuyente, que está orientada precisamente a favorecer a los que menos tienen y que no acceden a la asesoría de las consultoras, cumpliéndose de ese modo un principio de equidad evidente.

Me parece que salvo que se quiera legislar desde el resentimiento -y no se quiera reconocer que el proyecto planteado por el gobierno modifica para bien y para el largo plazo el enredado e injusto sistema actual-, este proyecto debiera ser aprobado por el bien del país.

**4.44 Reforma Tributaria: las cartas sobre la mesa**

*28 de septiembre de 2018, columna de Sergio Espejo, disponible en* [*http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2018/09/28/reforma-tributaria-las-cartas-sobre-la-mesa/*](http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2018/09/28/reforma-tributaria-las-cartas-sobre-la-mesa/)

Un buen régimen tributario recauda recursos y permite redistribuir riqueza, a la vez que evita imponer cargas irracionales a la actividad económica. Es un ejercicio complejo, pero no imposible, de lo que el Presidente Aylwin llamaba “crecimiento con equidad”. Por lo mismo, conversar en serio sobre el proyecto de modernización tributaria es un imperativo ético político, además de un desafío técnico.

En una columna anterior argumenté mi acuerdo con la integración tributaria como un instrumento probado para asegurar lo que se conoce como equidad horizontal. Quienes reciben los mismos ingresos deben pagar los mismos impuestos. Recordé, no está de más, que eso es lo que proponía la reforma tributaria original de Bachelet-Arenas. Sostuve en esa misma columna que hay medidas simples para asegurar que además el proyecto sea progresivo: exigir tributar a la compra y venta habitual de acciones y elevar el impuesto global complementario a las personas de mayores ingresos, como ha propuesto en este último caso el propio presidente de la CPC.

El proyecto estimula la inversión al establecer el 50% de depreciación instantánea como régimen general y un 100% en el caso de La Araucanía. No comparto la diferencia. La depreciación instantánea de un 100% debiera ser la regla general para estimular la inversión en capital físico.

En la práctica, cada uno de estos contribuyentes tendrá una especie de renta presunta establecida centralizadamente por el SII, el que calculará márgenes de rentabilidad por empresas, sectores y tipos de industrias. Sí, lo leyó correctamente. El mismo servicio acusado de debilidades y arbitrariedades que llevan al Gobierno a proponer la creación de un defensor del contribuyente, es el que al mismo tiempo recibe el encargo – cual moderna expresión del Leviatán– de calcular este amplio abanico de rentabilidades. Como el cálculo será realizado por el SII, resulta fácil imaginar que los contribuyentes optarán por la declaración que les propone el organismo cuando su rentabilidad sea mayor a esta y por una declaración elaborada por ellos cuando su rentabilidad sea inferior a la propuesta.

Veo también defectos importantes en la reforma.

En primer lugar, ella no se hace cargo del consenso creciente sobre la necesidad de terminar con la renta presunta. Peor aún, el proyecto crea un raro sistema, parecido a la renta presunta, para empresas que tengan ingresos anuales menores a 10 mil UF. Para todas ellas, cerca de un 75% de los contribuyentes, se abre un sistema de tributación simplificada sobre la base de una propuesta de declaración de impuestos elaborada por el Servicio de Impuestos Internos y al que se podrá optar voluntariamente. Argumentan los proponentes que es un sistema “pro pyme”.

En la práctica, cada uno de estos contribuyentes tendrá una especie de renta presunta establecida centralizadamente por el SII, el que calculará márgenes de rentabilidad por empresas, sectores y tipos de industrias. Sí, lo leyó correctamente. El mismo servicio acusado de debilidades y arbitrariedades que llevan al Gobierno a proponer la creación de un defensor del contribuyente, es el que al mismo tiempo recibe el encargo – cual moderna expresión del Leviatán– de calcular este amplio abanico de rentabilidades.

Como el cálculo será realizado por el SII, resulta fácil imaginar que los contribuyentes optarán por la declaración que les propone el organismo cuando su rentabilidad sea mayor a esta y por una declaración elaborada por ellos cuando su rentabilidad sea inferior a la propuesta.

Renta presunta, planificada centralizadamente por el organismo del cual el proyecto declara desconfiar, diseñada para amparar la elusión. Parece ciencia ficción.

Por otro lado, el proyecto profundiza en uno de los aspectos más cuestionados del proyecto tributario de Bachelet-Arenas: el perdonazo para la repatriación de capitales mantenidos ilegalmente fuera de Chile. Como diputado fui minoría al oponerme a esta triquiñuela vergonzosa. Resulta incomprensible, sin embargo, que el ministro Larraín proponga la prórroga de este perdonazo. ¿Acaso no sabe, el ministro, que Chile hoy forma parte del Acuerdo Multilateral para el intercambio automático de información sobre cuentas financieras, precisamente para evitar prácticas como las que el proyecto busca regularizar? Increíble. ¿La derecha y la izquierda unidas jamás serán vencidas?

El debate recién se inicia. En un país hambriento de debate público de calidad, basado en evidencia, orientado al bien común, la discusión sobre nuestro sistema tributario puede no solo contribuir al bienestar e impulsar al emprendimiento. Es además una oportunidad para reconectar a la política con las personas, a nuestra democracia y sus instituciones con la ciudadanía.

Eso exige poner todas las cartas sobre la mesa.

1. Fuente: Mensaje 107-366 Proyecto de le que moderniza la legislación tributaria, boletín 12.043-05, Pág. 3, disponible en sitio web de la Cámara de Diputados de Chile, <https://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=12561&prmBoletin=12043-05> [↑](#footnote-ref--1)
2. La presentación completa del Ministro en formato PPT se encuentra disponible en <https://www.camara.cl/trabajamos/comision_listadodocumento.aspx?prmID=407> [↑](#footnote-ref-0)
3. La presentación completa actualizada del Ministro en formato PPT y el documento completo presentado por los diputados se encuentra disponible en <https://www.camara.cl/trabajamos/comision_listadodocumento.aspx?prmID=407> [↑](#footnote-ref-1)
4. Fuente: Programa de Gobierno de Sebastián Piñera E., Pág. 16, disponible en <http://www.sebastianpinera.cl/images/programa-SP.pdf> [↑](#footnote-ref-2)
5. Ídem. Pág. 30 [↑](#footnote-ref-3)
6. Ídem. Pág. 41 [↑](#footnote-ref-4)
7. Fuente: Mensaje 107-366 Proyecto de le que moderniza la legislación tributaria, boletín 12.043-05, Pág. 2, disponible en sitio web de la Cámara de Diputados de Chile, <https://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=12561&prmBoletin=12043-05> [↑](#footnote-ref-5)
8. Ídem. Pág. 5-6 [↑](#footnote-ref-6)
9. Ídem. Pág. 6-8 [↑](#footnote-ref-7)
10. Ídem. Pág. 8-10 [↑](#footnote-ref-8)
11. Ídem. Pág. 10-12 [↑](#footnote-ref-9)
12. Ídem. Pág. 12 [↑](#footnote-ref-10)
13. ídem. Pág. 12-13 [↑](#footnote-ref-11)
14. Ídem. Pág. 13-15 [↑](#footnote-ref-12)
15. Ídem. Pág. 16-52 [↑](#footnote-ref-13)